CARLOS ILLADES

VUELTA A LA IZQUIERDA

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO:
DEL DESPOTISMO OLIGÁRQUICO A LA TIRANÍA DE LA MAYORÍA



OCEANO

CARLOS ILLADES

VUELTA A LA IZQUIERDA

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO: DEL DESPOTISMO OLIGÁRQUICO A LA TIRANÍA DE LA MAYORÍA



OCEANO

Vuelta a la izquierda

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO: DEL DESPOTISMO OLIGÁRQUICO A LA TIRANÍA DE LA MAYORÍA

Carlos Illades

OCEANO

Para Esteban

Lo mismo que un arquitecto antes de levantar un gran edificio observa y sondea el terreno para ver si puede soportar el peso de aquél, así el sabio legislador no comienza por redactar buenas leyes en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo al cual las destina está preparado para recibirlas.

ROUSSEAU

PRÓLOGO

El 1 de julio de 2018 ocurrió lo que parecía imposible seis u once años atrás: Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. La oferta que sedujo a jóvenes y viejos, a clases populares y medias, al sur, el norte y el centro del país fue "un cambio verdadero", cambio que ofrecieron otras fórmulas opositoras sin despertar ningún entusiasmo en el electorado. En el primer aniversario de la elección, el presidente tabasqueño confirmó a La Jornada que la transformación anunciada estaba en marcha: "No es el mismo gobierno, la misma política económica, no fue un simple cambio de gobierno; es un cambio de régimen". "El periodo neoliberal", abolido por decreto en marzo de 2019 por el jefe del Ejecutivo entre vítores y aplausos de los asistentes al Foro Nacional "Planeando Juntos la Transformación de México", era historia pasada.

No debemos confundir, sin embargo, los buenos deseos con los hechos, como tampoco minimizar el significado de la victoria de López Obrador. Transformar un régimen fundado hace noventa años, o desterrar el neoliberalismo implantado en el país en la década de los ochenta del siglo XX, no es algo que pueda hacerse en pocos meses, ni es posible cancelarlo en un acto proselitista. Si fuera así, muchos gobiernos copiarían el procedimiento. Las bases corporativas y clientelares del régimen de la Revolución mexicana permanecen todavía en pie, y el capitalismo desregulado (neoliberal) domina la economía mundial de manera tan abrumadora que un solo país, con mayor razón si es periférico, está imposibilitado para sustraerse por sí mismo de sus reglas, a lo más está en condición de reducir los costos y obtener algunos beneficios en caso de saber emplearlas. Esto no equivale a afirmar que nada puede hacerse o que el proyecto del nuevo gobierno está condenado de antemano al fracaso. Por el contrario, la legitimidad obtenida por López Obrador en las urnas lo coloca en una condición privilegiada para emprender reformas profundas e indispensables para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, atajar la descomposición que corroe a México y orientarlo en una dirección viable.

Estamos ciertos que el índice del presidente tabasqueño apunta hacia problemas genuinos (corrupción, desigualdad, inseguridad, injusticia, pobreza, debilidad estatal, falta de inversión pública, etcétera). La discrepancia estriba en aceptar

que las soluciones que plantea sean las adecuadas. ¿Queremos un Estado más grande y poderoso? Depende en qué: si es para proteger a los ciudadanos y controlar el territorio cedido al crimen, ofrecer servicios básicos dignos, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, redistribuir el ingreso, permitir la autonomía de la sociedad civil (comunidades, asociaciones, sindicatos), imponer una fiscalidad justa que beneficie la equidad, conservar el ambiente, administrar las empresas estratégicas, preservar la soberanía nacional y ofrecer las condiciones para el ejercicio de las libertades fundamentales y de una democracia sustantiva, no dudamos en decir que sí. Pero si es para que el Estado irrumpa en la vida privada, sustituya la función económica de las empresas particulares y de capital social, limite libertades, mengüe su laicidad, socave tanto las instituciones como la división de poderes y los órdenes de gobierno, desatienda renglones que no considere prioritarios (cultura, ciencia, artes, ambiente, deporte) en aras de una austeridad mal entendida, la respuesta es un rotundo no.

Hasta el momento el gobierno de López Obrador es de claroscuros. Tiene en su haber el incremento sustancial de los salarios mínimos, la promulgación de una reforma laboral que mejora las condiciones de negociación de los trabajadores y permite la libre afiliación sindical, programas sociales que atienden a segmentos considerables de la población desvalida y el combate al robo de combustible. El déficit está en la seguridad, el anacronismo de su proyecto económico, el debilitamiento de las condiciones de operación técnicas y financieras de la administración pública, y la merma de los contrapesos al poder presidencial. Aunque es una obviedad, no está de más repetir que el indispensable fortalecimiento del poder público no equivale a reforzar el presidencialismo, ni la recuperación de la rectoría estatal deberá ocurrir en desmedro de la sociedad civil. Antes bien, lo deseable sería apuntalar aquél con la intervención activa, libre e informada de una sociedad civil democrática, robusta y exigente. Eso llevará tiempo, implica desmontar estructuras de dominación, cooptación y control fuertemente acendradas en la sociedad y Estado mexicanos. Y no sabemos si el gobierno obradorista pretenda hacerlo, o busque servirse de un sistema caduco para instrumentar su proyecto y consolidar una nueva hegemonía política.

La oportunidad de transformar el país existe, López Obrador la tiene mucho más a la mano que las administraciones de la alternancia precedentes —si es que éstas acaso se lo plantearon. La exigencia de hacerlo también es grande, de acuerdo con el mandato electoral de 2018. La urgencia de llevarlo a cabo es

evidente, como muestran los sucesos diarios de lo ocurrido en territorio nacional. Los costos de no hacerlo serían elevadísimos, para el país y para la izquierda como fuerza política que, después de mucho tiempo, varios intentos y múltiples bloqueos del poder financiero y político, logró gobernar.

A los tres meses de la gestión del presidente tabasqueño su popularidad alcanzó la cresta de la curva, pero a los siete había descendido 11 puntos porcentuales su nivel de aprobación. Si bien las bases partidarias y los sectores populares mantienen su lealtad a López Obrador, ponderando la confianza en el líder por encima de la calificación de sus políticas, parte de las clases medias que votaron por él ante la falta de opciones ofrecidas por la derecha muestran la desaprobación respecto de varias políticas de la nueva administración, sobre todo en economía y algunas en materia social (por ejemplo, la cancelación de recursos para las estancias infantiles). No obstante, la popularidad del presidente tabasqueño se mantiene bastante elevada, dado que dos tercios de la población lo apoyan todavía.

Lamentablemente, la primavera no dura todo el año, menos un sexenio entero. Y la premura con que López Obrador comprometió los recursos públicos le redujo apreciablemente el margen de maniobra económica en unos cuantos meses y agotó su oferta social demasiado pronto. Sostenerla implicará sacrificar todavía más los rubros objeto de elevados recortes (salud, ciencia, medio ambiente, educación y cultura) o realizar una reforma fiscal que aumente las contribuciones de las clases medias y altas, además de gravar la economía informal. Esto permitiría una mayor recaudación, a la vez que redundaría en la disminución de la popularidad presidencial y podría detonar la confrontación de López Obrador con el gran capital, escéptico de por sí con su manejo económico, y propiciaría la desafección de nuevos segmentos de la clase media hacia la Cuarta Transformación. En consecuencia, el presidente tabasqueño concentraría la adhesión a su proyecto en los beneficiarios de los programas sociales y en las bases morenistas, tal vez suficientes para gobernar, si bien en minoría.

López Obrador ha dicho que quiere llevar a cabo vertiginosamente la Cuarta Transformación para atajar la posibilidad de que sus adversarios "conservadores" la reviertan. A menos que tenga razones fundadas para contemplar la eventualidad de no concluir el mandato, el presidente tabasqueño plantea mal el problema y postula una solución inadecuada. La durabilidad y consistencia de las políticas sociales no dependen de su pronta ejecución, peor si

ésta se efectúa de manera defectuosa o sin fondos suficientes y renovables. Ambas están vinculadas con la institucionalización de estas políticas, lo que pone en juego la configuración de un Estado social o de bienestar, sustentado en un consenso social amplio, que funcione con independencia de los partidos que gobiernen y sea lo más neutro e impersonal posible.

Si algo han mostrado la ruptura del consenso neoliberal y la emergencia de los llamados populismos y de la derecha posfascista, es la insatisfacción con el statu quo de las masas populares y de las clases medias amenazadas con descender en la escala social. Mientras el discurso liberal habla de inclusión en todos los ámbitos, el capitalismo desregulado produce sistemáticamente grandes contingentes de excluidos y de trabajadores precarios, ejércitos de desocupados o subempleados de los que recurrentemente se alimenta la economía criminal. López Obrador hace muy bien en ofrecer oportunidades para que los jóvenes en situación de vulnerabilidad no sean absorbidos por la empresa criminal, pero mejor haría asegurando derechos, condiciones e instituciones eficientes que permitieran a estos jóvenes, a los indígenas, y a los adultos mayores y madres solteras que también ocupan su atención, llevar una vida digna. El presidente tabasqueño, dado el fuerte consenso que lo respalda, está en condiciones de hacerlo, lo que no sabemos es si la opción enunciada esté siquiera en su horizonte.

El mapamundi político contemporáneo registra el ascenso de las derechas radicales y la merma de las izquierdas emergentes. Syriza (Grecia) y Podemos (España) desdoblaron la expectativa de los jóvenes, un tanto menos dentro de la vieja izquierda, porque parecía que estas fuerzas políticas habían superado el trauma de la derrota histórica con la que cerró la izquierda el siglo pasado, ofreciendo un programa renovado. Lo que observamos actualmente es el retorno de los partidos tradicionales en aquellos países, a la derecha y la izquierda, respectivamente, y las ilusiones perdidas de quienes consideraron que los partidos presididos por Alexis Tsipras y Pablo Iglesias representaban una alternativa creíble a la globalización neoliberal. Los llamados progresismos o populismos latinoamericanos están en retirada y acusan el descrédito. El gobierno de López Obrador corre a contramano de la tendencia global de la izquierda hacia la baja, combinado con el ascenso de las derechas radicales en Estados Unidos, Brasil, Italia y Francia, en menor medida en España y Alemania, además de gobiernos autoritarios en Hungría, Filipinas, India, Turquía y Rusia, entre reiterados ejemplos en distintas geografías, genéricamente denominados populistas, pero con diferencias significativas que ameritan una

conceptualización más fina. El eventual fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación conllevaría el peligro de que brotaran en México estas derechas, que han permanecido inexistentes o imperceptibles hasta ahora. No es un pronóstico, es una posibilidad.

Emplazado en la izquierda, este volumen somete al escrutinio de la historia del presente el proceso que condujo a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, las decisiones y políticas más importantes desarrolladas hasta ahora, los presupuestos de las decisiones del presidente tabasqueño, las fuentes a ratos decimonónicas de su ideología y el estilo populista de su forma de gobernar, los énfasis de la administración obradorista y su percepción del conflicto social, la genealogía histórica en la que se inscribe la Cuarta Transformación, y las oportunidades y limitaciones de un gobierno de izquierda en el mundo actual. El libro pretende realizar una crítica constructiva y documentada de un proceso en curso y, por tanto, enmendable o perfectible, según desde donde queramos evaluarlo. Considero que hay muchas cosas en juego para el futuro del país en estos años, desencadenadas por un cambio de orientación en la gestión de lo público que muchos juzgamos necesario e inaplazable. No quise dejar pasar la oportunidad de compartir mi reflexión con los lectores, sin ánimo de convencerlos, antes bien con el propósito de contribuir a que elaboren sus propias conclusiones.

Chapultepec, diciembre de 2019

1

LA PRIMAVERA MEXICANA

Acostumbrado a hablarle de tú a la posteridad, José López Portillo se consideró el "último presidente de la Revolución". Lo dicho a Proceso en 1992 sonó al epitafio del régimen instituido por la lucha armada. Su sucesor, Miguel de la Madrid, giró el timón hacia la globalización, decidiendo la "disputa por la nación" en favor del proyecto neoliberal. Las políticas de ajuste económico —traducidas en rebajas salariales, despidos, austeridad y desempleo—, la ineptitud y corrupción gubernamental desnudadas por el terremoto de 1985, el crack bursátil un par de años adelante y la designación del sucesor del presidente de la "renovación moral" complicaron extremadamente el relevo presidencial de 1988. Con un fraude electoral, soslayado por los medios informativos y la intelligentsia liberal, Carlos Salinas de Gortari llegó al poder e implementó la primera generación de las reformas estructurales —desregulación económica, privatización de las empresas públicas, apertura a la inversión extranjera en industrias estratégicas—, cerrando su gestión con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), asesinatos políticos no esclarecidos y una rebelión indígena en Chiapas. A escasos días de haber dejado la presidencia, Salinas de Gortari responsabilizó a Ernesto Zedillo Ponce de León del "error de diciembre", frase recordada de este presidente que también se tuteaba con la historia.

La alternancia política llegó en 2000, por la derecha. Las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) fueron incapaces, o carecieron de voluntad, para transformar el régimen político y contender con los problemas sociales derivados o acrecentados por la globalización. Aparte del "bono democrático", Vicente Fox dispuso de las mejores condiciones en mucho tiempo para el despegue económico del país —petróleo a más de 100 dólares el barril, las remesas de los migrantes en máximos históricos y los ingresos por turismo también considerablemente elevados— y no hizo más que dilapidarlos, incrementando el volumen y los salarios de la alta burocracia, repartiendo dinero a los opacos gobiernos de los estados, amén de dejar intacto el régimen priísta pese a las

bravuconadas que hacía pasar por ideas en el olvidable sexenio “del cambio”. Felipe Calderón, tan pronto se sentó en la silla que conquistó con tantas dificultades y el escepticismo de un tercio de la ciudadanía, embarcó al país en una guerra perdida de antemano, multiplicando la violencia a los niveles de hacía un siglo. México, que en 2000 disputaba con Brasil y Corea del Sur el noveno lugar de la economía mundial, cedió terreno frente a las potencias emergentes ubicándose en decimocuarto sitio al final del ciclo panista.

Enrique Peña Nieto ganó la presidencia cobijado por su partido, la televisión privada y la Iglesia. A diferencia de su belicoso antecesor, el exgobernador mexiquense concertó un pacto. Los interlocutores políticos del golden boy de Atlacomulco fueron las desprestigiadas dirigencias del PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes afianzaron sus posiciones partidarias respaldadas por Los Pinos. La guerra contra el crimen organizado dejó de ser el eje del discurso público, concentrándose la administración priísta en la nueva generación de reformas estructurales —energética, educativa, de telecomunicaciones y fiscal—, negociadas expeditamente con aquellos partidos, pero sin un consenso social suficiente. Esto haría movilizarse por el resto del sexenio al magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, por oponerse públicamente a ella, costaría la cárcel a la lideresa del gremio Elba Esther Gordillo bajo los endebles cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En su segundo informe a la nación, Peña Nieto anunció la obra magna de su sexenio, el aeropuerto en el lecho del lago de Texcoco. Pocas voces de los medios informativos cuestionaron la viabilidad técnica de la obra, su costo desmesurado y menos aún repararon en el posible daño ecológico o en el parecer de las comunidades afectadas. Si el TLCAN fue el pasaje de México al primer mundo, un aeropuerto de “clase mundial” consumaba para las élites nacionales la fantasía de haber llegado a él.

Todo marchaba sobre ruedas en el sexenio que se propuso “mover a México”, cuando a 200 kilómetros de la capital el crimen organizado, en colusión con las fuerzas policiales, y ante la mirada impávida si no es que cómplice del ejército, “desapareció” a 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, de paso por Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Como pólvora, el acontecimiento se difundió en las redes sociales y la noticia circuló por todo el globo. A apenas un mes del acontecimiento, una investigación periodística reveló el tráfico de influencias que permitió a la pareja presidencial hacerse de una lujosa casa en las Lomas de Chapultepec. Por añadidura, a la mitad de la gestión peñista se hicieron públicas las abultadas y súbitas fortunas

de varios gobernadores pertenecientes a su partido, que superaban con creces a las de sus abusivos antecesores. Peña Nieto, más una construcción mediática que un político con credenciales, no resistió el vendaval, pese a haber ganado la imagen de negociador con el Pacto por México, además de silenciar la guerra y la corrupción, así como camuflar su incompetencia. Odebrecht, el caso de corrupción que estremeció a la clase política del continente americano, no capturó a ningún pez gordo mexicano en las aguas turbias de la impunidad.

En este contexto, la promesa de encarcelar a los gobernadores salientes se convirtió en eslogan de las campañas en la elección intermedia de 2015, e incluso en un arrebato efectista el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República ofreció en 2018 poner tras las rejas a Peña Nieto. El crecimiento económico promedio del sexenio peñista fue de 2.5% anual, si bien mayor que el paupérrimo 1.39% de la administración de Calderón, pero de todos modos muy por debajo no sólo de las necesidades del país, sino de las expectativas producidas por las reformas estructurales. También, pero para mal, el gobierno priísta rebasó los índices de violencia de la segunda administración del PAN. Al final del mandato del presidente mexiquense, el país había descendido dos escalones del ranking de la economía mundial, situándose en el lugar 16. Y, en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, México se instaló en el lugar 135, al lado de Honduras y Paraguay.

Mientras que el descontento respecto del statu quo se cebó en la alternancia misma, la cual no respondió a las expectativas de cambio acendradas en la sociedad, el punto de quiebre, de no retorno, fue Ayotzinapa. La Noche de Iguala demolió la narrativa oficial de que México avanzaba sin trabas hacia una nueva fase de la modernización, tras agotarse el impulso de la primera batería de reformas neoliberales. Antes bien, salieron a la luz los vínculos de la clase política con el submundo criminal y un Estado disfuncional, autoritario, corrupto, inobservante de los derechos humanos e insensible con las víctimas de la violencia: del otrora Ogro filantrópico solamente quedaba su cara más desagradable. La protesta pública en los siguientes tres meses fue continua e interclasista, reuniendo a personas y grupos de procedencia diversa, pero que identificaban unívocamente al Estado como responsable de la desaparición de los estudiantes. Para algunos jóvenes de escuelas públicas y privadas las movilizaciones por Ayotzinapa significaron su socialización política. Algo así como lo fue el terremoto de 1985 para la generación de sus padres.

Cuando arreció la protesta pública contra las reformas estructurales y por la

presentación con vida de los estudiantes normalistas, Andrés Manuel López Obrador estaba en una magnífica posición para capturar el descontento con el descarrilamiento de la transición democrática por parte de Fox, la guerra insensata de Calderón y el desvergonzado saqueo de las arcas nacionales a manos del “nuevo PRI”.

El fenómeno AMLO

Emmanuel Macron, Mauricio Macri o Vicente Fox son la personificación del Homo economicus. Con una visión gerencial de la función pública, asumen que el Estado está al servicio del mercado, que el hombre mismo está atado a fines económicos y, en consecuencia, es sacrificable a ellos, que los trabajadores son “capital humano”, esto es, no son sujetos sino cosas. Por su parte, Lula, José Mujica y López Obrador encarnan la figura antitética del Homo politicus, que subordina la economía a la política, pondera el bien común sobre el beneficio individual y que justo ve en la promoción de aquél el cometido del Estado. En esto, y contra su idea de sí, el tabasqueño es más republicano que liberal. Y, también por lo mismo, su biografía no puede ser sino política.

López Obrador realizó una discreta formación profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, donde se tituló en 1987 como licenciado en Ciencia Política con la tesis Proceso de formación del Estado nacional en México, 1824-1867. El joven de Macuspana no hizo carrera en el sector privado; temprano se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su trayectoria en el sector público estuvo siempre ligada a la política social, permitiéndole un contacto continuo con las clases populares: colaboró en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados; fue delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista; presidió un breve tiempo el comité ejecutivo estatal del PRI —desde donde pugnó por transparentar el manejo presupuestal de las alcaldías—; y fue director de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. La taxonomía política no alcanzaba desde entonces: los priístas lo consideraban comunista, y los comunistas quinta columna del PRI. Adversario de la tecnocracia neoliberal, López Obrador participó en la Corriente Democrática del PRI —encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo— y el Frente Democrático Nacional, y fue miembro fundador y presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su estado natal.

La elección para gobernador en Tabasco (1994) catapultó a López Obrador a la política nacional, posición que afianzó con la dirección del PRD (1996-1999) y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). El político de Macuspana capitalizó las políticas sociales de la administración capitalina como

nexos clientelares con los beneficiarios, de manera tal que, con la base conformada en la Ciudad de México más la que poseía en Tabasco, emprendió la formación de una estructura política nacional paralela a la del PRD, aunque no antagónica, con miras a la elección constitucional de 2006. Por eso, cuando rompió con el Sol Azteca seis años adelante, López Obrador contaba con una organización nacional detrás de él. Para 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su partido, quedó como la fuerza indisputada de la izquierda dada la debilidad del neozapatismo, de un PRD que lo único que conserva son las siglas y la incapacidad de los movimientos sociales de conformar organizaciones políticas emergentes.

Las sucesivas candidaturas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas mantuvieron una votación absoluta estable (alrededor de 6 millones de votos), pero en términos relativos fueron a la baja —31.12%, en 1988; 17.07%, en 1994; 17%, en 2000—, lo cual sugiere la ineptitud del ingeniero para captar nuevos electores. En tanto que López Obrador incrementó su votación en las tres elecciones (15, 16 y 30 millones, respectivamente) —36.11%, en 2006; 31.7%, en 2012; 53% en 2018—, mostrando justo lo contrario. Pero no únicamente el político tabasqueño ensanchó su base electoral, también mejoró la distribución geográfica de sus simpatizantes. De las 16 entidades federativas en que ganó el candidato perredista en 2006, solamente tres pertenecen al norte y occidente del país (Baja California Sur, Zacatecas y Nayarit). Salvo Puebla y Yucatán, el centro y el sur fueron para López Obrador. Igual ocurrió en 2012, cuando el candidato tabasqueño cosechó más del 50% de la votación en la Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Para 2018 el político de Macuspana fortaleció su bastión del sur, ganó posiciones en el Bajío, duplicó en el norte su intención de voto respecto de 2012 y conquistó también las preferencias de los millennials, con lo que rompió su techo histórico del 36% y triunfó en 30 entidades y en la Ciudad de México.

El salto en las preferencias electorales puede explicarse por que López Obrador monopolizó la posición de outsider en un contexto en que el 85% de los electores estaban en favor del cambio. La imagen del tabasqueño englobó sus atributos y las expectativas de los electores. Era más que sí mismo, lo rebasaba. El Pacto por México permitió a López Obrador colocarse como el opositor legítimo del statu quo. De esta manera, el rechazo social a las reformas estructurales, los escándalos de corrupción, la crisis de los derechos humanos, el colapso de las políticas de seguridad y el magro crecimiento económico peñista, pudo aprovecharlo quien ejercía la oposición más visible y articulada al régimen.

Asimismo, eventos puntuales como el gasolinazo de principios de 2017 acabaron por hundir la popularidad de Peña Nieto, que en esas fechas acumulaba un rechazo del 79%, con tan sólo un 17% de aprobación ciudadana.

Sin ser gran orador y menos buen polemista, López Obrador posee un discurso sencillo y coherente que encaja con la realidad cotidiana de cientos de miles de personas. Es directo, persuasivo, identifica claramente a los adversarios, llega a los lugares olvidados del país y habla a quienes no cuentan para el establishment político. En una época pretendidamente posideológica, el planteamiento obradorista se asienta en un conjunto de premisas reconocibles dentro del universo conceptual de la izquierda nacionalista: la justicia social, el Estado intervencionista y redistribuidor, el pueblo como objeto de las políticas públicas y soporte del régimen, el fortalecimiento de la nación (unitaria) frente al imperialismo estadunidense (redivivo con la grotesca figura de Trump), la educación como mecanismo óptimo de la movilidad social, un presidencialismo benévolo, más la convicción de las nuevas izquierdas según la cual el cáncer de la democracia contemporánea es la fusión de la política con el dinero —en nuestro caso habría que sumar la economía criminal—, la cual habría minado los espacios de deliberación pública y reducido la representación política al simple juego de los intereses privados.

La base social histórica de la izquierda socialista (la clase obrera) se redujo a nivel global, por tanto, requiere de coaliciones más allá de ella para triunfar en sus respectivos países. En la elección de 2018, incluso se frustró que la izquierda mexicana llegara unida a la elección: el PRD optó por ser el socio minoritario del frente de la derecha y el neozapatismo prefirió ir por cuenta propia con la candidatura indígena, retrayéndose del proceso electoral después de no obtener el registro en la boleta del 1 de julio. Clausurada esta coalición "natural", López Obrador buscó el centro y fue a la caza del voto conservador; adoptó una política de alianzas muy pragmática, sumando corrientes de otros colores, incluso retardatarias, y líderes sindicales cuestionados.

Aparte del conservadurismo del político tabasqueño en lo referente a los derechos de las minorías —conservadurismo, eso sí, respetuoso de las libertades individuales y de la preservación de los derechos en donde se han conseguido—, López Obrador asumió que probablemente gobernaría en minoría. En consecuencia, su estrategia consistió en incorporar a su coalición a quienes tenían presencia local pues, tarde o temprano, habría de pactar con ellos para conformar mayoría. Ésta fue una manera eficaz de proteger el voto en todas las

casillas, falencia de la izquierda en los procesos electorales. Además, la estructura de los sindicatos nacionales, de la que se benefició Felipe Calderón en 2006 con el apoyo de la lideresa del magisterio, o la de los mineros, contribuyó a zanjar esta debilidad. Y, por último, ganar parte del voto conservador también ayudó a López Obrador a romper su techo electoral proyectándose hacia el Bajío y el norte del país.

Los nuevos votantes prefirieron a López Obrador, es decir, al más viejo de los contendientes. Esto sucedió gracias a la anodina campaña del joven candidato de la derecha, pero, sobre todo, por la respetabilidad proyectada por el líder de Morena, quien vive de forma austera y no le han podido comprobar actos de corrupción, la tercera mayor preocupación de los ciudadanos de acuerdo con las encuestas (antes van economía y seguridad). Alguien que llega a viejo, vive de la política y no se enriquece groseramente es una rareza dentro del sistema mexicano. Estos jóvenes electores nacieron durante la alternancia y únicamente vieron gobernar al PAN y al PRI. Generacionalmente, la caída del Muro de Berlín no les dice nada. El miedo triunfó en 2006, pero no había guerra. La violencia desatada y la incapacidad manifiesta del Estado para atajarla hicieron del miedo un sentimiento cotidiano y de la impunidad una práctica corriente. Anacrónica o no, la propuesta obradorista estuvo en la recuperación de lo público, tan menguado en el orden neoliberal, con lo que perfiló una posible salida para una ciudadanía desesperada con la situación e irritada con el régimen.

El candidato de Morena consiguió aglutinar la esperanza de cambio de la mayoría de los mexicanos dentro del polo de la izquierda que él representa. Sin disputa en uno y otro terreno, porque ni el cambio lo representó el candidato panista ni son opción viable las otras izquierdas, la candidatura obradorista potenció su fuerza. En esto reside la diferencia fundamental con la participación de la izquierda en las elecciones de los últimos treinta años. La estafeta del cambio la tomaron Salinas (1988) y Fox (2000), el miedo minó a la izquierda en 1994 y 2006, mientras que la resignación pavimentó el regreso del PRI en 2012. La izquierda y el cambio se reencontraron en 2018. Y, en contrario, el proyecto neoliberal no pudo retomar la posta porque ya no era horizonte, sino experiencia; la oferta de un futuro que no era más que la repetición de ese presente que nos abruma. Por tanto, ya no le era posible vender la promesa de un país mejor, no había una mayoría que la comprara.

La transición light

El relevo presidencial fue terso, bastante más de lo esperado. De inmediato surgieron las sospechas: un pacto de impunidad entre el presidente saliente y el recién electo. Obviamente, la interpretación la sugirieron quienes habían quedado 31 puntos abajo en la jornada electoral, la coalición De frente al futuro (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), encabezada por el panista Ricardo Anaya, esto es, el dicho provenía de una fuerza política que desde el reconocimiento de su dirigencia a Salinas de Gortari había sido la mejor aliada del régimen priísta. Comenzaron las purgas en Acción Nacional, en tanto que la diezmada militancia perredista corrió desesperada a buscar acomodo en Morena. La raquítica votación del 1 de julio (poco menos de tres millones de sufragios) dejó al PRD en los huesos, y a los Chuchos, sin curules. La alianza con la derecha histórica fue un suicidio colectivo, la muerte civil de la organización más poderosa de la izquierda mexicana del siglo XX.

Tampoco el dólar se disparó a 25 pesos ni hubo una fuga masiva de capitales como auguraron algunos analistas. Antes bien, la participación de personeros del gobierno entrante en el grupo negociador del TLCAN destrabó la firma del acuerdo trilateral, sujeto todavía a la ratificación del congreso estadunidense. No obstante, la incertidumbre respecto de la continuidad de los proyectos estratégicos inconclusos regresó cuando López Obrador anunció una consulta popular para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a celebrarse entre los días 25 y 28 de octubre de 2018. El cuestionario constaba de una pregunta desagregada en dos opciones: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?: a) reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca, y construir dos pistas en la base área militar en Santa Lucía; y b) continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

La democracia directa es un buen mecanismo deliberativo que abunda la legitimidad de las decisiones públicas, pero, tal como se presentó la consulta, adolecía de múltiples fallas, empezando por las más obvias, es decir, que la instrumentaba un gobierno que aún no estaba en funciones y desatendía además las disposiciones legales respectivas. Había, sin embargo, otras no menores: 1)

las decisiones técnicas no deberían ser materia de una consulta popular (por ejemplo, si Texcoco se hunde o Santa Lucía es peligroso); 2) la pregunta era insatisfactoria porque no daba lugar a opinar que ninguna de las dos opciones fuera adecuada (podría estar alguien en contra de Texcoco por motivos ecológicos y también contra Santa Lucía, pero por razones técnicas); 3) no era ni suficientemente amplia (1,073 mesas distribuidas en 538 municipios del país), ni tampoco establecía un criterio que le otorgara valor estadístico.

El sesgo introducido por el futuro gobierno en el sentido de sustituir el proyecto faraónico del NAIM con la construcción de dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía provocó que las tendencias, primero favorables a Texcoco, cambiaran conforme se acercaba la consulta. La participación de 1,067,859 personas arrojó un 69.65% por la directriz del presidente electo: la obra cumbre del sexenio de Peña Nieto pasaba a mejor vida, pero nada sencillo ni menos barato sería sepultarla. Antes de finalizar el año, la administración obradorista recompró bonos aeroportuarios por un valor de 1,800 millones de dólares de un total de 6,000 millones emitidos por el fideicomiso del NAIM. Y, en febrero de 2019, liquidó 30,000 millones de pesos a los tenedores de bonos del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E). De esta manera, comprometió una suma importante de dinero por una obra para efectos prácticos inexistente. Quedaron en garantía los ingresos captados en los próximos diecinueve años por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) aplicada en el Aeropuerto Benito Juárez. Sin embargo, en la lógica del Homo politicus, la consulta de López Obrador fue un golpe de mano parecido al quinazo de Salinas de Gortari, dado que colocó en el imaginario colectivo al NAIM como el monumento a la corrupción erigido por sus antecesores. Mediante el texcocazo obradorista el pueblo organizado doblegó a la “mafia en el poder”, logrando una victoria simbólica (montada de manera tal que no había forma de perder) que hacía evidente su empoderamiento en la nueva época y ponía en acto la Cuarta Transformación. Este evento ejemplarizante pautó la didáctica política a seguir, la cual López Obrador iría desgranando temprano, cada mañana.

Todavía no tomaba posesión el candidato de Juntos haremos historia y ya gobernaba de facto con la aquiescencia de Peña Nieto, quien sacó provecho del protagonismo de su sucesor para ocultarse de los reflectores que antaño perseguía y dar todavía algunos mordiscos al erario. El 1 de septiembre se instaló la nueva Legislatura y Morena dejó sentir el músculo en ambas cámaras frente a una oposición vapuleada en las urnas y confundida frente a su nuevo papel. Le fue fácil al partido del presidente electo descongelar un proyecto de ley

que el binomio PRI-PAN tuvo a bien refrigerar en abril de 2010: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución. Era el momento de la austeridad republicana, de socavar los privilegios de la alta burocracia.

El alcance de la norma, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en septiembre con 433 votos a favor, trascendió a la administración central teniendo "por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional" (artículo 1). Prohibió el pago de remuneraciones "mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable" (artículo 3). Fue más allá del salario base de los servidores públicos al considerar "remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra" (artículo 4). Y fijó por tope de los ingresos de la burocracia gubernamental el salario del presidente, de manera que "ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de egresos de la federación" (artículo 6). El pequeño detalle fue que la austeridad franciscana de López Obrador le dictó que un ingreso mensual neto de 108,656 pesos era suficiente; con base en ese techo, no había más que comenzar a restar. La medida combatió privilegios inaceptables dentro del Estado, pero tuvo también el efecto perverso de desproteger sectores estratégicos de la administración pública, con la deserción de los cuadros más calificados, o dependencias que, ante la falta de plazas, realizaban las funciones sustantivas empleando a trabajadores por honorarios.

Un contexto adverso

La primera participación de López Obrador en la liza presidencial ocurrió en un entorno favorable para las izquierdas latinoamericanas; en su tercer intento, el panorama era sombrío para éstas. Casi todas se habían hecho gobierno a consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales y sus administraciones corruptas. El tenaz candidato del Partido del Trabajo brasileño, Lula, ganó la presidencia en la cuarta oportunidad y gobernó durante dos periodos (2003-2011). El obrero metalúrgico paulista consolidó a Brasil como potencia emergente (la mayor economía latinoamericana), rescató de la pobreza a más personas que ningún gobierno del subcontinente, multiplicó la matrícula en la educación superior y colocó a las universidades brasileñas en los primeros lugares del ranking latinoamericano. Sin embargo, Lula acabó en la cárcel en 2018 con cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero, tan endebles como gigantesco el afán de la oligarquía brasileña de dejar fuera de la contienda presidencial de ese año al candidato más popular.

Tras un frustrado golpe de Estado en 1992, Hugo Chávez obtuvo una abrumadora victoria electoral en 1999 (el 56.5% de la votación) a nombre del Polo Patriótico. El militar venezolano desarrolló políticas sociales potentes con las llamadas “misiones bolivarianas” —alfabetización, educación básica, salud, empresas comunitarias—, redujo por todos los medios a la oposición, gobernó y logró reelegirse un par de ocasiones antes de morir de cáncer colorrectal en 2013. La muerte del líder y su reemplazo por el vicepresidente, el gris sindicalista Nicolás Maduro, marcó el ocaso de la Revolución bolivariana, y el chavismo perdió la mayoría parlamentaria en 2015. Frente a la mengua del respaldo popular, alimentada por la crisis económica, la presión internacional y el mal manejo de las finanzas públicas, el régimen respondió con medidas autoritarias recargándose más y más en las fuerzas armadas.

Cuando llegó López Obrador a la presidencia las izquierdas latinoamericanas habían perdido Argentina, Ecuador, Chile, Perú y Brasil. Bolivia y Uruguay eran ya la excepción mas no la regla. Evo Morales inició su gestión presidencial en 2006 gracias al casi el 54% de la votación que obtuvo en la elección respectiva. El dirigente aymara de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia transformó un país mayoritariamente indígena en un

Estado plurinacional. Con una política económica exitosa, basada en la venta de materias primas, el régimen de Morales instrumentó políticas sociales que aminoraron la pobreza extrema, además de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos y la empresa de telecomunicaciones, permitiéndole reelegirse en dos ocasiones de manera bastante holgada. Una interpretación a modo de la constitución lo habilitó para competir por la presidencia en 2019, pero un golpe de Estado, con apoyo de masas, lo confinó al exilio en México. Al mismo tiempo, el peronismo recuperaba la presidencia argentina y el Frente Amplio perdía en las urnas la presidencia uruguaya.

El Frente Amplio gobierna Uruguay desde 2004, imponiéndose en tres elecciones consecutivas, dos veces con la candidatura de Tabaré Vázquez y otra con José Mujica al frente. Uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), Pepe Mujica, sumó quince años de prisión, antes y durante la dictadura militar. El retorno a la democracia permitió la excarcelación de los dirigentes Tupamaros en 1985 y Mujica se incorporó a la política formal. Bajo las siglas del Frente Amplio, el exguerrillero ganó la presidencia en 2010. Prioridad de su gobierno fue la reducción de la pobreza y finiquitar la indigencia, la reforma de la administración pública, la apertura a la inversión privada (nacional y extranjera) y la legalización de la producción y venta de marihuana con patrocinio estatal.

Características de estos "populismos" o "progresismos", como habitualmente se les denomina, son el poderoso apoyo popular que permitió a sus candidatos vencer a los partidos tradicionales, su procedencia de movimientos sociales y de agrupaciones políticas nuevas, el hecho de que emerjan como opción política en contextos de crisis económica o de legitimidad del régimen a consecuencia principalmente de la corrupción, y la tendencia a prolongar los mandatos presidenciales para afianzar las reformas y problemas en el relevo gubernamental, sea por la pérdida del líder (Venezuela), falta de carisma del sucesor (Brasil) o ruptura de los pactos políticos entre el presidente saliente y el entrante (Ecuador). Más allá de eso, sin embargo, estos gobiernos no desmontaron los regímenes políticos ni modificaron los fundamentos económicos o desactivaron las fuentes del poder oligárquico, de tal manera que no pudieron resistir la embestida de las oligarquías regionales y nacionales formadas desde las independencias, si no es que antes.

Por el tamaño de la economía, la escandalosa desigualdad social, la corrupción de la clase política y el poder de la oligarquía brasileña, la experiencia reciente

del gigante sudamericano puede arrojar luz sobre las posibles dificultades y restricciones que enfrentará un gobierno de izquierda en México. Lula fondeó su proyecto social con el alto precio de las commodities —soya, azúcar, hierro, petróleo— en el mercado mundial, exportadas a China, los Estados Unidos, Argentina, los Países Bajos, Alemania y Corea del Sur. En lugar de malgastar estos ingresos extraordinarios, como su contemporáneo Fox hizo en México, el obrero metalúrgico atacó la pobreza extrema y facilitó la movilidad social de las clases populares y medias bajas por medio de la educación superior, además de dar un fuerte respaldo a la ciencia y la innovación. Sin embargo, Lula no llevó a cabo una reforma tributaria que aumentara la recaudación estatal gravando a las clases altas ni tampoco una reforma política que acotara el poder de las oligarquías regionales: con dinero, aceitó un sistema político caduco. Al mismo tiempo, para no romper el equilibrio político que permitía gobernar, esto es, sin confrontar al capital, el obrero paulista fue distanciándose de los movimientos sociales (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) que coadyuvaron a su victoria electoral.

Mientras tanto, la derecha brasileña supo replegarse e ir ganando posiciones en los órganos estatales —señaladamente en el Poder Judicial— y perder miedo a las masas populares, para asaltar el poder cuando la situación diera un vuelco. La Gran Recesión (2008-2011) desplomó el precio de las commodities, en tanto que afloraron los escándalos de corrupción política del partido en el gobierno. El segundo mandato de Lula respondió al nuevo entorno económico con medidas contracíclicas: obra pública, crecimiento del crédito, estímulos al mercado interno. No obstante, perdió terreno. Su sucesora, Dilma Rousseff, abandonó las medidas keynesianas y regresó a la ortodoxia neoclásica para hacer frente a la crisis con recortes presupuestales y reducción del crédito al consumo de la nueva clase media (sacada de la pobreza por el mismo régimen). La población se irritó y salió masivamente a las calles de las principales ciudades con el aumento del precio del transporte público en 2013. La derecha ya estaba instalada en el movimiento popular. Bastante debilitada, y cuando decidió atacar frontalmente la corrupción política, la exguerrillera fue depuesta en 2016 mediante un golpe de Estado institucional.

Maldita vecindad

México y los Estados Unidos comparten una frontera de 3,185 kilómetros. Los 12 millones de habitantes de origen mexicano conforman la minoría extranjera más numerosa en Estados Unidos y representan el 10% del total de la población de nuestro país. La Unión Americana es el primer socio comercial de México, y el nuestro es el segundo del país del norte. La inversión extranjera directa de Estados Unidos es la más cuantiosa en México y alcanza el 30% del total. Petróleo, turismo, manufacturas y las remesas de los migrantes (más el flujo de la economía criminal) constituyen los ingresos fundamentales de México. La geografía económica muestra una integración cada vez mayor del norte y centro de nuestro país con el sur estadunidense. Por la frontera circulan migrantes mexicanos y latinoamericanos, mercancías, residentes de ambos países (que van de compras, diversión o trabajo), armas y droga.

La Segunda Guerra Mundial llevó a México y Estados Unidos a pactar acuerdos sobre migrantes y estupefacientes, en la medida en que el vecino del norte había llamado a muchos reclutas a filas, además de habilitar a los agricultores del Triángulo Dorado (intrincada zona serrana entre Sinaloa y Durango) para que abastecieran de drogas medicinales —y eventualmente de recreo— a sus tropas. Y México desarrolló una sagaz política exterior en la que incorporaba fichas adicionales al tablero diplomático permitiéndole negociar con más soltura con el poderoso vecino. En 1974 nuestro país colaboró en la Operación Cóndor, estrategia de la administración de Richard Nixon para combatir el narcotráfico en los países productores de narcóticos y eliminar la subversión doméstica. La relación bilateral tuvo un momento complicado en 1985 con el secuestro, tortura y asesinato en México del agente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) Enrique Kiki Camarena, pues las autoridades estadunidenses presumieron que los responsables fueron policías mexicanos inscritos en la nómina de un cártel. A partir de entonces, el narcotráfico ocupó un lugar cada vez más importante en la agenda bilateral al lado de la migración ilegal.

En cuanto a la frontera sur, las guerras civiles centroamericanas, en las que la diplomacia mexicana tuvo una mediación muy activa con el Grupo Contadora, provocaron desplazamientos de alrededor de 50,000 indígenas guatemaltecos hacia nuestro país huyendo de las tácticas de tierra arrasada del ejército chapín.

A partir de 1982, México les otorgó a estos migrantes forzados el estatuto de refugiados, les brindó servicios de salud, tierras y empleo. Una década después, con los acuerdos de paz firmados también en México, parte de este contingente regresó a Guatemala, mientras la otra decidió asimilarse a la sociedad mexicana. Sin embargo, ni la paz ni la prosperidad llegarían a Centroamérica, porque consecuencias de las guerras civiles y de la pobreza de más de la mitad de la población fueron la violencia endémica y la descomposición social, a lo que se agregó el trasiego de drogas cuando se bloqueó la ruta del Golfo de México a la cocaína colombiana.

De alrededor de 44 millones de inmigrantes (11 millones ilegales) que habitan en los Estados Unidos, el contingente más numeroso son los mexicanos, seguidos por indios, chinos, filipinos y salvadoreños. Tanto la administración de Barack Obama como la de Donald Trump intensificaron las deportaciones de indocumentados en la frontera norte. De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, en el primer año de Trump éstas aumentaron un 42%, reportándose 412 muertes y 341,084 aprehensiones, lo que permite suponer que los migrantes buscaron puntos de ingreso cada vez más remotos y peligrosos. Ahora bien, estos migrantes no son únicamente mexicanos, también hay centroamericanos que pretenden entrar por tierra a Estados Unidos y usan como plataforma el territorio nacional. Esta migración no se reduce a jóvenes y adultos, incluye además un número creciente de niños y adolescentes que viajan solos con la expectativa de reunirse con su familia en el otro lado de la frontera. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), el número de estos casos registrados oficialmente se triplicó entre 2013 y 2015 al pasar de 5,596 a 18,650, respectivamente. Buena parte de ellos los deportó México a sus países de origen, cumpliendo el Programa Frontera Sur, firmado por Peña Nieto y Obama. El 97% de los niños migrantes en 2015 procedía de Honduras (27.4%), Guatemala (49.6%) y El Salvador (20.5%).

El gobierno de Trump implementó una política "tolerancia cero", lo que provocó la separación de los niños centroamericanos de sus familias cuando intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos para solicitar asilo. En un alarde de crueldad, las autoridades los "resguardaron" en albergues dentro de jaulas alambradas. El mundo presenció esas escenas de horror, pero ni la política migratoria estadunidense cambió ni tampoco se cerró el flujo de la migración ilegal centroamericana hacia Estados Unidos. Esta pinza apretó la administración de Peña Nieto extendiéndose la presión al gobierno de López Obrador. El presidente priísta se había plegado a las directrices de la Casa Blanca en el

sentido de sellar la frontera sur. De esta manera, en 2014 deportó a 105,303 que intentaron ingresar ilegalmente al país. No obstante, en 2018 el éxodo masivo lo desbordó.

Cada año alrededor de 200,000 o 300,000 migrantes centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos transitando por México. Las sucesivas caravanas de migrantes que salieron del istmo centroamericano a partir de octubre de ese año incorporaron a migrantes de diferentes nacionalidades, en las que predominaron los hondureños. El país, enclave bananero desde el siglo XIX, fue la base de operaciones militares estadunidenses para contener la revolución en la región durante la década de los ochenta. Tras los procesos de paz, Estados Unidos redujo su presencia militar en el país, más adelante desalojó de sus cárceles a los pandilleros centroamericanos remitiéndolos a sus países de origen, los cuales no tenían las capacidades estatales ni las condiciones materiales indispensables para hacerse cargo de ellos, amén de economías débiles y, en el caso hondureño, bastante golpeada por los desastres naturales y el derrumbe del precio del café. Mientras tanto, los saldos de la guerra, la falta de empleos decorosos, la ausencia de servicios básicos, la expansión de la economía criminal y una juventud sin oportunidades eran los síntomas de un tejido social roto. Además, la tentativa reformista del presidente Manuel Zelaya (2005-2009), del Partido Liberal, fue cancelada violentamente por un golpe de Estado auspiciado por la oligarquía nacional y Estados Unidos. Ni la una ni el otro se hicieron cargo de gestionar la crisis, más allá de acabar de militarizar al país con la creación de la Policía Militar de Orden Público.

El 13 de octubre partió de San Pedro Sula una caravana de alrededor de 1,300 personas, encabezada por un diputado opositor con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, cruzando México por vía terrestre. Robustecida en el recorrido por otros contingentes centroamericanos, por lo que sumaban ahora aproximadamente 4,000 migrantes, cinco días después la caravana burló la valla metálica colocada en el puesto fronterizo de Tecún Umán al grito de “¡México, por humanidad, déjanos pasar!”. Tras el cruce de cientos de migrantes por el puente internacional sobre el río Suchiate, la tensión aumentó y la policía empleó gases lacrimógenos mientras los marchistas respondieron lanzando piedras. Mike Pompeo, secretario de Estado, solicitó ante los medios “que se le ponga alto en México antes de que lleguen” a Estados Unidos, según reportó la BBC. A mediados de noviembre no era una, sino cinco caravanas las que recorrían México en dirección a la frontera norte. En general los gobiernos estatales y municipales, así como organismos de la sociedad civil, asistieron a

los migrantes, aunque hubo expresiones racistas y xenófobas por parte del alcalde de Tijuana de extracción panista. Trump responsabilizó al gobierno mexicano de permitir que las caravanas llegaran a la frontera y, a final de mes, la patrulla fronteriza repelió con gases lacrimógenos a cerca de 500 migrantes que rompieron la valla de la garita El Chaparral intentando entrar a territorio estadunidense. Del lado mexicano detuvieron a 39 personas, en tanto que del estadunidense la cifra se elevó a 42.

Éste fue el primer problema que hubo de enfrentar el gobierno de López Obrador, tanto por hacerse cargo de los migrantes en tránsito por México como por las eventuales caravanas que podrían salir de Centroamérica. Desde los incidentes de octubre en la frontera sur, el presidente electo planteó modificar la estrategia hacia los migrantes ofreciendo visas de trabajo a quienes desearan permanecer en el país. A mediados de enero de 2019, una caravana de 969 personas procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua cruzó a Ciudad Hidalgo. No se les impidió el paso, el ingreso fue ordenado y les ofrecieron visas humanitarias a quienes aceptaran registrar su entrada al país, además de colocárseles un brazalete para monitorear el flujo de personas. Sin embargo, con el afán de no dañar la relación bilateral, López Obrador tuvo que allanarse a la decisión de Trump de que las autoridades estadunidenses devolvieran a México a quienes pidieran asilo y permanecieran en el país hasta que un juez de migración estadunidense determinara sus casos. En esta lógica, el gobierno mexicano bloqueó la llegada de migrantes a los pueblos fronterizos para evitar incidentes de violencia cuando intentaran ingresar en Estados Unidos y acabó por cancelar las visas humanitarias a fin de no incentivar la migración centroamericana.

A pesar de los esfuerzos mexicanos por no enfrentar al presidente estadunidense, éste dijo una más de sus mentiras en el mensaje a la nación el 6 de febrero: "acabamos de saber que, en ciudades mexicanas, para eliminar a los inmigrantes ilegales de sus comunidades, están consiguiendo camiones y autobuses para llevarlos a nuestro país en áreas donde hay poca protección fronteriza". Tras la reunión en marzo con el asesor senior y yerno de Trump, Jared Kushner, en casa de un empresario mexicano, a López Obrador le quedó claro que no tenía más opciones que deportar a los migrantes centroamericanos que ingresaran al país en las subsecuentes caravanas o contenerlos en territorio nacional. Medidas que adquirieron un carácter perentorio cuando Trump amagó con establecer aranceles a todos los productos mexicanos si México no sellaba sus fronteras. Para tal efecto, en junio el gobierno obradorista desplegó 6,000 efectivos de la

guardia nacional en la frontera sur —sin haberlos entrenado siquiera— y 15,000 soldados y policías en la frontera norte. Tan sólo en los primeros cinco meses de la nueva administración se triplicó la expulsión de inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos. El INM reportó que, al 24 de junio, habían sido detenidos 23,917 migrantes ilegales. Extraña paradoja de un gobierno que ha hecho bandera de la soberanía y del humanitarismo doctrina.

También en campaña, López Obrador adelantó la idea de que había de invertirse en proyectos productivos en Centroamérica a fin de contener la migración, en una suerte de extensión de las "cortinas" establecidas en México para desalentar la migración hacia los Estados Unidos: el programa Sembrando Vida y el Tren Maya, en el sureste; los incentivos salariales y fiscales, en la frontera norte. La iniciativa obradorista, conversada con el yerno de Trump, considera una inversión mexicano-estadunidense canalizada a los rubros de migración, comercio, infraestructura, desarrollo sustentable y programas sociales. El presidente tabasqueño convocó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a fin de elaborar un proyecto estratégico para la región. Y ésta definió en mayo de 2019 cinco proyectos de infraestructura prioritarios: una planta eléctrica en Puerto Cortés (Honduras), extender la red eléctrica de Centroamérica y México, ampliar la red carretera en la frontera mexicano-guatemalteca, un gasoducto de 940 kilómetros que conecte el Golfo de México con San Pedro Sula y, eventualmente, extender hacia Centroamérica el Tren Maya.

2

LA HONROSA MEDIANÍA

López Obrador considera la responsabilidad, la contención y la austeridad cualidades indispensables del hombre público. Quizá por eso repite frecuentemente la instrucción de Benito Juárez al Congreso de Oaxaca del 2 de julio de 1852: los funcionarios del Estado "no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado". Con respecto de la responsabilidad, Platón advirtió que "si los que están designados para guardar el Estado y las leyes son sólo guardadores en el nombre… conducirán a la república a la ruina". Rousseau apreciaba la contención y la austeridad: "el ornato no es menos extraño a la virtud que la fuerza y el vigor al alma". En el mundo de moderación enunciado por el ginebrino también imperaba la armonía: "los niños que tienen uso de razón son tratados con igualdad con sus padres; los criados se sientan en la mesa con sus amos; la misma libertad que reina en las casas reina en la república, y la familia es imagen del Estado".

Estas virtudes cívicas son capitales en la concepción de la regeneración social del presidente tabasqueño. López Obrador no es un predicador que propague una religión civil, ni tampoco un Mesías que aspire a redimir al pueblo, antes bien es el Homo politicus que pretende conformar la sociedad como una comunidad ética tomando como fundamento la familia, lo que lo convierte no en un enemigo de las instituciones (la familia es acaso la institución más antigua), como se ha sugerido, sino en un conservador. Es también más republicano que liberal, romántico en varios sentidos. El político de Macuspana no cree en la burocracia despersonalizada del Estado moderno, que conceptualizó Weber, y abomina la tecnocracia, prevista por Saint-Simon y Comte. Los funcionarios deberían ser, según López Obrador, hombres comunes y corrientes que transitan temporalmente de sus actividades privadas a los cargos del Estado con el objeto de servir a la comunidad, no una casta como la que gobierna el mundo. Él, claro, es la excepción.

La mafia del poder

¿Qué es la mafia? Es una organización corporativa y jerárquica que sustrae el monopolio de la violencia legítima al Estado y, en su forma desarrollada, participa de las finanzas y la política. De acuerdo con el Diccionario de política de Norberto Bobbio, toda mafia recurre a “la explotación parasitaria como único modo para enriquecerse, [a] la violencia contra los más débiles como forma para hacerse valer en la vida”. Los huachicoleros o las bandas criminales que cobran piso a los negocios entran sin problema en esta categoría. Pero López Obrador da una acepción más amplia al concepto e incorpora el vínculo espurio entre el dinero y la política. Espurio porque funciona de acuerdo con el llamado capitalismo de cuates, en el que la competencia, el servicio óptimo al consumidor o la transparencia —tan pregonados por la ideología neoliberal— son una retórica hueca que esconde a los grupos de interés, formados por políticos y empresarios, quienes maximizan sus ganancias no por ser productivos, eficientes y honestos, sino por la corrupción y la impunidad que les garantiza la protección estatal, es decir, capturan al Estado para promover sus intereses. Ejemplos abundan en la historia nacional, pero basta concentrarse en el sexenio anterior, un verdadero catálogo de trapacerías: carreteras de peaje, el Paso Exprés, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, el NAIM. En el último participaron, entre otras, empresas de Carlos Slim (CICSA), Bernardo Quintana (ICA), Olegario Vázquez Aldir (PRODEMEX), Héctor Ovalle (Coconal), Carlos Hank Rhon (Grupo Hermes) e Hipólito Gerard Rivero (Constructora y Edificadora GIA+A). Estamos hablando de empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones en el gobierno de Salinas de Gortari, del cuñado del exmandatario y de un corporativo virtualmente quebrado (ICA). El futuro aeropuerto duplicó su costo entre 2015, que inició la obra, y 2018, cuando se canceló.

El título del capítulo inicial del libro donde López Obrador presentó sus tesis de campaña (2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México) es inequívoco: nombra a la oligarquía “banda de malhechores”. Ésta se conformó a partir de la colusión del poder económico y el poder político; relevó a la constituida durante la administración de Miguel Alemán, la cual había crecido a la sombra del Estado revolucionario, beneficiándose de un mercado cerrado y poco competitivo dentro del marco de la economía mixta (empresas estatales +

empresas privadas). La élite neoliberal, en contrario, acumuló sus bienes por la privatización de las empresas públicas y "fue concentrando influencia política hasta que llegó a ser un poder fáctico situado por encima de las instituciones constitucionales". Este poder fáctico, metaconstitucional, es el que le dio el carácter de mafia.

Para el presidente tabasqueño la corrupción "es la causa principal de la desigualdad y la tragedia nacional que padecemos". La desigualdad social no surge para él de un sistema económico que concentra la riqueza, es la consecuencia del despojo de los bienes nacionales por parte de la oligarquía. Al apropiarse ésta indebidamente de ellos, y someter los bienes y servicios a la lógica de la ganancia, quita al Estado las herramientas para redistribuir la riqueza. "Una minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen llamar hombres de negocios", asociados con el capital transnacional gracias a leyes permisivas —denuncia López Obrador—, desmantelaron las empresas paraestatales del sector energético y permitieron "el mayor saqueo de los bienes naturales" del que se tenga recuerdo. A manera de ilustración, cabe recordar que el gobierno salinista remató las mineras estatales y expidió la Ley minera. La ley reglamentaria del 27 constitucional asentó que "la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno" (artículo 6). La disposición legal reservaba la exploración y explotación de minerales a "personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas" (artículo 10). Pero, por medio de "sociedades constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas" (artículo 11), podrían participar inversionistas extranjeros.

Con esta ley, más las enmiendas subsecuentes, las concesiones mineras se ampliaron a cincuenta años con posibilidad de renovarse. Además, disminuyeron apreciablemente los impuestos en el sector y el Estado renunció a recibir en regalías un porcentaje de las ganancias —a diferencia del resto de América Latina— a cambio de una exigua cuota por el derecho de exploración y extracción de los metales. Gracias al nuevo marco legal, Grupo México, presidido desde 1995 por Germán Larrea, despegó para convertirse en el tercer consocio productor de cobre más importante del mundo —también se hizo de una parte de los ferrocarriles con la privatización dictada por Ernesto Zedillo—, y las mineras canadienses, las principales productoras de metales preciosos del planeta, se instalaron en México. Más de la mitad de los activos de estas empresas se localizan en Latinoamérica, de los cuales dos terceras partes se

concentran en nuestro país, incentivados por la administración de Felipe Calderón, quien quintuplicó las concesiones otorgadas a mineras extranjeras. Ni qué decir de la contaminación de acuíferos o el esparcimiento de gases tóxicos en la atmósfera, en Sonora y Guerrero, donde operan Grupo México y la canadiense Goldcorp, o de las precarias condiciones laborales de los mineros, como atestigua el accidente de Pasta de Conchos, Coahuila, en el que fallecieron sesenta y cinco trabajadores en febrero de 2006. Sin embargo, después del accidente fatal, la administración foxista concedió a Larrea nuevas concesiones carboneras por cincuenta años. Consecuencia de estas políticas, además, han sido el despojo de comunidades y el asesinato de activistas contrarios al neoextractivismo.

Cuando los privados fracasaban, sus deudas se convertían en públicas, como ocurrió con los bancos y las concesiones carreteras: las ganancias se privatizaban mientras se socializaban los costos. Y estos costos no eran pequeños, constituyeron el mayor traslado de fondos públicos a manos privadas en la historia nacional. Dentro del sentido común neoliberal, una decisión sobre lo público se presentó como necesidad económica incontrovertible: había que drenar las arcas nacionales para capitalizar los bancos privados, salvo uno, todos extranjeros. Dieciocho años después de que la Cámara de Diputados transformara —con la mayoría constituida por el PRI y el PAN— el rescate bancario en deuda pública, el erario había transferido a las entidades bancarias 2,088,947,742,271 pesos. No obstante, la deuda creció, pues mientras en 1999 era de 601,341 millones de pesos, el total del pasivo ascendió en septiembre de 2017 a 1 billón 7,764 millones de pesos, 67% más que el saldo original. A pesar del ingente costo, el saneamiento de los bancos —recuerda López Obrador— "se llevó a cabo a fondo perdido, es decir, no se realizó a cambio de acciones en favor del gobierno, como el que puso en práctica los Estados Unidos en el primer gobierno de Barack Obama".

Para el presidente tabasqueño la concentración de la riqueza en manos de una oligarquía corrupta acrecentó la desigualdad social. Si no desastrosos, los resultados en el combate a la pobreza han sido modestos. Las cifras de la pobreza, aunque bajaron 0.8% en los últimos ocho años (3.4% la pobreza extrema), en parte por los programas asistenciales, siguen siendo bastante abultadas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016 el 43.6% (53.4 millones de personas) vivía en la pobreza y 7.6% (9.4 millones de personas) en la pobreza extrema. Nada más como referencia comparativa con las dos economías latinoamericanas

más grandes junto con la mexicana: para ese mismo año, Brasil tenía el 25.4% de su población en condiciones de pobreza (52 millones de personas) y 6.4% en pobreza extrema (13.4 millones de personas); y, en 2017, Argentina mantenía el 25.7% (10.4 millones de personas) en la pobreza y 4.8% de indigentes (1.9 millones de personas). Por tanto, México superaba por poco más de 18 puntos a Brasil en cuanto a población en situación de pobreza y en casi 3 puntos a la Argentina respecto del porcentaje de indigentes.

Los datos sobre la pobreza sitúan a México equidistante de Brasil y Argentina, el polo más desarrollado del subcontinente, y de Guatemala y Bolivia, el polo más atrasado. Inaceptable en un país de 125 millones de habitantes y para la decimosexta economía mundial. Y eso que la pobreza bajó un poco en los últimos años. Sin embargo, la desigualdad social se ensanchó apreciablemente, a la vez que la economía ha tenido un crecimiento ínfimo. Esto es, el modelo no permite la expansión económica, a pesar de las dos generaciones de reformas estructurales, y reparte muy mal los beneficios del desarrollo. Visto así, no extraña la expansión de la economía criminal en las tres últimas décadas. Las cifras acerca de la desigualdad en nuestro país son espeluznantes: el 1% de la población concentra el 21% de los ingresos totales de la nación; el 10% de aquélla posee el 64.4% de la riqueza del país. En tanto que en el mundo, durante el periodo 2007-2012, la cantidad de millonarios disminuyó un 0.3%, en el México de Felipe Calderón aumentó 32%. Las fortunas que más crecieron fueron las de quienes se quedaron con los activos del Estado privatizados en los noventa. Carlos Slim (telefonía), Ricardo Salinas Pliego (televisión, telefonía y banca), Germán Larrea y Alberto Bailleres (minería) —apunta Gerardo Esquivel (Desigualdad extrema en México)— “han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.

El pueblo bueno

No obstante la pobreza y la desigualdad evidenciada en las estadísticas nacionales, la doxa de los medios televisivos subrayaba en la alternancia que México era un país de clases medias, y eso, por definición, era bueno. Faltaban calificativos para describirlas: responsables, emprendedoras, moderadas, optimistas, visionarias, ahorrativas, base de la democracia liberal y cemento de la cohesión social, porque entre más homogénea, mayormente robusta es la sociedad, y también porque la propiedad privada genera un compromiso con el bien común. Que esto, en fin, era un paso gigantesco hacia el Primer Mundo y la oportunidad de soltar el lastre de una historia nacional que únicamente abonaba a la frustración. El criterio del análisis era aspiracional: "una parte muy significativa de la población se siente de clase media y quiere proteger esa condición que tanto esfuerzo le costó alcanzar". A pesar de tan frágil evidencia, la conclusión era contundente y con densidad histórica: "la consolidación de este sector es quizás el tema más importante para el desarrollo futuro del país y el evento histórico más significativo de las últimas décadas" (Luis de la Calle y Luis Rubio, "Clasemedieros").

Esta épica del éxito se desmoronó el 1 de julio, cuando incluso las clases medias votaron por el candidato plebeyo: no querían el statu quo. Y no lo querían porque tenían aspiraciones más allá de un automóvil usado o un tinaco de Rotoplas en la azotea de una casa a medio hacer; aspiraban también a la seguridad, a la reducción de la violencia y la corrupción, a la movilidad social ascendente para sus hijos, a una vejez digna. De otro lado, en la elección reapareció el México olvidado, el de las clases populares, urbanas y rurales, para quienes la cobija del presupuesto no alcanzó porque el Estado, en su definición neoliberal, estaba para servir al mercado y hacerse cargo de los yerros de la "mano invisible", no para redistribuir la riqueza, ofrecer servicios básicos a la población, garantizar su integridad física, proteger el patrimonio familiar o controlar el territorio. El Estado ni siquiera había sido capaz de elaborar un registro fiable para identificar a las víctimas de la desquiciada guerra contra el narcotráfico, hacerles justicia o frenar el enriquecimiento inmoral de los políticos.

López Obrador verbaliza una narrativa distinta de la neoliberal en la que el

pueblo, bueno y trabajador, es el sujeto de la historia patria, no ya las clases medias prudentes y ahorrativas. El pueblo del tabasqueño es el pueblo romántico —"he conservado la experiencia del trabajo, de una vida áspera y laboriosa: he seguido siendo pueblo", decía orgulloso Jules Michelet—, una unidad orgánica homogénea, prácticamente monolítica: el conflicto es externo a él, invariablemente viene de fuera (sintomática analogía con la perspectiva neozapatista respecto de la comunidad indígena, de allí la irreductibilidad de la una en el otro). Este pueblo no es el pueblo liberal (abstracto), representado en las cámaras, antes bien es el pueblo concreto, real, al que López Obrador asocia con las clases productivas (empresarios honestos y trabajadores manuales) y los desposeídos, confrontados con las clases parasitarias (banqueros, especuladores, políticos, monopolistas), como las llamaba el conde de Saint-Simon.

Con los liberales, el presidente tabasqueño identifica al pueblo con la nación, pero en cuanto romántico, lo equipara con las clases productivas según acabamos de mencionar. Como el pueblo es el dueño de los bienes nacionales y de la propiedad pública, cada privatización mengua sus recursos, lo empobrece más en beneficio de su antagonista, "la mafia del poder", que emplea por "modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación". Las clases medias no tienen acomodo en el antagonismo social propuesto por el político de Macuspana, por lo que soslaya las reivindicaciones del flanco progresista de éstas (drogas, matrimonio igualitario, aborto, etcétera). Escapa a la concepción de López Obrador que el pueblo es heterogéneo —social, cultural, étnicamente—, por tanto, el conflicto es inherente a él; que la identidad social no es el único elemento constitutivo del sujeto político; que entre más complejas son las sociedades mayor es la diversidad, por lo que hay otros conflictos a considerarse además de los sociales; que agregar a los diferentes no significa uniformar sus demandas, sino que es condición de la inclusión.

Si el pueblo es uno, la nación también es una, asume López Obrador. México tiene sesenta y ocho etnias indígenas, cada una dentro de un espacio territorial específico y una cultura propia. El mestizaje como política oficial del Estado posrevolucionario trató de asimilar a todos los indígenas a la categoría de mexicanos. Lo son en sentido jurídico, pero eso no disuelve los particularismos antropológicos e históricos de los distintos pueblos originarios. Esto pone a la orden del día la discusión acerca de su autonomía y la posible redefinición de la República mexicana como Estado plurinacional. Sin negar la importancia para los indígenas de las políticas sociales dirigidas a combatir la pobreza extrema, el presidente tabasqueño se queda corto en cuanto a la demanda autonómica, ya

que no considera el autogobierno de las comunidades. Al respecto, López Obrador ofrece cuando más “reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para que puedan preservar su identidad y su cultura, enriquecer su vida colectiva y preservar los recursos que se encuentren bajo su cuidado”.

El presidente tabasqueño no da lugar a formas autogestivas de organización popular, dado que presupone la existencia de una comunidad honrada e industriosa tutelada por un Estado paternalista. Esta concepción lo distancia de la izquierda histórica mexicana y de las izquierdas emergentes de América Latina, que consideran esencial la formación de una sociedad civil fuerte y autónoma. El pueblo es para López Obrador un actor más bien pasivo, aunque expectante, que recibe los beneficios de un Estado bienhechor. Esto no significa que el pueblo no formule demandas, carezca de objetivos propios o esté resignado a recibir cualquier cosa, lo que quiere decir es que no es mediante su acción organizada como éste obtiene sus reivindicaciones, sino por la interlocución directa con el líder político. Éste, sin duda, es un rasgo del populismo clásico, de ese estilo político como lo consideran algunos. No obstante, veremos más adelante, López Obrador no promueve la movilización permanente de las masas —característica básica del estilo populista— más allá de las anticlimáticas consultas populares que ha implementado.

Otro elemento del estilo populista es el antagonismo social que dibuja el discurso obradorista: no lo inventa, lo significa en sus términos. La sociedad mexicana es tan desigual como injusta, generando una tensión permanente. Lo que hace López Obrador, en un lenguaje sencillo y persuasivo, es definir los actores del conflicto, poner nombre a los adversarios y puntualizar los agravios sobresalientes. Con el poder nominativo otorgado por su investidura, la altísima popularidad de que disfruta y la autoridad moral cultivada por él mismo, cotidianamente el presidente tabasqueño realiza esta labor a manera de didáctica, instrumento antiquísimo de la política olvidado por la tecnocracia, capaz únicamente de recitar cifras y de modelar la conducta de los entes colectivos a través de incentivos. López Obrador ni siquiera las sabe bien, pero logra el objetivo de conducir el debate hacia su terreno, de sacar una conclusión cada día.

Obviamente, por lo dibujado hasta este momento, los actores del drama social son la mafia del poder y el pueblo bueno. Y el Estado, en el péndulo obradorista, pasó de un polo hacia el otro. Para que esto sucediera, dado que hay un solo Estado y el político de Macuspana no llegó al poder mediante una revolución,

habría de limpiarlo, mas no recurriendo a una reforma institucional sino con el poder del ejemplo: “la corrupción se lleva a cabo, primordialmente, de arriba hacia abajo y hay que eliminarla así, como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”.

El rescate de lo público

Tony Judt decía que “gran parte de lo que hoy nos parece ‘natural’ data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y al sector privado, las crecientes diferencias entre pobres y ricos”. Tan natural, que no concebimos que alguna vez el mundo fuera distinto o pudiera serlo en el futuro porque, al convertirse en sentido común, el neoliberalismo también colonizó nuestra imaginación. Defectuoso e insuficiente, hubo un sucedáneo del Estado benefactor durante el régimen de la Revolución mexicana: el sistema de salud más grande de América Latina, educación pública a todos los niveles, tiendas de abasto para las clases populares, libros de texto gratuitos para los educandos e incontables empresas públicas, tanto en los sectores estratégicos como en actividades secundarias, de las cuales el Estado se hacía cargo cuando los particulares se retraían o abandonaban a los trabajadores a su suerte. El régimen neoliberal se deshizo de estas empresas superfluas —de 1,156 empresas que había en 1982 quedaban únicamente 252 en 1994—, privatizó o desmanteló las industrias estratégicas y desatendió la seguridad social y la educación pública, instancias clave del bienestar social y de la movilidad ascendente de las clases populares.

López Obrador está cierto que “el Estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social”. De hecho, su postura es recuperar espacios de gestión estatales delegados a los particulares, pasar del Estado mínimo al Estado fuerte “de manera pacífica, legal y democrática”. A esto se añade la presunción del presidente tabasqueño de que las instancias de intermediación del Estado con la población, una zona opaca donde han proliferado las organizaciones no gubernamentales (ONG), han tomado de pretexto la acción social para lucrar a costa del bien público.

En consecuencia, López Obrador plantea una reingeniería del gasto que “dará preferencia a los pobres” a fin de que el presupuesto sea “realmente público”. Esto, como abordaremos después, también implica el trato directo del jefe del Ejecutivo con la población y la anulación de espacios de intermediación civil.

El rescate de las empresas paraestatales es objetivo prioritario del presidente tabasqueño, es su obsesión: “por el bien de la República es indispensable

recuperar el sector energético para integrarlo, convertirlo en palanca del desarrollo nacional y manejarlo con eficiencia y honestidad". Limpiarlo de la corrupción, clausurar la privatización de la industria energética y sanear las finanzas de estas paraestatales (la deuda de Petróleos Mexicanos representa el 97% de sus activos, convirtiéndola en la empresa petrolera más endeudada del mundo) parecen vitales a López Obrador: "es indispensable regresar el sector energético al poder público y evitar que se mantenga como negocio de políticos corruptos, traficantes de influencias y logreros rapaces, tanto nacionales como extranjeros". Conseguido esto, se buscará la soberanía energética reactivando la producción petrolera, además de construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y rehabilitar seis más "para reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas, la electricidad y los productos petroquímicos, con el propósito de beneficiar al consumidor e impulsar la actividad industrial y crear empleos". Desafortunadamente, aparte de ser onerosísimas —Dos Bocas se estima costará alrededor de 14,000 millones de dólares—, parece improbable que las refinerías de Pemex produzcan a precios por debajo de las refinerías estadunidenses en donde se procesa el 75% de las gasolinas que consume nuestro país.

Hablemos de la educación superior. La cobertura en México actualmente es del 38.4% (una matrícula de 4.2 millones de estudiantes), diez puntos porcentuales debajo del promedio latinoamericano y la mitad de la media (73.8%) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La deficiente preparación de los aspirantes, la falta de recursos económicos de los estudiantes y la insuficiencia de los planteles universitarios son las causas principales de este rezago. No obstante, como apunta el secretario general de este organismo multilateral, resulta crucial atender este problema, pues "las inversiones en el acceso a —y la calidad de— la educación superior se traducen en beneficios para nuestras economías, para nuestras sociedades, para nuestros países: incrementan la conciencia social, fortalecen la participación democrática, aumentan la recaudación fiscal, reducen la criminalidad y elevan los niveles de innovación y productividad del país, entre otros".

La oferta de campaña de López Obrador fue crear cien nuevas universidades, becar a los estudiantes y reducir a cero el número de rechazados, esto es, todo aquel que deseara acceder a los estudios universitarios tendría la oportunidad de conseguirlo: "es responsabilidad del Estado la universalización del derecho a la educación en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad". Con ello, el presidente tabasqueño se hace cargo de un problema capital, como acabamos de leer en la declaración del secretario general de la OCDE, pero la dificultad

para resolverlo estriba no únicamente en la dimensión de la empresa que pretende realizar en su administración; reside, más que nada, en que López Obrador obvia el desastre de los niveles educativos preuniversitarios, comenzando por la educación básica, situación que se agrava con la supresión de la reforma educativa, promesa electoral también del presidente tabasqueño.

López Obrador planteó destinar 1% del producto interno bruto (PIB) al gasto en salud. Junto con la seguridad, dice, la salud es el principal reto que enfrentará su administración, dado que no hay medicamentos, no hay personal y los hospitales son insuficientes. El político de Macuspana anunció que recentralizará en la Secretaría de Salud federal los recursos para atender a la población carente de seguridad social, bajo la consideración de que los gobiernos estatales no hicieron buen uso de éstos, revirtiendo la práctica de federalización de la salud inaugurada en la administración de Miguel de la Madrid y desmontando también el Seguro Popular creado por el gobierno foxista. El Ejecutivo federal propone la compra consolidada de los medicamentos con la intención de reducir los costos por la intervención de mayoristas y la corrupción de los políticos que se han hecho cargo en el sector salud y participan en el mercado de los medicamentos. Según declaró el presidente tabasqueño a principios de marzo de 2019: a lo más había “quince empresas que acaparaban de la compra de fármacos, para lo que el gobierno destinaba alrededor de 80 mil millones de pesos al año” y, de todos modos, “no hay medicinas en los centros de salud ni en los hospitales”. López Obrador ofreció medicamentos gratuitos a la población de menores ingresos. Y prometió que, en dos años, México dispondría de un sistema de salud como con los que cuentan los países escandinavos y Canadá.

A despecho de los buenos deseos presidenciales, la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, aprobada por la Cámara de Diputados a finales de abril de 2019, afectó a sectores que López Obrador se había comprometido a cuidar. La citada ley partió de la consideración de que “las cifras del dispendio son exorbitantes, año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son, enunciativamente, seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes”. Las pensiones de los expresidentes también fueron abolidas. Y la contratación por honorarios no estipulada en el presupuesto y los viajes de los servidores públicos quedaron prácticamente bajo el ojo vigilante del jefe del Ejecutivo. Los ahorros y economías obtenidos de la aplicación de la

norma “serían destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes aplicables” (artículo 1). Igual que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la implementación de la nueva disposición fue poco cuidadosa, realizando recortes draconianos en los presupuestos de educación, ciencia, salud, medio ambiente y cultura, o derivando en disposiciones absurdas en contextos laborales distintos de la administración central. Aquellos recursos acaso fluyeron hacia los programas sociales, pero, sin duda, fueron empleados subrepticiamente en la capitalización de Pemex.

Las soluciones ofrecidas por López Obrador no son las mejores, pero se dirigen a problemas fundamentales, al déficit social que a un siglo de la Revolución mexicana no se logró abatir y a la corrupción endémica de la administración pública, doblemente inmoral porque lucra con el erario y se ceba en el gasto social. La Estafa Maestra, hecha pública en septiembre de 2017, destapó las alcantarillas de la corrupción priísta. Violando la normatividad vigente, entre 2013 y 2014, 185 compañías recibieron 7,670 millones de pesos del gobierno federal. De éstos, alrededor de 3,433 millones de pesos se esfumaron en la nómina de empresas fantasma. De acuerdo con la investigación periodística de Nayeli Roldán y Manuel Ureste, once dependencias gubernamentales realizaron el desvío —Sedesol, Pemex, Banobras, Fovissste, Sagarpa, Senasica, SEP, INEA, SCT, la Secretaría de Economía y el Registro Agrario Nacional—, con la complicidad de ocho universidades públicas estatales, cada una de las cuales recibió una comisión de 1,000 millones de pesos por prestarse al fraude. ¿A quién o a qué iba dirigido originalmente el dinero desviado? A estudiantes, analfabetas, campesinos, trabajadores, vivienda popular.

El Caso Odebrecht sacó a la luz los sobornos millonarios que la constructora brasileña entregó durante dos décadas a presidentes y altos funcionarios de doce países —Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela— con el propósito de hacerse de contratos en el sector energético. En la campaña presidencial de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin —influyente miembro de su comité de campaña e hijo de Emilio Lozoya Thalmann, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el gobierno de Salinas de Gortari— habría recibido 10 millones de dólares. Electo el político de Atlacomulco, nombró a Lozoya Austin director general de Pemex. En 2013, Odebrecht obtuvo la licitación para realizar obras en una refinería de Tula, Hidalgo, aliándose con la

empresa local, Construcciones Industriales Tapia. Al siguiente año, la empresa de Marcelo Odebrecht, por medio de su filial Tag Pipelines, ganó el contrato de construcción del tramo dos del gasoducto Los Ramones, el cual recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Hasta el momento, lo único que hay con respecto del castigo a estos actos de corrupción es la orden de aprehensión para Lozoya Austin girada por la Fiscalía Federal de la República.

El sistema político mexicano suele purificarse sexenalmente buscando chivos expiatorios a quienes responsabilizar de los excesos más lastimosos de los gobiernos salientes, lo cual no significa la ausencia de deudas con la justicia por parte de aquéllos, acaso más graves que las de los delitos imputados. Antes de la alternancia, el mecanismo funcionaba bajo la premisa de castigar a los pocos para salvar a los muchos, y así generar una mínima expectativa ciudadana de que algo cambiaba. Jorge Díaz Serrano, epítome de la corrupción lopezportillista, se las vio con la renovación moral de Miguel de la Madrid. A Joaquín Hernández Galicia, la Quina, Carlos Salinas de Gortari le hizo pagar la osadía de movilizar el voto de los petroleros en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general que nacionalizó la industria. Raúl Salinas de Gortari cargó con los crímenes políticos del sexenio de su hermano, mientras Ernesto Zedillo y Carlos Salinas se responsabilizaban mutuamente del “error de diciembre”. Los panistas se cuidaron las espaldas entre ellos. Y, con el PRI de regreso, también volvió la práctica de aquel ritual renovador, encontrando en la maestra Elba Esther Gordillo a la villana perfecta, más todavía por haberse opuesto a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador ha fustigado a muchos políticos y empresarios en sus conferencias mañaneras, pero procedido penalmente sólo contra cinco figuras importantes, si bien menos conocidas que las cazadas por sus predecesores: Eduardo León Trauwitz, Emilio Lozoya Austin, Juan Ramón Collado Mocelo, Alonso Ancira Elizondo y Rosario Robles Berlanga. El general, exjefe de la subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. El economista, director general de la paraestatal. El abogado, defensor de políticos encumbrados. El empresario, dueño de Altos Hornos de México. La experredista, secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto. León Trauwitz y Lozoya Austin están prófugos. A Collado Mocelo lo aprehendieron cuando comía en las Lomas con Carlos Romero Deschamps, quien tuvo a bien resguardarse debajo de una mesa pues pensó que iban por él; renunció poco después a la dirección del sindicato petrolero. Ancira Elizondo está en libertad bajo caución en España. El general fue escolta de Peña Nieto cuando éste se

desempeñaba como gobernador del Estado de México. Lozoya Austin formó parte del equipo de campaña y de transición del golden boy de Atlacomulco. Collado Mocelo divorció a Peña de Angélica Rivera. Ancira Elizondo adquirió Altos Hornos cuando Salinas de Gortari remató las paraestatales. Robles Berlanga es una de las piezas de la Estafa Maestra. Se les imputa responsabilidad en el robo de combustible de Pemex, recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht —probablemente desviados a la campaña presidencial peñista—, lavado de dinero, la venta fraudulenta de una empresa de fertilizantes a Pemex, la canalización de fondos públicos a empresas fantasma, respectivamente.

El perfil de los acusados y el nexo con Peña Nieto —e incluso con Carlos Salinas en los casos de Collado Mocelo, Lozoya Austin, Ancira Elizondo y Robles Berlanga— ofrecen indicios relevantes de lo que será el combate contra la corrupción en la administración obradorista y desmiente, o pone en duda, ciertas hipótesis de por qué el relevo gubernamental fue bastante terso. Comenzaré por esto último. En una suerte de complot al revés, en el que López Obrador no es víctima sino cómplice, éste habría realizado un pacto de impunidad con Peña, signado ante la amenaza del candidato panista Ricardo Anaya Cortés de meter al presidente priísta a la cárcel en caso de ganar. Que López Obrador proceda penalmente contra personas del círculo peñista no avala esa presunción, sino más bien una manera de eludir la explicación rigurosa del descalabro electoral de la Coalición por México al Frente.

En cuanto al combate a la corrupción en el gobierno obradorista, percibo un cambio en relación con sus antecesores. Más que el castigo ejemplar a políticos señalados por la opinión pública, parece cobrar relevancia desmontar el engranaje y descubrir las redes que articulan el crimen con los negocios y la política. De una u otra manera, cuatro de los imputados tienen que ver con Pemex. La paraestatal, no olvidemos, constituye el centro de la política económica del presidente tabasqueño, quien ha de mostrar a la ciudadanía que el sacrificio económico implícito en el rescate de la empresa energética no será en vano, que se acompañará del castigo a los posibles responsables de su ruina (habrá que recordar que el combate al huachicol es una de las medidas de la nueva administración mejor evaluada en las encuestas). En otro plano, López Obrador dirige sus baterías hacia la colusión del crimen, la política y el dinero en la formación neoliberal, sobre la cual, si se prueban los cargos, el caso de Collado Mocelo, por sus múltiples redes y registros, sería paradigmático. No estaríamos hablando ya de la compra de barcos a sobreprecio que condujeron al

ingeniero Díaz Serrano a prisión cinco años o de la buena vida que la maestra Gordillo se daba con las cuotas sindicales. Aquél develaría cómo el dinero de la economía criminal entró en los circuitos financieros, y de qué manera la fusión del crimen, el capital y la política hicieron del país lo que es hoy.

Otro acontecimiento que agravió profundamente a la sociedad fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. Desafortunadamente, tanto los vicios de origen del caso como los intereses políticos en juego y el estado de guerra en que vive el país hacen muy difícil el esclarecimiento del paradero de los estudiantes. Un problema mayor representará satisfacer a los familiares de las víctimas y a la sociedad mexicana, bastante escépticos de cualquier acción gubernamental: si no aparecen los cuerpos de los jóvenes jamás quedarán satisfechos (basta ver la reacción de los padres cuando se identificaron en Innsbruck, con alto grado de probabilidad, los restos de dos de los estudiantes). El gobierno de López Obrador busca traer de nueva cuenta a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que condujeron la pesquisa en 2015, pensando que con ello podrá retomarse el hilo del caso. También el presidente tabasqueño ofreció el testimonio de los militares del 27 Batallón de Iguala, mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración informó que reabrirá varias de las líneas de investigación canceladas en el gobierno de Peña Nieto, en particular, las esbozadas por el GIEI. No obstante, cada día que pasa obra en contra de los buenos deseos presidenciales y de la demanda de verdad por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad. Hasta el momento, se han excarcelado a la mitad de los presuntos responsables de los 142 vinculados a proceso, entre ellos Gildardo Astudillo (el Gil), jefe regional de los Guerreros Unidos, y los policías municipales inculpados: estos últimos ahora demandan indemnización. Con ello, el sustento factual del proceso penal se diluye todavía más. En ese contexto, el compromiso del fiscal general de la República a los padres de los 43 de “iniciar desde cero la investigación” luce sencillamente irrealizable. Y contender con la frustración por la expectativa creada y la promesa rota será un costo altísimo que habrá de pagarse o atajarlo con una nueva “verdad histórica” que no complazca a nadie.

La utopía conservadora

Si el veneno que está consumiendo al país es la corrupción, el antídoto es la honestidad, piensa el presidente tabasqueño. No se trata entonces de reforzar o sanear las instituciones existentes ni tampoco de crear otras nuevas, para contener la voracidad de quienes detentan el poder o cuentan con dinero y pretenden hacer más; el esfuerzo gubernamental deberá dirigirse a incorporar funcionarios probos, que sigan el ejemplo del presidente. De hecho, la idea de la administración pública de López Obrador no pasa por el saber hacer o la experiencia, más bien las asocia con la honestidad, la incorruptibilidad y la lealtad al presidente. Los funcionarios son para él personas que están de paso en la responsabilidad gubernamental y, concluida su tarea, regresan a sus actividades habituales. Incluso él no se concibe como un profesional de la política. Al político de Macuspana le gusta decir de sí "no miento, no robo, no traiciono", las virtudes que considera esenciales del hombre público.

La constitución moral anunciada por López Obrador obliga a reflexionar acerca del vínculo de la moral con el orden jurídico, si éste supone la intromisión de la religión en el marco republicano y, de responderse afirmativamente, ponderar si ello debilita el Estado laico. Sin duda anacrónico, este documento peculiar apunta a un problema genuino de la tradición política, esto es, si las normas del pacto social se cumplen por sí mismas o bien necesitan de elementos externos para acatarse. Con respecto de lo segundo, los antiguos denominaban paideia a la formación del hombre, entendida como mejora y perfeccionamiento a fin de crear individuos aptos para cumplir los deberes cívicos. Entre los modernos, Rousseau habló de una religión civil "cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni súbdito fiel".

La constitución moral no refiere al marco normativo sino a las condiciones indispensables, o disposiciones morales, para que éste opere. En un segundo nivel, que podríamos denominar ideal o utópico, esta constitución sentaría las bases de la república amorosa que irrumpió en el discurso obradorista en 2011, significándose entonces como el "renacimiento de México" por la vía de "propiciar condiciones de progreso con justicia; así como un modo de vivir sustentado en el amor a la familia, a los otros, a la naturaleza y a la patria, tal y

como en su momento lo planteó Alfonso Reyes”. En la Cartilla moral (1944), recordemos, el helenista neoleonés se pronunció contra el principio tecnocrático que subordina la praxis humana a la razón instrumental, por lo que plantea recuperar la paideia como fundamento educativo, pues “se puede haber adelantado en muchas cosas y, sin embargo, no haber alcanzado la verdadera cultura”; esto acontece “siempre que se olvida la moral” o el “código del bien”.

López Obrador ha manifestado la voluntad de “impulsar una nueva corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes”, que oriente a la política hacia la meta superior de “lograr el amor y hacer el bien porque en ello radica la verdadera felicidad”. Éstos serán los fundamentos de una república fraterna o amorosa, empeñada en procurar la felicidad de los ciudadanos, moralizar a los corruptos, reducir las desigualdades y cimentar “una convivencia futura basada en el amor”. Una vez redactada esta constitución moral —apoyándose en especialistas, artistas, científicos y la comunidad en sentido amplio—, el Estado fomentará valores “por todos los medios posibles”. De acuerdo con este objetivo, “los contenidos serán transmitidos en las escuelas, en los hogares y a través de impresos, radio, televisión y redes sociales”.

La aspiración obradorista reside en transformar la sociedad en una comunidad ética (como en la Clarens de Rousseau), donde cada cual hará lo debido y se someterá a las normas de manera casi natural. Esto no es trivial. Resulta difícil determinar cuáles son los valores buenos para todos, así como definir quién está facultado para fijarlos, o incluso si la pregunta es válida. Además, partiendo de la certeza de López Obrador según la cual el Estado estuvo al servicio de una minoría, no hay motivos para pensar que un cambio de administración altere fácilmente esta situación forjada durante décadas o siglos. Bien sabemos que la sociedad plenamente reconciliada no existe, pero podemos tener la expectativa legítima de solucionar los conflictos de forma racional, justa y pacífica, y de que en lo posible se cumplan las leyes. Si bien el problema que intenta atacar la constitución moral es auténtico, me parece anacrónico el instrumento, tengo fuertes dudas sobre su eficacia y no considero siquiera deseable suscribir un decálogo estatal que oriente las prácticas y conductas de una sociedad compleja, diversa, desigual, contradictoria, rota.

López Obrador dispone de un discurso sencillo, convincente y machacón, aunque de una retórica antigua. En la evocación reiterada de las situaciones confrontadas por sus predecesores decimonónicos el presidente tabasqueño

encuentra analogías con el presente de manera tal que concibe la historia como maestra de la vida, experiencia vivida por nuestros ancestros que permite aprender de ella y salvar los errores del pasado. López Obrador propone una utopía conservadora, si bien rechaza el conservadurismo político por considerarlo hipócrita. No obstante, su propuesta es conservadora, tanto por su convencionalismo con respecto de los derechos de las mujeres y las minorías, como por su concepción acerca de la conflictividad social. Para el presidente tabasqueño el conflicto no surge en la sociedad misma —el antagonismo entre las clases—, sino entre el pueblo y un Estado copado por una minoría corrupta. En consecuencia, al modificarse el vínculo espurio entre gobernantes y gobernados, por medio de un pacto republicano, el conflicto se resuelve. Para López Obrador la desigualdad no es producto de la explotación, la dominación o la propiedad privada de los medios de producción, antes bien la provoca la corrupción. Únicamente la riqueza mal habida abona a la cuenta de la desigualdad. El pueblo obradorista es un ente pasivo, derechohabiente de un Estado honesto. Por tanto, está inhabilitado para emanciparse por sus propios medios, queda eximido de transformarse a sí mismo, basta que sea como es.

La política, según postula el presidente tabasqueño, es un instrumento para alcanzar la felicidad. Y lo es porque desde la función pública él quiere desarrollar la economía, redistribuir la riqueza y regular la convivencia. Se trata nada más de aplicar “en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor”. En tanto que la honestidad y la justicia permiten mejorar las condiciones de vida y lograr la paz pública, el amor sirve para impulsar el bien y lograr la felicidad. A sus ojos, la crisis del país es consecuencia tanto de la falta de bienes materiales indispensables para el conjunto de la población como de la erosión moral de la sociedad, de la pérdida de valores: arriba, por la codicia de los ricos; abajo, por la miseria del pueblo. El bienestar material sanará el cuerpo social, mientras que el fortalecimiento de “los sentimientos humanitarios” curará el alma nacional. En función de atender ambos —destaca López Obrador—, “mi propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y, al mismo tiempo, auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad”.

En una moralización de la política, el presidente tabasqueño asume “que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino mediante la armonía con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo”. También, López Obrador desea acotar el individualismo (exacerbado por el

neoliberalismo) en favor del altruismo y la solidaridad, “principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás”. Nacionalista en economía, romántico en la caracterización del pueblo, utópico en su concepción de la armonía social, conservador en cuanto a la moral, cristiano en lo que respecta a la perspectiva histórica providencialista que sustenta, el presidente tabasqueño vislumbra la república amorosa en el horizonte nacional, resultado “de una revolución de las conciencias que ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, la moral y el amor al prójimo”.

3

LA REPÚBLICA PLEBEYA

A los cien días de gobierno la popularidad de López Obrador estaba por las nubes. Si bien variaban los números —del 67% de Mitofsky al 86% de Parametría—, el consenso de las encuestas era que el presidente había incrementado alrededor de 15 puntos porcentuales su índice de aprobación entre agosto de 2018 y marzo del siguiente año. Era el mandatario mejor evaluado de Latinoamérica y ocupaba el tercer sitio a escala planetaria. Que comenzara muy bien valorado no era novedad —así ocurrió con Fox y con los presidentes latinoamericanos emanados de las izquierdas emergentes—; que creciera tanto en los meses subsecuentes, sí lo era. El Financiero le otorgó un 78% de aprobación y su coordinador de encuestas no dudó en afirmar que "éste es el nivel más alto de apoyo de los últimos 30 años a un presidente mexicano en sus primeros meses de gestión". Perplejos, los comentaristas políticos oscilaban entre vaticinar la inminente caída de la popularidad presidencial a consecuencia de su deficiente manejo de la economía, achacar aquélla a la ignorancia e insensatez de sus seguidores o bien atribuirla a la aquiescencia de una grey seducida por el Mesías.

López Obrador ganó la elección porque logró concentrar en un polo la expectativa de un electorado que quería el cambio y acaso después de tres meses más gente pensaba que efectivamente lo estaba realizando. El combate al robo de combustible, las medidas contra la corrupción, el proyecto educativo y las acciones contra la pobreza eran los rubros de la agenda presidencial mejor calificados. El presidente tabasqueño contaba entonces con el respaldo de las clases populares y medias, era mejor visto por los adultos que entre los más jóvenes, mejor por los hombres que por las mujeres. De todos modos, su aprobación rebasaba la media prácticamente en todos los rubros. Y dos tercios de los encuestados reconocían que López Obrador estaba cumpliendo lo prometido en campaña, algo inédito en los usos y costumbres de los políticos mexicanos.

El nacionalismo económico y sobre todo las políticas sociales apuntalaron la

popularidad del presidente tabasqueño. Aquél, caballo de batalla del desarrollismo de mediados del siglo pasado, con finanzas públicas sanas y motor de un crecimiento económico sostenido. Éstas, soporte de la relativa paz social durante el "milagro mexicano", con una redistribución del ingreso que, si bien no acababa con la pobreza, ofrecía cierto alivio a las clases populares fortaleciendo su compromiso con el régimen posrevolucionario que mal que bien hacía algo por ellas. Ambas políticas puestas en acto integraron el entorno dentro del cual López Obrador realizó su socialización política, fogueándose en el trato con las clases populares y los marginados. Eso antes era medianamente común, actualmente suena anacrónico además de inaceptable, incluso radical para sus detractores. Sin embargo, la práctica de mirar hacia abajo, el contacto frecuente del presidente tabasqueño con los gobernados y el diálogo informal con los subalternos fortaleció su imagen. Chilapa, Reynosa, Badiraguato e Iguala, ciudades donde los presidentes de la alternancia no se paraban, gobernadas por el crimen, recibieron con entusiasmo a López Obrador. Pancartas de bienvenida, vítores y solicitudes expresas rubricaron el reencuentro del Ejecutivo con la gente de a pie.

Estado y mercado

El mercado es el demiurgo de la sociedad contemporánea, el sustituto de la voluntad divina de las antiguas religiones: quita y pone presidentes, decide quién gana y el que pierde en la vida, premia a los eficientes y castiga a los holgazanes, acaba con algunas especies vivientes e hibrida a otras haciéndolas más resistentes, reduce lo humano a cosas que, como tales, se compran y venden. Es tan perfecto que se autocorrige, es tan neutro que no hace distingos a la hora de emitir sus veredictos siempre justos e inapelables, es tan sabio que asigna recursos de manera acertada, es la mano invisible o fuerza oculta que reemplazó a la Providencia en la moderna teología neoliberal. Para ella, el Estado está para servir al mercado, incluso a costa de los ciudadanos.

La política económica de López Obrador, basada en el nacionalismo económico de la posrevolución, no es bien vista por el capital financiero ni tampoco por las comunidades indígenas. Para aquél, el presidente tabasqueño piensa el país de manera aislada; según éstas, no se hace cargo de los intereses de los pueblos originarios y de su forma de administrar los recursos naturales; también advierten el peligro de la eventual privatización de sus territorios con la llegada de la inversión estatal y privada. Poco capitalista y provinciano para el capital global; neoliberal y depredador de acuerdo con las comunidades locales que se asumen “anticapitalistas”. No se integra al flujo global de capital en un caso; subordina a los pueblos originarios a la lógica del capitalismo neoliberal, desde la segunda perspectiva. Sin embargo, contra tirios y troyanos, el 17 de marzo de 2019 López Obrador decretó en un acto público el fin de “la política neoliberal y la política económica del pillaje, antipopular y entreguista… quedan abolidas ambas cosas”.

López Obrador ha tenido algunas escaramuzas con el mercado (la cancelación del NAIM, el rescate de Pemex) de las que no sabemos si finalmente saldrá bien librado. Siempre antepuso la política a la economía, fundamentando aquélla en consideraciones morales dentro de su batida contra la corrupción. En cualquier caso, el presidente tabasqueño no rompió el equilibrio macroeconómico, ajustándose a la disciplina presupuestaria. El desorden en el gasto público, que suele atribuírsele al “populismo” latinoamericano, ha topado con la austeridad republicana pregonada por López Obrador y su manejo responsable del

presupuesto, a tal grado que el primer trimestre de su administración arrojó un subejercicio. Puede no ser eficiente esta práctica, pero ciertamente no es dispendiosa, como sí la fue la de sus predecesores neoliberales. También, hay que decir, la economía se estancó en el primer año de su administración.

Para el nacionalismo económico de López Obrador la soberanía energética es fundamental, por tratarse de un asunto de seguridad nacional y, al mismo tiempo, porque la explotación petrolera es el puntal del programa económico de la Cuarta Transformación. Considera prioritario el presidente tabasqueño recuperar el terreno cedido a las compañías transnacionales en la explotación petrolera y, también, el procesamiento de los hidrocarburos, a fin de tener una industria integrada desde la exploración hasta la petroquímica. Esto requiere extirpar la corrupción de Pemex, inyectar recursos frescos a la empresa y hacerse de los nichos de mercado perdidos por obra de la privatización del sector energético. La tarea es titánica y la estrategia, cuestionable. Titánica, porque la paraestatal es la petrolera más endeudada del mundo, su tecnología es obsoleta, la inversión está muy por debajo de lo indispensable y el sindicato petrolero es el epítome de la corrupción. Cuestionable, porque son insuficientes los recursos del Estado, y la alianza con las empresas transnacionales podría aportar capital y tecnología de punta para la exploración en aguas profundas, liberar fondos públicos para otros rubros básicos o bien el Estado podría invertir en energías limpias.

El rescate financiero de Pemex arrancó en febrero de 2019 con la reducción de la carga fiscal en 15,000 millones de pesos y 25,000 millones en capitalización a la paraestatal. Medidas insuficientes para que las calificadoras internacionales mejoraran la evaluación de la empresa ponderándola a la baja. El argumento de las entidades especializadas en determinar el grado de inversión de empresas y países, es decir, el riesgo que implica canalizar recursos hacia ellos (vía inversión o préstamos), consistió en decir que las acciones se quedaban cortas y básicamente eran erradas, pues al emplearse recursos presupuestarios para sanear a la petrolera estatal se debilitaban otros renglones del gasto público, y el que verdaderamente importa al capital global: la inmensa partida comprometida en saldar la deuda pública. La única opción considerada aceptable por las calificadoras era que Pemex se volviera por sí misma una empresa eficiente y rentable. De esta manera, no habría más salida que reactivar la reforma energética para remontar la caída prolongada de la producción petrolera mexicana —45.8% en los últimos catorce años—, consecuencia de la bajísima o nula inversión en exploración en el último cuarto de siglo, así como el agotamiento de los yacimientos de la Sonda de Campeche, explotados en aquella

bonanza irresponsable que únicamente se comprometió a “administrar la abundancia”.

Otra obsesión de López Obrador es refinar el petróleo para ser autosuficientes en la producción de gasolinas, dado que actualmente el país produce una cuarta parte de los hidrocarburos que consume. Con este objetivo, comprometerá recursos en modernizar seis refinerías y crear dos nuevas. Dos Bocas, junto con el Tren Maya, serán las megaobras del sexenio, ambas en el sureste. Las refinerías, proyectadas para procesar 300,000 barriles diarios de petróleo crudo en Tabasco, estima el gobierno que costarán 8,000 millones de dólares, aunque el cálculo extraoficial es un 50% mayor. El presidente espera tener en operación en tres años la primera de ellas, fecha fatal en que se dejará de importar gasolina. Los cuestionamientos han sido múltiples: cuál será el costo real de la obra, considerar opciones tales como comprar pequeñas refinerías en Texas o permitir que inversores privados las construyan en México, dejar que las plantas estadunidenses procesen las gasolinas nacionales (presumiblemente a costos más bajos) o canalizar esa masa de recursos a producir las energías limpias del futuro, particularmente la solar. No obstante, al igual que con Pemex, López Obrador antepone la cuestión de la soberanía —la misma consideración hace para la electricidad o la producción de maíz— a la eficiencia económica, distanciándose de nuevo del planteamiento neoliberal.

La sagacidad política de López Obrador volvió virtud lo que inició como el yerro de un equipo inepto. Existe la presunción de que en diciembre de 2018 disminuyó drásticamente la compra de gasolinas en el mercado estadunidense con el consecuente desabasto de combustible en México. Problema al que se añadió la falla de la refinería de Salamanca, capaz de destilar 220,000 barriles de petróleo crudo, por forzarla a procesar crudo pesado sin mediarlo con el petróleo ligero de importación. Tanto la circunstancia como la preocupación que el presidente tabasqueño expresó en la campaña por el robo de combustible, al grado de anunciar que lo tipificaría como delito grave, precipitaron la guerra contra el huachicol que, pese al desbasto de combustible, contó con el apoyo de la población frente a la evidencia de que las administraciones anteriores habían ignorado el problema o carecieron del respaldo popular suficiente para tomar medidas que en lo inmediato perjudicaban a los consumidores.

Mientras la guerra al narco de Calderón fue celebrada por un segmento de la clase media, la derecha, el capital y Estados Unidos (un verdadero éxito de acuerdo con los despachos de la embajada estadunidense del primer año), y el

“mover a México”, de Peña Nieto, sólo logró el consenso de las élites, el combate al huachicol emprendido por López Obrador era transversal, concernía a todos, de tal manera que, en cuestión de meses, la población pasó del antigobiernismo histórico a casi su opuesto, otra marca impuesta por el presidente tabasqueño. Incluso la explosión en enero de 2019 de la toma clandestina de un ducto de Pemex en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, y sus 135 víctimas fatales no menguó un ápice la popularidad de López Obrador, como tampoco ocurrió con el fallido operativo de la marina, iniciado en marzo, para capturar a José Antonio Yépez (el Marro), jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, asentado en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

El nacionalismo económico del presidente tabasqueño está acompañado por el desprecio a la globalización. Sintomáticas de esto han sido sus declaraciones en el sentido de que el petróleo deberá cubrir primero las necesidades nacionales antes de exportarse. También ilustra este punto la minimización de López Obrador de las evaluaciones negativas de las calificadoras con respecto al rescate de Pemex, o la falta de una respuesta puntual a los cuestionamientos de la Asociación de Transporte Aéreo (IATA) sobre la inviabilidad del funcionamiento simultáneo de los aeropuertos Licenciado Adolfo López Mateos (Toluca), Benito Juárez (Ciudad de México) y el proyectado Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía (Zumpango). Recordemos que, desde la campaña, el político de Macuspana anunció que cancelaría el proyecto del NAIM sustituyéndolo con la construcción de dos pistas adicionales en la Base Aérea Militar Alfredo Lezama Álvarez. Ni entonces, ni tampoco ahora, su equipo ha realizado un estudio de factibilidad técnica en Santa Lucía, aunque el presidente tabasqueño determinó su edificación a manos del ejército a partir de enero de 2019, institución que recibirá las ganancias que aporte la terminal aérea. Pero, más allá de la voluntad presidencial, la complicación estriba en que la IATA es la referencia de las líneas aéreas en materia de aviación comercial, razón por la cual si no otorga su aprobación al proyecto aeroportuario las principales compañías aéreas del mundo simplemente no aterrizarán en el Felipe Ángeles. A esto se han agregado objeciones con respecto a la afectación de las comunidades cercanas y sobre el posible impacto ambiental.

El Tren Maya, en el que se ha comprometido buena parte de los recursos ahorrados con la austeridad republicana de acuerdo con el presupuesto de 2020, pretende explotar el turismo en el sureste. La obra, calculada en 8,000 millones de dólares, conectará con 1,500 kilómetros de vías férreas —nuevas o remozadas — cinco entidades federativas, en las cuales hay importantes vestigios

arqueológicos de los antiguos mayas. Los ambientalistas señalan que la megaobra puede afectar la biósfera y los microclimas de la región. Las comunidades neozapatistas indican que el ferrocarril es la punta de lanza del capitalismo global, el cual no llevará a sus territorios más que daños, degradación y el despojo de sus tierras con los tres millones de visitantes anuales que se estima movilizará el Tren Maya. Por esta razón, las mujeres del EZLN declararon en enero de 2019 que se opondrían a este proyecto y al otro anunciado por López Obrador consistente en sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste, además del rechazo a las mineras transnacionales, "porque constituyen una estrategia para convertir los territorios de los pueblos originarios en mercancías".

Los reparos a las decisiones económicas de López Obrador, además de denuncias respecto del conflicto de intereses, imposición de funcionarios e incompetencia de algunos de los miembros del gabinete del presidente tabasqueño, propiciaron la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la cartera de Hacienda y Crédito Público en julio de 2019. Con inusual beligerancia, el secretario adujo estar convencido "de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los posibles efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda". En entrevistas a los medios, Urzúa Macías también señaló el voluntarismo con el que se manejaba la administración obradorista y la necesidad de realizar una reforma fiscal para enfrentar los gastos derivados de los programas sociales y del rescate de Pemex con fondos públicos. La renuncia de Urzúa fue leída por los organismos financieros internacionales como falta de consenso en el equipo de López Obrador, lo que reforzaba la incertidumbre acerca de la perspectiva económica del país. No obstante, su relevo, Arturo Herrera Gutiérrez, calmó los mercados, apuntó la necesidad de una reforma fiscal en la segunda mitad del sexenio y aplicó algunas medidas para incentivar el crecimiento económico.

Los olvidados

La cuestión social ha estado ausente del discurso público de los últimos veinticinco años. Ni la tecnocracia neoliberal ni la derecha en el poder asumieron el locus específico de la izquierda. En estos años la economía creció insuficientemente y se ensanchó la brecha social de manera considerable. La condición para revertirla era la intervención estatal como agente de la redistribución del ingreso, es decir, un Estado que ejerciera sus competencias en lugar de minimizarlas. El salario mínimo en nuestro país es uno de los más raquíticos de América Latina, el lugar 19 del subcontinente y el penúltimo de abajo hacia arriba para ser precisos. A partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo subió un promedio del 16.21% a nivel nacional —incremento superior al registrado en todo el sexenio de Felipe Calderón— duplicándose en la frontera norte. La medida, aprobada por los tres sectores del ramo laboral (Estado, patrones y trabajadores), se presentó como un compromiso ineludible con la justicia social y parte también de una estrategia de fortalecimiento del mercado interno. El beneficio directo será para 8 millones de trabajadores que tienen un ingreso entre uno y uno y medio salarios mínimos. A pesar del aumento, 50 millones de mexicanos reciben emolumentos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, lo que obliga a incrementos consecutivos y considerables en los próximos años. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el objetivo del consenso tripartito sería alcanzar en 2021 el lugar 10 y con ello superar a Honduras, país con una emigración masiva hacia Estados Unidos, según apuntamos.

El aumento del salario mínimo en la frontera norte vino acompañado de la reducción del 50% al impuesto al valor agregado (IVA), así como la disminución de un 10% del impuesto sobre la renta (ISR) y la homologación del precio de los energéticos nacionales con los estadunidenses. Además de favorecer a los habitantes de la franja fronteriza, la medida empata con la política migratoria de López Obrador, a saber: colocar “cortinas” a lo largo del país para reducir la emigración mexicana hacia Estados Unidos. En esta lógica también se inscribe la siembra extensiva de árboles maderables en el sureste en el marco del programa Sembrando Vida y, subsidiariamente, el Tren Maya. Sin discutir las múltiples implicaciones de estos proyectos, llama la atención que estén concentrados en el sureste como si ése fuera el principal foco de la emigración transnacional, y no

en Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Oaxaca o Guerrero, principales expulsores de migrantes hacia Estados Unidos.

Cuando fue jefe de gobierno del hasta hace poco Distrito Federal, López Obrador implementó un conjunto de programas sociales muy bien recibidos por la población de bajos recursos, los cuales posteriormente adoptaron los gobernantes de varias entidades de la república e incluso el gobierno federal, no sabemos si por convicción o simplemente para ganar elecciones. Madres solteras y adultos mayores fueron los beneficiarios más conocidos de esta política tildada de "asistencialista" por los opositores, quienes después se sirvieron de ella y dejaron de nombrarla así. En enero de 2019, el presidente tabasqueño puso en marcha programas sociales de alto impacto. El Valle de Chalco fue el escenario donde López Obrador presentó la pensión para adultos mayores que entregará 1,274 pesos mensuales de manera directa a personas de 68 años o más y de 65 en adelante si son indígenas, de una bolsa de 100,000 millones de pesos. Tlapa de Comonfort, en la Montaña guerrerense, constituyó el marco para anunciar una pensión de un monto idéntico para las personas con discapacidad de cualquier edad, que estima el presidente tabasqueño llegará a un millón de personas a lo largo del sexenio. Asimismo, López Obrador fijó precios de garantía para comprar maíz, frijol y leche a los productores agropecuarios por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), creado por su administración con este fin. Banco Azteca —propiedad de Ricardo Salinas Pliego— recibió la encomienda de emitir las Tarjetas del Bienestar, a través de las cuales se canalizarán los recursos destinados a los programas sociales, en tanto el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) se transforma en el Banco del Bienestar del Pueblo. Los beneficiarios ya bancarizados recibirán las pensiones y becas por medio de las instituciones de crédito donde sean cuentahabientes.

La política laboral de López Obrador es notoriamente distinta de la de sus antecesores. Del empeño estatal en intervenir en las negociaciones obrero-patronales, hemos pasado en pocos meses a permitir que los factores de la producción concierten entre ellos. No es una panacea, pero sí un cambio digno de tomarse en cuenta. Basta tan sólo recordar las imágenes de la Policía Federal Preventiva —si bien algunas fuentes indican que eran miembros del ejército quienes participaron en el operativo— ocupando las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, o el desdén de la empresa de Germán Larrea con los mineros fallecidos en Pasta de Conchos tres

años antes, y el nulo compromiso moral de Fox con las familias de las víctimas, para aquilatar el cambio en el mundo del trabajo.

La disparidad salarial es elevadísima en la frontera, razón por la cual desde la década de los sesenta comenzaron a instalarse maquilas en la región, con uso extensivo de mano de obra femenina y de trabajo no calificado, para abaratar los costos de producción en Estados Unidos. Una hora de trabajo en el país vecino genera un salario mayor que una jornada laboral completa de un obrero mexicano en Matamoros con condiciones laborales paupérrimas. En enero de 2019 los trabajadores de esta ciudad, agrupados en el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), demandaron un aumento salarial del 20%, además de un bono anual de 32,000 pesos. En febrero las maquiladoras de Reynosa y Ciudad Victoria hicieron reclamos parecidos. Hubo despidos, pero en muchos casos tuvieron éxito los huelguistas. Tan es así, que obreros de otros ramos los emularon, como ocurrió con las "huelgas salvajes" realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, en febrero y marzo de este año. Los paristas obtuvieron 20% de incremento salarial y un bono de 40,000 pesos.

En octubre de 2018 López Obrador declaró en Tampico que promovería una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantizara la democracia sindical, con elecciones por voto secreto, la prohibición de que los dirigentes coloquen familiares en cargos administrativos y que intervengan en la asignación de contratos. Volvió al tema el presidente tabasqueño cuando el senador Gómez Urrutia anunció en febrero del siguiente año la creación de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID), planteando López Obrador que no intervendrá en la vida interna de los sindicatos, además de decirse respetuoso de la libertad de asociación y pronunciarse por la democracia gremial. La nueva central, que tiene por punta de lanza el SNTMMSSRM, resulta pertinente dada la bajísima tasa de sindicalización en el país —aproximadamente un 10% de la población económicamente activa— y es también novedosa porque su naturaleza transfronteriza —la mayor densidad sindical en el país está en la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco— rompe las limitaciones nacionales del sindicalismo que suele hacerlo inoperante frente al capital global, al mismo tiempo que pone en jaque el corporativismo que es por definición estatal-nacional. Ello, claro está, no asegura que la central funcione democráticamente.

Aunque de mucho tiempo atrás se habló de modernizar la Ley Federal del Trabajo (LFT), las condiciones impuestas para la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) forzaron la reforma. De hecho, los acuerdos paralelos para la firma del TLCAN contenían disposiciones en materia laboral, no instrumentadas por el gobierno mexicano al no ser vinculantes. El capítulo laboral del T-MEC (Anexo 23-A), de observancia obligatoria para los firmantes, quiere hacer efectivas la negociación colectiva, la libre afiliación sindical, la pluralidad de sindicatos, la elección de las dirigencias sindicales por voto personal, libre y secreto con mecanismos de verificación confiables, la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, y la conformación de una entidad independiente de conciliación laboral y registro de los contratos colectivos de trabajo (disponible su consulta para todos los trabajadores), además de crear tribunales laborales independientes y permitir el arbitraje a cargo de terceros. Obsequiando esas demandas, e incluyendo un apartado sobre trabajadores del hogar, la Cámara de Diputados redactó las modificaciones a la LFT en abril de 2019, sometida a revisión por parte del Senado en un periodo extraordinario de sesiones.

Recordemos que en la toma de posesión de López Obrador los representantes de sesenta y ocho pueblos originarios le entregaron el bastón de mando de la Gubernatura Nacional Indígena (GNI), en el Zócalo, en una ceremonia pletórica de humo de copal, danzas, discursos, rituales religiosos y parabienes. El presidente tabasqueño dio a conocer en enero de 2019 el Programa Nacional para los Pueblos Indígenas en Oaxaca. La política pública es una suma de las anunciadas previamente —adultos mayores, discapacidad, jóvenes, apoyo al campo— con adecuaciones en favor de los indígenas a manera de acción afirmativa que les dé preferencia en el acceso a los recursos, el ingreso a las nuevas universidades, que en su mayoría se instalarán en las regiones indígenas, considere edades más tempranas para los adultos mayores (indígenas y afromexicanos), medicinas gratuitas en los servicios de salud públicos, liberación de los presos políticos y construcción de caminos de concreto con mano de obra local en los poblados donde haya alcaldías. También prometió López Obrador que aplicará en el istmo de Tehuantepec los mismos incentivos fiscales que en la frontera norte.

Hay en el país poco más de 38 millones de jóvenes (de 12 y 29 años de edad) que representan un tercio de la población total. Nueve millones de menores de 19 años no estudian, esto es, el 24% de quienes están en edad para hacerlo. Particularmente vulnerable es esta población, presa fácil del crimen organizado,

el cual tiene en la mira a muchachos entre 12 y 15 años, pues están debajo de la edad penal. Casi cuatro millones de jóvenes (3.9) ni estudian ni trabajan (los llamados raras), indica el INEGI. De los jóvenes que van a la escuela, anualmente desertan 650,000 de la educación media superior, motivo por el cual el 53% de los adultos jóvenes (de 25 a 34 años) cuenta únicamente con una educación inferior al nivel medio superior. Sólo el 38.4% de los jóvenes de entre 18 y 22 años realiza estudios universitarios y alrededor del 1% concluirá un posgrado. De acuerdo con datos de la OCDE, la tasa de empleo de personas con baja escolaridad es del orden del 65%, con educación media sube al 70%, y 80% para quienes cuentan con educación superior (el 22% de la población). Otro tanto ocurre con la calidad del empleo, del doble o más salario para los que disponen de un título universitario respecto de quienes únicamente acreditaron el nivel medio superior. Proporción que se cuadruplica si se posee un posgrado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las ocupaciones laborales asequibles para los jóvenes mexicanos son de baja productividad y valor agregado reducido, lo cual constituye un potente incentivo para intentar alcanzar la movilidad social ascendente al margen de la economía formal. En una sociedad que jerarquiza a los jóvenes con base en su origen y fenotipo, más una economía que los sitúa en los márgenes salariales y legales, la oportunidad de formar parte de un colectivo que les permita hacerse de una identidad grupal y los empodere en la comunidad no puede echarse por la borda así como así. Esta situación, aunada a la fragilidad de las instituciones y a la impunidad como parámetro de justicia, favorece la economía criminal con su ingente demanda de brazos para su funcionamiento y la persistente renovación de las bajas humanas provocadas por la violencia consustancial a su mecanismo de funcionamiento. Dentro de una economía estancada, el capitalismo criminal ofrece el ascenso social a una juventud sin ofertas laborales dignas.

López Obrador ha enfatizado mucho la importancia de que el Estado se ocupe de los jóvenes, y ve en la educación y el trabajo posibles salidas para alejarlos de la economía criminal, de allí su conocida frase de campaña “becarios sí, sicarios no”. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, el político de Macuspana creó preparatorias y una universidad pública para ofrecer educación a los jóvenes rechazados de las instituciones de educación superior más acreditadas. Partía del supuesto de que los estudiantes en esta condición tenían las aptitudes básicas para ingresar a la universidad, pero la falta de espacios suficientes lo impedía. Además, y con razón, como acabamos de exponer, esa situación eventualmente podría acercarlos a la actividad criminal.

Con una bolsa aproximada de 100,000 millones de pesos, similar al programa de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará becas de un año por un monto mensual de 3,600 pesos y un seguro médico a muchachos de ambos sexos entre 18 y 29 años —franja de edad que incluye a los ninis— para que se capaciten dentro de una empresa (2.3 millones) o realicen estudios universitarios (300 mil). Esta política pública es bien intencionada y se ocupa de un segmento de la población vulnerable, sin embargo, hay dudas en cuanto a su eficacia. Se presume que la intervención para que los jóvenes no abandonen la escuela debe ser en la infancia y no cuando ya arraigaron hábitos y conductas negativas en los muchachos. Y, en lo que respecta al primer empleo, existe la preocupación de que las empresas tomen esto como un subsidio (un trabajador al que no habrán de pagarle), deshaciéndose de él al terminar el periodo de aprendizaje, pues después vendrán otros jóvenes contratados bajo el mismo esquema. De esta manera, los aprendices, si bien les va, ingresan en el mercado laboral en calidad de trabajadores precarios. La experiencia del primer año mostró que estas presunciones eran correctas, por lo que el programa redujo el monto presupuestal a la mitad para 2020.

El eclipse de las élites

El statu quo posrevolucionario se configuró con base en las políticas desarrollistas en economía, el autoritarismo en la gestión pública y el corporativismo como conexión del régimen con la sociedad. Todo esto permitió el desarrollo de una burguesía nacional ligada con el Estado, el asentamiento de una burocracia política y sindical con poderes efectivos, la habilitación de ideólogos egresados de la UNAM, generales devenidos en políticos y caciques que dominaban regiones enteras. El movimiento de 1968 fue la falla tectónica de esa dominación consentida (por la buenas o las malas) donde el crecimiento sostenido de la economía derramaba algunos frutos hacia abajo, mientras la insolvencia financiera en el epílogo de la administración lopezportillista dio la puntilla al desarrollo estabilizador. Salvo la desafortunada frase de “Echeverría o el fascismo”, poco dijeron los intelectuales en favor de los responsables de la “docena trágica”. Vendría entonces el recambio de las élites o el reciclaje de algunos de sus miembros.

El distanciamiento de un segmento del empresariado con el gobierno de Luis Echeverría, motivado por el asesinato del magnate regiomontano Eugenio Garza Sada, se consumó con la nacionalización de la banca llevada a cabo por José López Portillo. Grotesca y dispendiosa, la administración del “último presidente de la Revolución” dio cabida a los tecnócratas que definirían el nuevo paradigma. La palabra modernización entró por la puerta grande al vocabulario público. Ésta, se pensaba, anclaría en la economía para posteriormente adentrarse en el sistema político, de acuerdo con la premisa liberal que considera la propiedad privada como condición de la democracia, forma deliberativa que debería procesar los disensos surgidos en la concurrencia mercantil. Sintonizadas la economía y la política con el reloj de la globalización, tocaría el turno a otros tópicos de la realidad nacional. Pero esto simplemente no sucedió, tanto por las inconsistencias intrínsecas del proyecto, los intereses a veces incompatibles de quienes lo llevaron a cabo, como porque la incursión en la globalización desanudó fuerzas no previstas por la tentativa modernizadora. Con la guerra interna las políticas de seguridad restaron atención a los renglones pendientes o, para ser más exactos, robustecieron la colonización del capital de nuevos dominios permitida por las políticas neoextractivistas. Y la necropolítica resultó en amplias zonas del país más adecuada para distribuir el poder que una

democracia cara y poco más que nominal.

La tecnocracia —formada en las universidades privadas y con posgrado en algún campus de la Ivy League— operó el proyecto modernizador, ya que la tentativa en su conjunto amalgamó empresarios, políticos, medios de comunicación e intelectuales. Asimismo, el crimen organizado se incorporó como elemento constitutivo del nuevo bloque en el poder formado a partir de la privatización de las empresas estatales, la desregulación económica y los mercados globales (incluido el de las drogas). Los doctores relevaron a los licenciados en la gestión tecnocrática. El Estado achicó la noción de lo público, desincorporó empresas y dejó a la iniciativa privada nichos económicos considerados anteriormente estratégicos; también desatendió algunas de las responsabilidades básicas que tenía con la población porque sus deberes fundamentales eran ahora con el mercado. Las grandes instituciones sociales de alcance nacional, creadas por el régimen posrevolucionario, quedaron como reliquias en el inventario público que las sustituyó con “programas”. La élite neoliberal, guardiana de las instituciones según leemos, no construyó ninguna entidad pública en materia social equivalente a la del periodo de la revolución institucionalizada; ni siquiera tuvo cuidado en seleccionar a los compañeros del viaje modernizador a juzgar por la incorporación del crimen a los circuitos económicos y financieros, no obstante el discurso sobre el estado de derecho que adereza sus acciones.

Amenazadas por el descontento social detonado por el ajuste estructural de la administración de Miguel de la Madrid, las élites modernizadoras aseguraron la continuidad de su proyecto mediante un fraude electoral, las mismas que ahora se rasgan las vestiduras con la revocación de mandato puesta en la mesa por Morena. No hubo argumento legal, ni digamos lógico, que valiera para revertir esa decisión inobjetable “en bien del país”, en el entendido de que el país eran ellos. El establishment intelectual avaló con malos argumentos o el silencio el atropello del Leviatán mexicano que ahora tanto le asusta. Y el presidente de la alternancia, conocido no por sus logros sino por la corona que fabricó con las boletas electorales quemadas, hoy se arrodilla obsecuentemente ante el “gran presidente que fue para México” Salinas de Gortari.

La modernización neoliberal fue excluyente, dejó fuera a medio país y a regiones enteras en donde en términos prácticos el Estado desapareció cediendo al crimen, o compartiendo con él, el control del territorio, el monopolio de la violencia y la fiscalidad, funciones sustantivas del Estado moderno. La alternancia democrática se dio en un contexto de guerra interna, lo que coartó los

derechos políticos de la población en las regiones dominadas por el crimen y revitalizó los cacicazgos en cuanto forma de intermediación entre las clases populares y el ente estatal. La presencia criminal y la empresa neoextractivista —acicateada por las leyes permisivas en materia de recursos naturales de la primera batería de reformas estructurales— violentaron el entorno y la vida cotidiana de los pueblos originarios, sometidos históricamente por los colonizadores y el Estado nacional, y en el neoliberalismo, por el crimen y el capital. Masas de excluidos se convirtieron en el ejército de reserva de la economía criminal, emigraron o intentaron aferrarse a los raquíticos apoyos públicos.

Las élites que dirigieron esta modernización coja sufrieron el descrédito no por no entregar el país que prometieron (de Primer Mundo), sino por redondear el ciclo neoliberal con la corrupción, incompetencia e irresponsabilidad de la última administración priísta, lo cual no exime a los otros gobiernos de la alternancia de su responsabilidad en el desastre. La clase política ocupada en los negocios. Los dueños del dinero lucrando con el Estado. Y los intelectuales sometidos dócilmente al poder económico. Esto, podemos decir, condujo a la crisis del liderazgo nacional que cobró factura el 1 de julio. Una crisis además de política, moral. El cráter que abrió en el sistema la arrolladora victoria de López Obrador, dejando los extremos del espectro político prácticamente deshabitados, es directamente proporcional a la magnitud de esta crisis. Como en los ochenta, la situación obligaba a un recambio de las élites, pero, a diferencia de aquel decenio, las élites emergentes eran muy pequeñas o inexistentes, dado que la izquierda no había gobernado a escala federal y porque el venero de la intelectualidad de izquierda representado por el comunismo casi estaba seco.

Acostumbrada a la lectura, cosmopolita en algunas de sus corrientes y forjada en el activismo social, la izquierda formó cuadros que solía robarle el PRI. Diluida en la confederación tribal que fue el PRD, la izquierda comunista perdió terreno en la dirección partidaria hegemonizada desde un principio por los expriístas bien curtidos en “la política a la mexicana”, como la llamaba Revueltas. Si la migración de la vieja izquierda fue hacia el PRI, el perredismo se nutrió de los desprendimientos del partido oficial, motivados más por el despecho que por la esperanza. En cuanto partido de masas, el Sol Azteca no hizo a la universidad pública la única fuente de cooptación, mientras la laxitud en el reclutamiento abatió la calidad de la militancia partidaria: la izquierda se volvió antiintelectual. Quedó atrás esa relación orgánica del comunismo con la cultura que enriqueció el siglo XX.

Morena se construyó a ras de piso con cuadros de la vieja izquierda y una base amplia y disímbola reclutada en barrios, comunidades y centros de trabajo. La lucha más que el estudio fue la escuela política de sus militantes, básicamente de extracción popular o procedentes de la clase media menos favorecida. Denostadas por las élites blanqueadas, golpeadas por la derrota, resentidas con quienes siempre se salían con la suya, las bases morenistas adquirieron el temple y disciplina indispensables para asaltar el poder cuando flaquearon sus adversarios. Sin embargo, no estaban preparadas para gobernar, pocos lo habían hecho, más allá de la obvia preferencia de López Obrador por los leales en desmedro de los competentes. Su inexperiencia y falta de credenciales técnicas son notorias, más en las áreas estratégicas que requiere personal altamente calificado. La sofisticación de algunos campos de la administración federal, de los organismos descentralizados o de las empresas paraestatales —en materia jurídica, tecnológica, financiera o científica— frente a la debilidad, numérica y de calificación, de la intelligentsia de la izquierda, complicaron el relevo gubernamental. La contundente victoria electoral generó expectativas muy altas acerca de la capacidad de gestión del nuevo gobierno, carente de los cuadros suficientes y habilitados para cubrir los huecos que dejó en la administración pública la reducción de salarios de la alta burocracia. Sin élites (al menos suficientes) para el recambio, una suerte de irrupción plebeya marcó el arranque de la Cuarta Transformación.

Es cierto que, entre los compromisos con los aliados o las conversiones súbitas hacia la izquierda, se colocaron en el equipo de López Obrador algunos funcionarios experimentados (y cuestionables), pero esto no desmiente la afirmación de que no hay élites, o son débiles e insuficientes, para ocupar las posiciones de las que van de salida. Esto, además de centralizar todavía más la gestión en un presidente propenso de suyo a ello, plantea un reto mayúsculo tanto al sexenio en curso como a la eventual continuidad de la Cuarta Transformación. Por lo pronto, los empresarios parecen dispuestos a jugar con sus reglas en el contexto del nacionalismo económico que postula el nuevo gobierno. En cuanto a la renovación de las élites, una posibilidad sería, de la misma manera que en la posrevolución, la formación de grupos dirigentes emergentes sobre la marcha, en el ejercicio de la administración o de la práctica parlamentaria; dada la continuidad en el ejercicio del poder por varios periodos, éstos acabarán por aprender. Otra más consistiría en promover lo que Gramsci conceptualizó como transformismo, esto es, la cooptación de los intelectuales subalternos por parte de las clases dominantes, nada más que a la inversa. Cosa asequible pues, como hemos visto, existe un mercado intelectual. La tercera

posibilidad residiría en que, con la debacle de los partidos tradicionales, aparezcan constelaciones políticas inéditas y mediante este tránsito se reconstituyan las élites. Que suceda alguna de estas cosas, o algunas otras en el mismo sentido, hará que la Cuarta Transformación no sea flor de un día. Pero eso, como toda historia, está por verse.

4

MÁS ESTADO, MENOS INSTITUCIONES

No hay popularidad que se sostenga con base en el puro carisma, antes bien requiere un andamiaje que permita conectar al líder con la población, facilite la interlocución política y encauce las demandas sociales. Por eso, además de los programas gubernamentales o de la probada estrategia comunicativa de López Obrador, deberíamos detenernos un poco en la arquitectura política que diseñó para ganar la presidencia y asentar su poder. Morena es el partido que permitió al político de Macuspana llegar a los rincones más apartados del país o, para ser más exactos, López Obrador conformó en cada uno de los lugares de su itinerario proselitista los comités de Morena que se expandirían hasta formar una amplia y eficaz red de militantes en todo el territorio nacional. Ya en la presidencia el político tabasqueño, Morena ha fungido como su brazo legislativo y maquinaria electoral. En lo que respecta a la relación con los demás poderes de la Unión, López Obrador recreó el Ejecutivo fuerte que subordina al Legislativo y Judicial, y mina su credibilidad cuando contravienen sus decisiones. En cuanto al pacto federal, el presidente creó la figura paralela de los delegados que representan a la Federación en los estados, un espejo de los gobernadores coordinado desde el centro. López Obrador ha debilitado las instituciones autónomas, sea quitándoles facultades o colocando incondicionales en los cargos. En materia de seguridad pública, el presidente tabasqueño profundizó la militarización emprendida por Felipe Calderón al crear la guardia nacional. Todas las riendas del poder estatal están en manos del Ejecutivo, pero sin abandonar el marco democrático ni romper el orden constitucional. López Obrador gobierna dentro de la ley en una suerte de centralismo paternalista, benefactor y redistributivo consentido por las mayorías. Otra cara del gen autoritario del Estado mexicano que la alternancia democrática no modificó.

Del movimiento al partido

Los movimientos sociales tuvieron un papel importante en el surgimiento de las izquierdas emergentes. A Podemos, en España, la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, o la precandidatura de Bernie Sanders, del Partido Demócrata, les precedieron protestas públicas contra las políticas que endosaron a las clases populares los costos de la Gran Recesión, esto es, un coctel de medidas de ajuste para equilibrar las finanzas públicas a costa de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación, la flexibilización del mercado laboral y la mengua salarial. También afloró el descontento con la fusión del dinero y la política, fundamento de una oligarquía que, sin rubor, transitaba de la política a los negocios en una suerte de privatización de lo público. La concesión del agua a una transnacional (Bolivia), la corrupción política (Venezuela) y la crisis económica (Brasil) proporcionaron el carburante de los movimientos sociales que contribuyeron a la victoria electoral de las izquierdas emergentes. En 2006 la izquierda mexicana estuvo a un tris de subirse a la ola del llamado progresismo latinoamericano, si bien llegó al poder doce años después, cuando en el subcontinente esta fuerza política iba en retirada y con un contexto internacional radicalmente distinto. Aquí también los movimientos sociales la impulsaron, aunque de una manera algo distinta de las izquierdas emergentes. Y Morena, la fuerza política que condujo a López Obrador a la presidencia, es un movimiento/partido que, acaso por su naturaleza anfibia, sorteó mejor la crisis de los partidos tradicionales.

La base social que construyó el político de Macuspana en la Ciudad de México le sirvió de plataforma para contender por la presidencia en 2006, nada más que a diferencia de la contienda por la gubernatura tabasqueña, en esta ocasión disponía de mayor poder y recursos. Los comités de apoyo a su candidatura serían el germen de Morena. De esta manera, en origen, el posteriormente llamado Movimiento de Regeneración Nacional tuvo una vertebración política que hizo inescindible la dupla movimiento/partido. Esta singularidad es importante si pensamos que las izquierdas emergentes articularon movimientos sociales preexistentes que contaron con liderazgos propios (aunque después se incorporaran a los partidos). Mientras ocurría la gestación de Morena, la protesta pública crecía en los gobiernos de la alternancia. A Fox le estalló Atenco, Pasta de Conchos y Oaxaca. La guerra calderonista retrajo temporalmente la movilización social. Sin embargo, ésta arreció cuando Calderón dejó entrever lo

que serían las reformas estructurales y se hizo público el saldo que la población civil pagaba por la guerra contra el crimen organizado. Y Enrique Peña Nieto sumó #Yosoy132, el movimiento magisterial y Ayotzinapa. En los movimientos sociales participaron militantes de la vieja izquierda, adscritos o no al PRD, algunos de los cuales se incorporaron a Morena. Pero incluso en ese caso, los movimientos sociales se desenvolvieron con autonomía de las estructuras partidarias formales.

Morena se constituyó como asociación civil con el propósito explícito de respaldar la carrera presidencial de López Obrador el 2 de octubre de 2011, fecha simbólica del movimiento estudiantil y de la transición democrática. Un año más adelante, en el emblemático 20 de noviembre, la organización celebró su primer congreso nacional donde decidió transformarse de movimiento en partido, por lo que adoptó una estructura distinta y nombró representantes y dirigentes, con el político tabasqueño a la cabeza. El 9 de julio de 2014 Morena obtuvo el registro como partido político nacional, sin abandonar sus raíces como movimiento, con lo que mantuvo la flexibilidad en sus mecanismos de cooptación. Con un método de selección de candidatos que combinaba elecciones, encuestas, sorteos, consensos y cuotas, la maquinaria política morenista pasó la prueba en la elección intermedia de 2015 en la que obtuvo 3,346,349 votos (8.82% del total) y ganó en la Ciudad de México, bastión histórico de la izquierda. De allí en adelante, el nuevo partido no haría más que crecer: primero a expensas del hermano/enemigo perredista, después captando a los desprendimientos de fuerzas distintas de la izquierda y a simpatizantes sin afiliación política previa. De todos modos, conviene ser cautos a la hora de distinguir a los militantes de Morena de quienes se agregaron a la alianza que permitió a López Obrador ganar la presidencia de la República sin necesariamente integrarse a las filas partidarias.

Morena pertenece a la izquierda nacionalista, una de las tres ramas del árbol de la izquierda mexicana. En su declaración de principios se solidariza “con las luchas del pueblo mexicano, en particular contra la exclusión, la explotación y la humillación”. Propone ser una organización plural e incluyente que, a decir de su programa, “lucha por el cambio de régimen por la vía electoral, pero también convoca al pueblo de México a movilizarse para resistir las reformas neoliberales y las políticas antipopulares, apoyar las demandas populares e impulsar el cambio verdadero”. Éste consiste en la transformación del régimen político a fin de democratizar la democracia, separar el dinero de la política y atajar la degradación de las instituciones públicas y de la convivencia nacional

con la organización popular para “decir basta a quienes, movidos por la ambición al dinero y al poder, mantienen secuestradas a las instituciones públicas, sin importarles el sufrimiento de la gente y el destino de la nación”. Lograr esto supondría una revolución de las conciencias que, en una ética de lo común, se basará “en la solidaridad, el apoyo mutuo, el respeto a la diversidad religiosa, étnica, cultural, sexual, que promueva el respeto a los derechos humanos, reconozca el sentido de comunidad, el amor al prójimo y el cuidado del medio ambiente”.

Sería reduccionista quedarnos únicamente con el componente ético del programa de Morena. El documento destaca también la necesidad de reforzar el Estado laico, el respeto a la diversidad (sexual, cultural, ideológica), el derecho a la autonomía de los pueblos originarios (si bien no postula un Estado plurinacional), la intención de acabar con los monopolios privados (económicos, de los medios de comunicación), la libertad gremial, la inserción en la globalización con base en el fortalecimiento del mercado interno y la promoción del interés nacional, la justicia social y la reducción de la desigualdad, el acceso universal a internet como parte de los derechos ciudadanos, la cancelación de los privilegios fiscales, la plena vigencia de los derechos sociales (trabajo, educación, salud, cultura y esparcimiento) dado que “las libertades civiles y políticas no pueden ejercerse a plenitud si no son atendidos los derechos colectivos”, además de la observancia de los derechos humanos pues “una equivocada política de combate al narcotráfico… ha costado al país decenas de miles de muertes, sobre todo de jóvenes a quienes se les han negado los derechos sociales y una esperanza de vida digna. Las víctimas de la violencia son cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas a quienes no sólo no se hace justicia, sino se les mantiene en el olvido”.

Las células básicas de Morena son los “comités de protagonistas del cambio verdadero”, organizados en grupos de entre cinco y sesenta miembros por barrios, colonias, comunidades, pueblos o fuera del país. Éstos se integran con base en el lugar de residencia, centro de trabajo, escuela, ejido, o de acuerdo con las identidades de género, cultura, etnia o clase. Los comités conforman la asamblea municipal. El congreso municipal, máxima autoridad del partido dentro del ámbito territorial de su competencia, cuenta con un órgano ejecutivo que es el comité municipal. Esta misma división de competencias funciona a nivel ampliado con las instancias del Congreso Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, integrado por veintiún miembros. Dentro de la especialización de funciones, Morena cuenta con órganos constitutivos y de conducción, directivos

y de ejecución, electorales y jurisdiccionales, además de un padrón nacional de afiliados. Éstos tienen el compromiso de reclutar militantes y formar nuevos comités.

Morena creó un organismo autónomo para capacitar a sus militantes y eventuales candidatos a puestos de elección popular, el Instituto Nacional de Formación Política (INFP), a cargo de Rafael Barajas, el Fisgón. Aproximadamente la mitad del presupuesto de Morena se destina al INFP, dado que considera prioritario formar y reponer los cuadros partidarios que se incorporan a la administración pública o a los órganos de representación. Se instruye a éstos con cursos de historia, nociones básicas de economía, ética política, igualdad de género, diseño de agendas locales y técnicas para la resolución de conflictos, impartidos por los militantes morenistas con mayor formación académica. Especial atención tienen los llamados formadores, quienes se distribuirán en los municipios del país para capacitar a los militantes y cooptar a nuevos adeptos.

López Obrador arrasó en la elección constitucional de 2018 y proyectó con él a Morena y a sus aliados, dejó en rigor mortis al PRD y con una representación minúscula al PAN y al PRI. Tras la debacle del 2 de julio, el panista Ricardo Anaya descubrió que su verdadera vocación era la docencia universitaria y el priísta José Antonio Meade encontró acomodo en un banco global, mostrando que en la visión tecnocrática de la política es indistinto gobernar un país o gerenciar una empresa privada. Con el 37.51% de los sufragios para el Senado, Morena obtuvo 55 curules, y el PT y el PES 6 cada uno. La votación para diputados tuvo un comportamiento semejante, otorgándoles 191, 61 y 56 escaños, respectivamente. En la bancarrota política que representó para el PRD la coalición entre la “izquierda moderna” y la “derecha democrática” —fantasía de algunos intelectuales y de las cúpulas partidarias—, el Sol Azteca obtuvo menos curules que los insignificantes compañeros de viaje de Morena. A la semana de abierta la LXIV Legislatura, Morena alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al integrarse a su bancada cinco diputados del Partido Verde Ecologista (PVM), presumiblemente a cambio de la autorización de licencia a Manuel Velasco Coello por parte del Senado para reintegrarse al cargo de gobernador de Chiapas. Esto permitió a López Obrador pasar las primeras leyes sin dificultad antes de asumir la presidencia. Gobernaba sin haber sido todavía ungido. En la Cámara Alta la negociación política sería más ardua porque, aparte del sufragio de sus aliados, Morena requería nueve votos adicionales para obtener mayoría calificada, indispensable para realizar cambios constitucionales.

Aunque el discurso del presidente tabasqueño eligió por blanco las élites que cedieron a la tentación de fundir la política con los negocios —sentido primordial de su concepto de corrupción—, el programa de Morena enlista entre sus demandas la libertad gremial que precisa la descorporativización de los sindicatos. Si López Obrador tomara esto en serio, y no recicla el corporativismo como hicieron los gobiernos de la alternancia precedentes, la medida incluiría a una porción de los sectores organizados que lo respaldan —la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), comandadas respectivamente por Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces Barba— y también a segmentos de los movimientos sociales que marchan por cuenta propia —la CNTE—, independientemente que estén en desacuerdo con las reformas estructurales o que el presidente tabasqueño obsequiara su demanda de revertirlas. Desafortunadamente, todo apunta a que no lo hará, a juzgar por los términos en que se aprobó la Ley General de Educación, la cual virtualmente otorgó al gremio magisterial el control sobre las plazas en el sector.

Dijimos que el ascenso del político de Macuspana se benefició de los movimientos sociales del periodo de la alternancia, pero también señalamos que Morena no surgió de éstos, sino fue la conformación de un movimiento/partido bajo el influjo del líder. Ello le plantea cuando menos tres problemas como el partido en el gobierno: 1) determinar si Morena será la bisagra entre el régimen y los movimientos sociales de tal manera que exprese en la sociedad política las demandas de la sociedad civil; 2) cómo actuará frente a los demás partidos, en particular los aliados, por ejemplo en las cámaras; 3) qué actitud asumirá frente al presidente: cierta autonomía que permita que las demandas sociales fluyan de abajo hacia arriba o la obsecuencia de la tradición priísta. Hasta ahora, Morena se ha sometido obedientemente a las decisiones estratégicas de López Obrador. No obstante que el presidente tabasqueño tiene una legitimidad incuestionada, la interacción de Morena con los movimientos sociales y la operación política en las cámaras abre un espacio que hasta entonces no tenía el movimiento/partido. En consecuencia, la capacidad de maniobra de sus representantes será potencialmente mayor, además de crucial para la realización del proyecto obradorista. Esto, aunado a los candidatos procedentes de sus filas y electos en los distintos niveles de gobierno, compondrá la masa crítica de donde saldrán los liderazgos, hasta ahora ausentes o poco visibles, pero indispensables para la continuidad del régimen.

Las experiencias de la izquierda internacional documentan las posibles rutas.

Lula se alejó de los movimientos sociales que lo respaldaron y acabó doblegado por los poderes fácticos. Syriza (Grecia) sacrificó la voluntad popular expresada en un referéndum sometiéndose a Bruselas y, en realidad, a Berlín. Los aliados conspiraron contra el gobierno de Dilma Rousseff hasta destituirla. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) funciona como un apéndice político del régimen bolivariano. Y se podrían multiplicar los ejemplos. Lo cierto es que la manera como Morena se perfile en el nuevo escenario político dependerá en mucho del curso de la transformación que López Obrador convoca a emprender y, más aún, la que espera el segmento de electores colocados en la izquierda del espectro político que votaron por él. También está por verse si el presidente tabasqueño apelará a la movilización permanente de los grupos organizados que lo apoyaron o a un consenso pasivo a fin de sacar adelante la agenda reformista, tal como se ha visto hasta este momento. En uno y otro caso Morena constituirá un instrumento fundamental, sea para pactar y evitar la confrontación con el régimen o para activar los movimientos sociales de forma acotada para evitar que lo desborden. Morena se ha probado en la movilización política pero escasamente en la movilización social, que obedece a otros ritmos, instrumentos y reivindicaciones; por tanto, su eficacia está por verse. En la negociación el partido posee mayor experiencia, lo que le puede augurar resultados positivos si opta por el consenso pasivo de sus bases. Desafortunadamente, las disputas internas por la renovación de la dirigencia ponen en entredicho la capacidad del partido para conducir este proceso y posibilitar la consolidación de la Cuarta Transformación.

El Gran Legislador

Rousseau atribuía al Gran Legislador la función de interpretar la voluntad general y traducirla en leyes benéficas para el común. "En democracia, el pueblo manda", le gusta repetir a López Obrador, por lo que él se asume su delegado, quien gobierna en nombre suyo; por tanto, hay identidad entre la voluntad popular y las acciones del titular del Ejecutivo o mandatario. De allí las consultas, las preguntas lanzadas al público en los mítines, el contacto permanente con la gente, la tolerancia a la protesta popular, incluso cuando afecta a terceros o la exhibición pública de quienes presume el presidente tabasqueño atentan contra el interés nacional, es decir, contra el pueblo. López Obrador no lo moviliza, simplemente lo escucha comunicándole lo que hará en favor de él y ejerce un paternalismo bueno en una sociedad castigada por la violencia, la inequidad, la corrupción y la injusticia.

Con la votación más alta en la historia del país, el presidente tabasqueño alteró la gobernanza neoliberal, rompió el esquema tripartito de la transición mexicana (PRI, PAN, PRD) e inyectó confianza a una democracia liberal alicaída. Para sus críticos neoconservadores, sin embargo, el político de Macuspana no es la primera alma populista que llega al Ejecutivo federal, pero será quien consume la involución autoritaria al perpetuarse en el cargo para "salvar" a la patria. No considero que López Obrador tenga la intención de reelegirse —de hecho, suscribió una carta en ese sentido cuando la Cámara de Diputados aprobó la revocación de mandato. De lo que no tengo duda es de que su proyecto es transexenal, como lo es el de cualquiera que aspire a dar un viraje en la conducción del país. El asunto es si lo hace de manera lícita y no da la espalda a la opinión pública. Ambas respuestas son afirmativas por lo pronto, pero no desmienten el trasfondo centralizador del diseño institucional obradorista, y cierta desavenencia con los principios liberales en cuanto a la división de poderes, el federalismo y la distribución de competencias en las instancias gubernamentales.

La división de poderes ha sido una ilusión más que una realidad en el sistema mexicano desde que los estadistas del siglo XIX descubrieron que sin un Ejecutivo fuerte no se podía gobernar un país complejo, extenso, diverso y desigual, más con la experiencia de las pérdidas territoriales o la parálisis de la

administración pública por las disputas de las fracciones políticas en el Congreso. Benito Juárez y Porfirio Díaz lo tuvieron muy claro. Durante prácticamente todo el siglo XX funcionó esa directriz, con el añadido que los gobiernos emanados del PRI gobernaron con mayoría en las cámaras (una excepción fue la administración de Ernesto Zedillo) y la disciplina de sus huestes impedía contravenir la voluntad presidencial. Otro tanto ocurrió con el Poder Judicial, del cual no se recuerdan atisbos de independencia durante el priato, aunque sí leyes lesivas contra la ciudadanía que pasaron sin mayor trámite, como en 1998, cuando se aprobó el cobro de intereses sobre los intereses (anatocismo) para enfrentar el problema de la cartera vencida disparado por la crisis financiera de 1994; el "error de diciembre", como la denominó Salinas de Gortari para minimizar su responsabilidad en el desastre que aún sigue pagando el país sin que se le vea fin a mediano plazo.

Durante el régimen priísta el presidente podía deshacerse de los gobernadores incómodos o solucionar las crisis políticas locales instruyendo al Senado para desaparecer los poderes en las entidades federativas, o a la Cámara de Diputados, para fincar juicios de residencia; es decir, las decisiones se tomaban en la Ciudad de México y la operación la realizaba el Legislativo. Con la alternancia cambió la situación, no por las inclinaciones liberales de las administraciones panistas, sino porque se debilitó la centralización priísta relajándose los amarres con los poderes fácticos y el submundo criminal. Si bien los panistas ganaron la presidencia, la mayoría de las gubernaturas quedaron en manos de su adversario/socio, razón por la cual Fox optó por repartir más recursos entre los estados con el objeto de garantizar la gobernabilidad. Este flujo de dinero no lo fiscalizó adecuadamente la administración federal, permitiendo a los gobernadores amasar fortunas inmensas a costa del erario, negocios ilícitos o pactos criminales. Más que federalizarse, el país se feudalizó, tendencia agudizada con la expansión de la economía criminal y la guerra de Calderón que no hizo más que esparcir las células criminales en el cuerpo social.

López Obrador rehízo los nudos de la gobernabilidad. Merced del abultado volumen de su coalición en ambas cámaras, el presidente tabasqueño ha sacado adelante las reformas propuestas en su campaña, haciendo, cuando mucho, concesiones menores a la oposición. Morena se ha sometido a los designios presidenciales de manera tan disciplinada como hacía el PRI. Con el poder Judicial López Obrador tuvo un conflicto a propósito de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dado que los emolumentos de los ministros y sus equipos rebasaban desmesuradamente lo

estipulado en la norma. Asimismo, causó malestar el bajo perfil y los vínculos personales de los integrantes de las ternas enviadas a la Corte para cubrir las dos primeras vacantes del sexenio, además de que el presidente tabasqueño hizo caso omiso de los cuestionamientos del Legislativo y la opinión pública al respecto.

En otras ocasiones ocurrió que el político de Macuspana jalara las orejas a los legisladores de su partido por no tomar al pie de la letra sus instrucciones, dilatara la aprobación de una norma por la negociación directa del Ejecutivo con la parte involucrada —acotando la capacidad deliberativa del Legislativo— o usando su capacidad legal de proponer ternas para el nombramiento de comisionados en los organismos reguladores sin sopesar las objeciones de la oposición, los expertos y la opinión pública. Arrogándose facultades metaconstitucionales, en la negociación de la reforma educativa alternativa a la expedida por Peña Nieto en 2013, López Obrador emitió un memorando en abril de 2019 en la que la declaraba “suspendida” y, en consecuencia, sin efectos legales. La medida, recurso de negociación frente a la CNTE, adjudicaba al presidente en los hechos la potestad de decir sobre la aplicación de las normas constitucionales, en otras palabras, se situaba por encima de éstas. “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, solía repetir en campaña el político tabasqueño quien, en el gobierno, no tuvo inconveniente en subordinar la ley a la política, como ya antes lo había hecho con la economía.

López Obrador creó una figura polémica no considerada en la administración central: los delegados federales. Si bien existían de antiguo los representantes de las secretarías en las entidades federativas, con el argumento de la austeridad el presidente tabasqueño concentró en uno solo los múltiples enviados del centro. Éstos, fueran candidatos perdedores de Morena en las contiendas electorales pasadas o aspirantes a competir en las futuras, constituyen un poder paralelo al de los gobernadores, más si consideramos que manejan recursos de los programas federales. De hecho, hubo una insurrección fallida de los Ejecutivos estatales renuentes a consentir la férula presidencial. Coordinados desde Palacio Nacional por Gabriel García Hernández, los llamados superdelgados desempeñan un papel muy activo en afincar el poder territorial de Morena, dirigiendo el ejército de los Salvadores de la Nación, quienes llevan el padrón de beneficiarios de los programas sociales y los visitan en sus hogares.

Tal como anunció en campaña, López Obrador promovió en el Congreso la reforma constitucional que permitiría la revocación de mandato. En el tercer año de su administración, el presidente en turno se sometería a un referendo en el

que la ciudadanía decidiría por mayoría si continúa o no en el cargo. La apuesta es arriesgada porque es virtualmente imposible que el Ejecutivo no presente un desgaste considerable a medio tramo de su gestión, además de que, por la naturaleza de la consulta, la oposición se presentaría unida. En contrario podría argumentarse que el presidente arrancaría una campaña adelantada para la elección constitucional de 2024, apuntalando con su carisma a los candidatos de Morena en los tres niveles de gobierno, los congresos locales y el federal, y en el tercio de las gubernaturas que estarán en disputa. Siendo ley, correspondería al Instituto Nacional de Elecciones (INE) la organización de la consulta y el recuento de los votos, con lo que se evitarían las suspicacias acerca de su fiabilidad como aconteció con las consultas organizadas por el propio presidente tabasqueño.

El equivalente light de los juicios revolucionarios en la Cuarta Transformación son las exhibiciones públicas de los adversarios políticos en las conferencias matutinas de López Obrador. El método es simple: los lunes el presidente tabasqueño introduce un tema, a veces con un anuncio, en ocasiones con una denuncia, el cual irá desgajando el resto de la semana con las respectivas contrarréplicas, matices y justificaciones de López Obrador a las objeciones realizadas por los medios. Salvo en contadas ocasiones, el presidente tabasqueño no ha estado en problemas en las conferencias por la baja calidad de las intervenciones de los periodistas presentes. El debate, por lo general, ocurre cuando los medios o los políticos de partidos distintos del suyo contrastan los datos de López Obrador con las fuentes que consideran confiables. De todos modos, el impacto de esta revisión está muy por debajo de la estridencia de los anuncios obradoristas. Cada denuncia, que no parece acompañarse del proceso legal respectivo, es al mismo tiempo una sentencia, el juicio sumario en cadena nacional. Los viernes el presidente se va de gira a las entidades federativas en las cuales hace nuevos anuncios, adquiere más compromisos y entra en ese contacto mano a mano con la gente que tanto le recompensa. Su noción de democracia consiste en ese escuchar y traducir a políticas habitualmente poco estructuradas las demandas de la plaza pública. Ya verá Hacienda cómo le hace.

Al diablo con sus instituciones (liberales)

Los organismos autónomos dedicados a la regulación, monitoreo y supervisión de las políticas públicas están en la mira de la centralización obradorista, empeñada en restringir sus funciones, restarles autonomía o degradarlas. Particularmente esto ha ocurrido en el sector energético, núcleo del programa económico del presidente tabasqueño. La Comisión Reguladora de Energía, creada en 1995 por Ernesto Zedillo como organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía, posee por mandato de ley la facultad de contribuir “a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios”. Entre otros requisitos, los comisionados deberían conocer a fondo y tener experiencia en el sector. Por concluir su responsabilidad, o por otros motivos, los cinco comisionados dejaron sus cargos en los primeros siete meses de la nueva administración. Las ternas enviadas por López Obrador al Senado para reemplazarlos carecieron del perfil adecuado, por decir lo menos. Al frente de Pemex el presidente tabasqueño colocó a un ingeniero agrónomo, sin más credenciales que la lealtad al jefe. Quien podría haber compensado esta mala decisión era la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con siete miembros especializados en el ramo petrolero. Si bien depende del Ejecutivo, el organismo creado en 2008 cuenta con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos. La Comisión también fue víctima del afán obradorista de quitar los contrapesos de los entes reguladores y, uno a uno, sus miembros renunciaron en los albores del sexenio.

López Obrador tendió una línea directa entre la presidencia y la población, haciendo a un lado o minimizando las facultades de los intermediarios con el argumento de que son fuente de corrupción. Hay ejemplos que avalan esta presunción. Es de todos conocido el caso de la Guardería ABC, en Hermosillo, que operaba sin cumplir normas mínimas de seguridad. En este centro subrogado a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social, recordemos, murieron 49 niños y 106 resultaron heridos en junio de 2009. La guardería carecía de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia pertinentes, por lo que el personal a cargo no pudo contender con el incendio de una bodega adjunta.

Puede ofrecerse un abultado racimo de omisiones y desvíos, pero no debemos negar que las estancias infantiles —cerca de 10,000 en todo el país— ofrecen un servicio esencial para las mujeres trabajadoras. Si el objetivo es acabar con la corrupción, el mecanismo idóneo consiste en supervisarlas de manera rigurosa. Si lo que se busca es recuperar para el Estado el servicio, lo conducente sería crear guarderías nuevas por parte de la institución pública respectiva. López Obrador no hizo ni una ni otra cosa, decidió retirarles los recursos a las estancias infantiles entregándolos directamente a los usuarios (madre, padre o tutor) mediante tarjetas de débito bancarias; 1,600 pesos bimestrales por cada niño (tres como máximo durante el mismo periodo), para ser exactos, insuficientes por demás en muchas partes del país. Tratándose de infantes discapacitados, el subsidio estatal será de 3,600 pesos bimestrales. El padrón de beneficiarios del programa es del orden de 330,000 mil niños.

En lo que se interpretó como un amago, “error mecanográfico” lo nombró la Secretaría de Educación Pública, en la iniciativa de reforma al artículo 3° constitucional se omitió la autonomía universitaria. El Ejecutivo propuso la modificación a la norma en diciembre de 2018 con el propósito de cancelar la reforma educativa de 2013, promesa de campaña de López Obrador a los maestros de la CNTE. Aquella “lamentable omisión” se atribuyó a la premura presidencial y a la novatez de los legisladores, pero provocó zozobra en las universidades. La UNAM emitió un comunicado mostrando “preocupación”. En respuesta, el gobierno federal ofreció enviar un alcance para remediar el gazapo legislativo, alcance que nunca se conoció, aunque en la redacción final de la reforma se reincorporó el concepto de autonomía universitaria, añadiendo el de universalidad de la educación superior. Con esto, la presión hacia las universidades vendría por el lado de incrementar la matrícula, la merma presupuestal y la supresión del examen de ingreso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el CONEVAL, o los funcionarios a cargo, han sido desautorizados por la Presidencia o de plano removidos. La CNDH por consignar las violaciones a los derechos humanos efectuadas por los militares, y el secretario ejecutivo del CONEVAL despedido en julio de 2019 por señalar las consecuencias que para el organismo evaluador de la política social tendrían las medidas de austeridad gubernamentales. No está de más destacar el papel que estas instituciones tuvieron en la investigación de casos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya (CNDH), así como el CONEVAL en ofrecer resultados confiables sobre la pobreza y fijar criterios para su evaluación integral. Ambos organismos se basan en un criterio de imparcialidad e

independencia, y sus recomendaciones (CNDH) y mediciones (CONEVAL) sirven para proteger a la sociedad de los excesos del poder y reparar daños, o para elaborar políticas sociales correctamente focalizadas, desvinculándolas de un eventual uso electoral. En una elección irregular, el Senado designó a Rosario Piedra Ibarra responsable de la CNDH. Ello, aunado a su militancia en Morena, puso de origen en entredicho su gestión.

La prensa es un tópico de las conferencias mañaneras. Acostumbrado a callar más que a informar, dependiente del Estado y no de los lectores, el Cuarto Poder no ha sido contrapeso de los otros tres salvo unas cuantas excepciones en la historia nacional. López Obrador debilitó considerablemente las frágiles finanzas de la prensa escrita, y en menor medida las de los medios electrónicos, al reducir más de la mitad de la publicidad oficial y redistribuir el gasto en ésta entre un número mayor de medios al incorporar a empresas informativas medianas y pequeñas que no forman parte de las grandes cadenas noticiosas o de entretenimiento. La medida forzó a los periódicos a bajar sus tirajes de por sí exiguos, reducir planas, liquidar a periodistas y cerrar columnas. Varios medios optaron por fustigar al gobierno notoriamente más que a las administraciones precedentes. Otros prefirieron inventar a toda prisa un flanco de izquierda en sus páginas y frecuencias, incorporando a dos o tres de los comentaristas oficiosos de la Cuarta Transformación, o removiendo a uno que otro editor o columnista de la vieja guardia. Después salieron a la luz los elevados montos gastados por el gobierno de Peña Nieto en pagar productos y servicios de periodistas e intelectuales públicos que los vendían a través de empresas muchas veces creadas ex profeso. Al mismo tiempo, López Obrador nombró a periodistas afines a su proyecto en los órganos informativos oficiales.

Es positivo transparentar los gastos en publicidad oficial y que la prensa y los medios de comunicación cumplan con la función de informar fidedignamente a la población de los asuntos relevantes para la sociedad sin ningún tipo de cortapisas, sean éstas por la presión del poder (estatal o económico) o por la dependencia de los recursos públicos, pero también que lo hagan con los estándares profesionales requeridos. También es deseable que el Estado garantice la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica en los medios de comunicación. En lugar de hacer virtud de la libertad de expresión en una democracia, y marcar así la distancia con sus antecesores, López Obrador recurrentemente ha confrontado verbalmente a la prensa que le es adversa, sin tomar en cuenta que el escrutinio de ésta puede contribuir a la realización de su proyecto político al llamar la atención sobre lo que es importante atender o

enmendar.

¿El fin de la guerra o la guerra sin fin?

La guerra al narcotráfico fue la respuesta de Felipe Calderón al déficit de legitimidad con que inició su mandato y también a la protesta pública —leída como desorden por una mentalidad retardataria— con que cerró la administración foxista. Temeroso de la posible confluencia del movimiento de López Obrador con el descontento social expresado en 2006 (la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, los mineros de Pasta de Conchos, los pobladores de Atenco y la insurrección urbana de Oaxaca), un católico obcecado como Calderón inició su guerra santa contra lo que llamó "el México del caos". El presidente michoacano identificó al crimen organizado como el principal enemigo público, pero también deseaba poner orden a las clases subalternas, desmontar la resistencia a la modernización neoliberal concebida simplemente como la promoción del interés privado. El segundo gobierno panista de la alternancia intentaría acabar con cualquier agregado colectivo opuesto a este proyecto y, cuando lo consideró necesario, recurrió a la fuerza (no siempre legítima) del Estado.

El combate frontal contra el crimen organizado se vincula con la onerosa experiencia de la "guerra sucia" —para liquidar las guerrillas— y la "guerra contra las drogas", de Richard Nixon, emprendida para resguardar a los estadunidenses del consumo de enervantes. Trazadas en el marco de la Guerra Fría, ambas situaban al enemigo en el Tercer Mundo y buscaban reforzar militarmente a los Estados para impedir, como fuera, los brotes de insurrección popular abundantes en los setenta en América Latina. No había siquiera pagado México los costos de la guerra sucia, cuando comenzó a padecer las consecuencias de la guerra contra las drogas. La guerra interna e irregular puesta en marcha por la administración calderonista erró el diagnóstico y la estrategia, y minimizó los eventuales daños a la población; fue incapaz de identificar a un enemigo difuso —emplazado en las instituciones públicas, la sociedad, la economía y los aparatos de seguridad— y menos todavía de mensurar los daños a la población (masacres, desplazamientos, desapariciones forzadas, violación de los derechos humanos).

El 11 de diciembre de 2006 Calderón declaró la guerra al crimen organizado. Movilizó en Michoacán a 6,500 soldados de infantería, apoyados por

helicópteros y lanchas, además de difundir la desafortunada imagen de un presidente civil uniformado con el kepí y la casaca militares (entrado el sexenio, el presidente michoacano ofreció que al finalizar su administración habría finiquitado el narcotráfico). Más adelante, los operativos militares se extendieron a ciudades y regiones consideradas focos rojos (Acapulco, Tijuana y la Sierra Madre), de manera tal que en escasos meses el despliegue de alrededor de 50 mil elementos federales cubrió una docena de entidades. En un año, el gobierno calderonista había extraditado a varios capos importantes a los Estados Unidos, además de realizar el más significativo decomiso de cocaína en la historia, lo cual desbordó el optimismo de su administración y en el país del norte. En ese ambiente de cooperación, Calderón y George W. Bush signaron la Iniciativa Mérida en 2008, la cual presentaron como un nuevo paradigma en el combate binacional al narcotráfico, aunque no fue más que una versión adaptada del Plan Colombia, sin las llamadas "operaciones conjuntas" y dentro de la estrategia estadunidense más amplia que incluyó el Caribe y Centroamérica (National Southwest Border Counternarcotics Strategy).

A despecho de los primeros éxitos, la presión militar sobre las organizaciones criminales, el conflicto armado entre los cárteles y la extorsión a la población civil al alza hicieron crecer la violencia sostenidamente durante el periodo 2008-2011. El objetivo prioritario de descabezar los cárteles provocó el efecto colateral de su fragmentación, lo que complicó combatirlos, y potenció tanto el conflicto de los grupos entre sí como la extorsión de la población civil, con el consecuente crecimiento de los índices delictivos. La guerra calderonista no vino acompañada de una estrategia para cortar los circuitos financieros del crimen organizado, ni tampoco de consignaciones penales importantes en el mundo de las finanzas o de la política, como si la política de seguridad fuera únicamente de índole militar. La guerra no sólo amplió la violencia, antes bien hizo que llegara a lo más hondo de la sociedad sin alcanzar los objetivos estatales de derrotar a los cárteles y menguar el volumen del trasiego de drogas. La guerra contra el crimen organizado también potenció la violencia estatal contra movimientos populares, comunidades, periodistas y defensores de los derechos humanos. La curva a la baja en la tasa de homicidios dolosos inició en 2011, por lo que la administración de Peña Nieto realizó cuentas alegres durante medio sexenio, antes de que la tendencia volviera a invertirse. El presidente mexiquense cerró su mandato superando las escalofriantes cifras de su predecesor. Y el primer trimestre de López Obrador, previo a la integración de la guardia nacional, continuó la curva ascendente presentando un incremento cercano al 9% de los homicidios dolosos con respecto del primer trimestre de 2019, esto es, los peores

datos en la historia contemporánea del país.

En su libro para la campaña electoral, López Obrador apuntó que se analizaría "colegiadamente la pertinencia de crear una guardia nacional con el apoyo de los 220,000 soldados y 30,000 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del ejército y de la marina, en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores". El argumento consistía en que la institución castrense posee el conocimiento, la disciplina, la infraestructura y los recursos indispensables para "garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país". Esto, sin embargo, no lo veía el entonces candidato como el único instrumento para revertir la violencia, pues no sería "exclusivamente con medidas coercitivas como enfrentaremos el problema de la inseguridad y la violencia". El programa social y la recuperación de los valores básicos de la convivencia humana complementarían la presencia de la guardia nacional en todo el territorio nacional.

Con dos meses en el poder, el presidente tabasqueño declaró el fin de la guerra contra el crimen organizado. Para él esto era así porque el cambio de estrategia lo acreditaba: no sería ya la captura de los capos el objetivo de las políticas de seguridad, dado que éstas se enfocarían en proteger a la población. A primera vista la decisión no sonaba mal porque enmendaba el error de Calderón de ir por los jefes de los cárteles provocando el efecto indeseado de la fragmentación de éstos. El asunto es que la situación se modificó drásticamente con la decisión calderonista y, si bien quedaban todavía grandes capos por capturar, había también una cantidad inmensa de células criminales dispersas en el territorio nacional e incrustadas en la sociedad, junto con bandas de mayor tamaño contratadas por los cárteles para tareas específicas. A esto habría que agregarse la expansión del narcomenudeo, la extorsión y delitos concomitantes. En consecuencia, dejar de ir por los capos no solucionaba el problema del crecimiento de la violencia como evidenciaron los primeros datos de la administración obradorista.

A pesar del cambio de enfoque, la guardia nacional, propuesta por López Obrador y aprobada por las cámaras y los congresos locales, continuaba, es más, profundizaba la línea militarista de Calderón, la cual el político de Macuspana había criticado en la campaña electoral. En diagnóstico apresurado, el gobierno entrante concluyó que las policías de los tres órdenes de gobierno no tenían remedio y, por tanto, habían de canalizarse los recursos a organismos más confiables técnica y éticamente, es decir, el ejército y la marina. Después de la

cancelación del NAIM y del paquete de programas sociales, el debate acerca de la guardia nacional dominó la discusión pública. El nuevo organismo de seguridad inicialmente contará con 61,000 elementos (35,000 de la policía militar, 8,000 de la policía naval y 18,000 de la policía federal). En paralelo, iniciará el reclutamiento de civiles que recibirán un adiestramiento militar. Quedó el mando operativo en manos de un militar y de una coordinación interinstitucional, una especie de estado mayor integrado por un elemento militar, otro de la marina y uno más de la policía federal. Y la parte administrativa estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. La guardia nacional tendrá una escala jerárquica con catorce grados y cuatro categorías (comisarios, inspectores, oficiales y guardias). No obstante que los miembros militares mantendrán sus rangos, los perpetradores de abusos serán enjuiciados en tribunales civiles.

La decisión de López Obrador fue un revés para quienes esperaban del nuevo gobierno el regreso gradual del ejército a los cuarteles motivados tanto por el arribo al poder de la izquierda, antimilitarista por tradición, como por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018, muy a tono con las exigencias de las organizaciones civiles que realizaron una intensa campaña contra la citada ley. Desconcertadas por la política del presidente tabasqueño en materia de seguridad, estas mismas organizaciones lucharon para que aquélla diera un giro, meta que no lograron alcanzar. No cabe duda de que López Obrador encontró en la seguridad un desastre mucho mayor del previsto; “nos dejaron un cochinero”, ha dicho en varias ocasiones, pero también queda claro que el gobierno del presidente tabasqueño tampoco extirpará la semilla autoritaria del régimen, sembrada hace un siglo o más. El priato la cultivó con maestría, la segunda administración panista la refuncionalizó con la guerra, y ahora López Obrador la recicla con su política de seguridad. Cierto, no fue él quien inoculó el gen autoritario en el Estado mexicano, ni tampoco el iniciador de esta guerra insensata, pero acaso al presidente tabasqueño correspondía ultimarlos. Por lo demás, la estrategia de seguridad pronto mostró sus falencias y contradicciones, como evidenciaron el frustado operativo en Culiacán (para extraditar a los Estados Unidos a dos de los hijos del Chapo Guzmán) o la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón en Bavispe.

En materia política, indicamos, López Obrador está fortaleciendo la presidencia a expensas de los otros poderes de la Unión y también del federalismo. Con respecto de la política social, el presidente tabasqueño retiró a los intermediarios

entre el Estado y el ciudadano. A los organismos reguladores los debilitó minando su autonomía. Fustigó a la prensa que lo incomodaba. Y refrendó al estamento militar en cuanto garante de la seguridad interior. En ninguno de estos ámbitos López Obrador ha violentado el orden legal ni lo ha modificado en su beneficio. Sin salirse de la norma, pero dándole la vuelta hasta donde es posible, el Ejecutivo está centralizando el poder de decisión en la presidencia, negociando con la oposición únicamente cuando le es indispensable, pero con escasa sensibilidad para hacerse cargo de sus objeciones y dar mayor legitimidad a sus políticas al incorporar las propuestas de aquélla cuando estén fundamentadas en las mejores razones. No es un paso de la democracia a la dictadura como sugieren algunos comentaristas, antes bien es el autoritarismo mexicano —suave, si se quiere— desplegado bajo nuevas formas. López Obrador no es más ni menos demócrata que sus predecesores de la alternancia, pero, en contrario a su convicción personal, es quizá menos liberal.

5

PRIMERO LOS POBRES

No puede negarse que la justicia social y la redistribución del ingreso son parte sustantiva del ideario obradorista. Ello lo singulariza respecto de los demás gobiernos de la alternancia y de las administraciones neoliberales antecedentes. Sin embargo, tampoco puede asumirse el grandilocuente "declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal", pronunciado por el presidente tabasqueño el pasado marzo, dado que tanto la economía internacional como muchas de las políticas obradoristas, ni qué decir del T-MEC, son de aquel signo, mientras otras más son desarrollistas. Ningún gobierno contemporáneo ha logrado sustraerse al entorno neoliberal por voluntad propia; cuanto más han podido paliar los daños, como hicieron las izquierdas emergentes latinoamericanas o la izquierda portuguesa actualmente en el poder.

El supuesto neoliberal según el cual el Estado está para ofrecer las condiciones idóneas al funcionamiento del mercado es equivocado —dice López Obrador—, porque olvida "que el Estado tiene como función principal conseguir la felicidad del pueblo, las condiciones de vida y trabajo de todos los mexicanos". Procurar la felicidad colectiva con la redistribución del ingreso mediante la intervención estatal es la meta del presidente tabasqueño, el fin superior de la política. Empero, esta redistribución del ingreso, indispensable para reducir una desigualdad social profunda, López Obrador la instrumenta por medio de la relación directa del Estado con los beneficiarios, de manera tal que los recursos lleguen a las familias, acaso la institución más antigua que se ha perpetuado en la historia. No podemos negar que esto modifica el código neoliberal. Para éste, los ciudadanos son clientes. De acuerdo con el obradorismo, éstos son derechohabientes, receptores pasivos de las políticas sociales gubernamentales. Nada consiguen por sí mismos ni nada, por tanto, los empodera o les da autonomía para autogobernarse. No será la mano invisible del mercado quien los provea de lo indispensable, ésa será la función del hombre justo, del Gran Legislador en vigilia permanente para obtener su bienestar. Si éste es bueno,

como se considera el presidente tabasqueño, sus decisiones son indefectiblemente correctas.

Trabajo, Familia, Patria

López Obrador es también conservador. Trabajo, Familia, Patria, la “trilogía reaccionaria” —según la denomina Alain Badiou— es enteramente suya. Obreros y campesinos trabajan. Las mujeres procrean a la familia. Los soldados defienden a la patria. Cada cual hace lo que le corresponde estableciéndose un orden duradero, armónico y justo. Cuando fue candidato, el hoy presidente habló mucho del amor a la familia, al prójimo y a la patria, en una suma de valores cívicos y cristianos muy apreciados por la mayoría de la población. La familia es la institución en la que más confían los mexicanos, seguida a gran distancia por la Iglesia católica y el ejército, quienes ocupan los escalones segundo y tercero, respectivamente. Los partidos políticos y el poder Judicial se disputan los últimos lugares.

El proyecto obradorista se sirve de instituciones antiguas para anclarlo. Una involución por donde quiera vérsele del horizonte progresista que orientó a la izquierda socialista, horizonte en el que no cabían ni la familia, ni las iglesias, ni tampoco el ejército. En su momento cada una habría de desaparecer. Pareciera que el presidente tabasqueño gobierna con las encuestas, pero no es así; comparte más bien los valores de la inmensa mayoría de la población, se identifica con ellos. En esa medida, cualquier agenda progresista en materia de derechos le resulta extraña, si no es que la desaprueba, aunque no necesariamente la obstaculiza; simplemente no la promueve. Por esa razón, cuando se le cuestiona al respecto, López Obrador responde que será necesaria una consulta, a sabiendas de que la opinión mayoritaria será negativa.

López Obrador asume que la familia es la tradicional, formada por el padre, la madre y los hijos, aunque contempla la posibilidad de que la mujer sea la cabeza de ésta, a juzgar por su programa de apoyos a las madres solteras. Pensar, sin embargo, que la familia es buena de por sí, o que existe un tipo único de ésta, no corresponde a la realidad. Sin embargo, la familia es el recipiente de los apoyos sociales del Estado y, al mismo tiempo, el núcleo al que llegará el discurso moralizador del presidente tabasqueño, la materia sobre la que se trabajará para el “fortalecimiento de los valores culturales, morales y espirituales”. López Obrador presupone que el neoliberalismo ha drenado estos valores porque promueve el individualismo en detrimento de los lazos gregarios. El

neoliberalismo constituye la antítesis de la comunidad, la debilita e incluso la disuelve. Sus antídotos son la educación, el desarrollo social, la moral y el amor al prójimo. Éstos son además los ingredientes de la armonía y, consecuentemente, de la felicidad colectiva.

Al más puro estilo del romanticismo social, el presidente tabasqueño considera que “la felicidad no se logra acumulando riqueza, títulos o fama, sino mediante la armonía con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo”. Ello obliga a ocuparse de los demás, a brindar un trato especial a “los débiles y los oprimidos”, lo cual implica la contención de aquellos apetitos posesivos en favor de un desprendimiento generoso hacia los que menos tienen. Esto lo concibe López Obrador más como justicia que como caridad. Prácticamente no aparece la solidaridad en su discurso, valor cardinal para el socialismo. El presidente tabasqueño prefiere hablar mejor de amor, en un ánimo cristiano.

La función que el presidente tabasqueño asigna a las Iglesias es ambigua. Tan es así que no dudó en aliarse con un partido confesional para las elecciones y formar un bloque parlamentario con éste en las cámaras. Por un lado, López Obrador admite la libertad de cultos y el agnosticismo, pero por otro asume que todos los individuos poseen cierta dosis de espiritualidad. Tampoco el presidente tabasqueño ve mal que las Iglesias dispongan de espacios en los medios de comunicación para difundir su credo. De hecho, ha deslizado en sus conferencias mañaneras que estaría dispuesto a concesionar frecuencias a los distintos ritos, demanda de las Iglesias evangélicas desde hace tiempo, dado que la Iglesia católica ya dispone de la suya. Suponemos que López Obrador considera que el mensaje moralizador, la fe y el sosiego que las Iglesias llevan a las almas de los feligreses es un potente correctivo de las conductas delictivas alimentadas por la corrupción y el crimen, entendiendo éste como consecuencia de la anterior. Cuando la directriz moral incuba en la familia —aquí tienen un papel fundamental las madres— la mitad del trabajo está hecho. La otra porción corresponde a la educación formal, el trabajo y la constitución moral.

“Nuestro ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo, no es un ejército golpista, es un ejército respetuoso de la autoridad civil, es un ejército leal al pueblo.” Con esta frase el presidente tabasqueño apremió la aprobación de la guardia nacional en las cámaras. De un plumazo López Obrador olvidó el 2 de octubre, la guerra sucia en Guerrero, Tlatlaya o, de manera más inmediata, la crítica a la institución castrense durante la campaña. Ni antes ni después de ésta el presidente tabasqueño se había metido con el ejército, por el cual siente gran

respeto. Exculpado el instituto armado después de la elección, ahora sería la versión mexicana de los Cascos Azules de Naciones Unidas, esto es, un ejército de paz por los cuatro costados. Este acercamiento, asociado con la creación de la guardia nacional, López Obrador lo redondeó al encargar a las fuerzas militares la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base de Santa Lucía, otorgándoles la concesión para operarlo una vez construido, en barroco estilo de fondear la política de seguridad, no muy distinta de la de sus antecesores que diseñaron los operativos conjuntos para "pacificar" las ciudades y regiones más álgidas de la violencia criminal. Una política más extrema en todo caso.

El ciudadano-derechohabiente

Una política económica errática, una política de seguridad regresiva y una política social generosa, aunadas a la conservación al mismo tiempo del equilibrio macroeconómico, sin endeudamiento adicional ni tampoco reforma fiscal, provocan una enorme presión sobre la hacienda pública que López Obrador trata de contrarrestar con disposiciones draconianas en materia de austeridad, recortes y astringencia en el gasto público, además de despidos de burócratas y empleados de las paraestatales. Medidas todas ellas que forman parte del manual de las administraciones neoliberales pero que en México aplica un gobierno de izquierda. Cierto, se reducen las bolsas en algunos rubros para financiar las políticas sociales y el rescate de Pemex, y no para rescatar a los bancos como hicieron priístas y panistas. Pero también haría falta una reforma fiscal, pospuesta por décadas, que grave los ingresos más altos para fondear el proyecto energético y los programas sociales del presidente tabasqueño. Estos últimos tienen características particulares que merecen detallarse para comprender mejor el entramado político que está construyendo el nuevo gobierno, la función que realizan dentro de éste las clases subalternas en su condición de ciudadanos-beneficiarios.

En el llamado populismo existe una interlocución entre los subalternos, que formulan demandas al Estado, y el líder que las hace suyas y las traduce en políticas públicas. Es un flujo de acción-reacción permanente, el cual provoca la activación del sistema y que el pueblo esté movilizado constantemente para concretar sus reivindicaciones o confrontar a sus adversarios. Si bien existen elementos parecidos con el populismo, sin duda hay diferencias considerables porque López Obrador no pone en acción a las masas, más bien les regresa como políticas las demandas recogidas en el día a día, o las que considera adecuadas de acuerdo con su diagnóstico. El único mecanismo de movilización empleado por el presidente tabasqueño son las consultas ciudadanas, es decir, un instrumento deliberativo en el cual las opciones están acotadas por el propio gobierno con base en sus prioridades.

Los tecnócratas despreciaron las ciencias y las artes en favor de la técnica, la razón instrumental. López Obrador también las colocó en segundo término otorgando primacía a la educación, con menos imaginación, pero similar

enjundia al proyecto educativo de la Revolución mexicana. Un dejo roussoniano más del presidente tabasqueño. Educación para todos en cualquiera de los niveles, derecho universal consagrado en la más reciente reforma al artículo 3°. La educación superior se regirá de acuerdo con los principios básicos de inclusión, gratuidad, obligatoriedad y universalidad. Por tanto, será asequible a quien lo demande, independientemente de que disponga o no de las aptitudes suficientes, pues de acuerdo con López Obrador el problema de las universidades se reduce al cupo, por lo cual aumentando la oferta educativa aquél se resuelve. La tesis fundamental del presidente tabasqueño es que los jóvenes deben estar ocupados, sea en el trabajo o en el estudio, para evitar que los coopten las organizaciones criminales. Por eso, no escatimará los recursos a su alcance para lograr este propósito, incluso a expensas de las propias instituciones educativas si su proyecto no considera el crecimiento de los presupuestos y la ampliación de la planta académica.

La educación es un derecho y no un servicio, plantea López Obrador. En consecuencia, corresponde al Estado ofrecer las condiciones para que esto se cumpla. La misma argumentación sustenta el programa de salud u otras políticas gubernamentales. Y, en un registro distinto, esto también vale para derechos sociales como la sindicalización y la huelga. No hay duda de que reconocer derechos elementales es positivo, y hacer por que se materialicen todavía mejor en un contexto de restricciones económicas y de inobservancia sistemática de la ley. El asunto es cómo, mediante cuáles mecanismos institucionales se harán efectivos. El presidente tabasqueño suele optar por el trato directo con los beneficiarios, por entregar apoyos en efectivo a los acreedores, actores pasivos que no desempeñan ninguna función en la gestión de los recursos, simples derechohabientes poseedores de una tarjeta para acceder a los fondos de un programa público.

La política social de López Obrador no conlleva la institucionalización ni tampoco —salvo en educación superior— el reconocimiento de derechos universales. Esto es, queda al arbitrio del gobierno en turno. El volumen de los recursos públicos destinados a ésta es abultado, se reunió a expensas de otros renglones del gasto gubernamental, y aquella política conforma uno de los puntales del proyecto obradorista; razones de sobra para cimentar con ellos, además de los derechos amparados constitucionalmente, un Estado social, constitutivo, ése sí, de la Cuarta Transformación o, en palabras del presidente tabasqueño, un “cambio verdadero”, permanente. Por otro lado, y dada la historia electoral mexicana, la institucionalización menguaría la tentación del

uso electoral de los apoyos gubernamentales, de la inducción del sufragio a consecuencia de los recursos monetarios que reciben, bajo distintas modalidades, los ciudadanos-derechohabientes.

El conflicto social

Dijimos que Morena no surgió más que indirectamente de los movimientos sociales, pero apuntamos también que se benefició de su crecimiento durante la alternancia democrática. Algunos jóvenes del #YoSoy132 recalaron en Morena y la política antisindical de Felipe Calderón provocó desgajamientos en el árbol corporativo. Peña Nieto enervó a los maestros, por no decir a la sociedad entera. Y la decisión estratégica de López Obrador de desdeñar el Pacto por México le permitió favorecerse de esos movimientos y fracturas. Maestros, mineros y electricistas se transformaron en sus aliados potenciales, mas no necesariamente en sus huestes incondicionales. Por el contrario, estos grupos organizados estatuyeron un intercambio bastante productivo con el nuevo gobierno sustentado en la reciprocidad.

La CNTE surgió en diciembre de 1979 con el propósito de democratizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido entonces por Carlos Jonguitud Barrios, líder vitalicio del gremio magisterial. La CNTE domina el sindicato en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, en este último con el nombre de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). El magisterio disidente montó una maquinaria de funcionamiento basada en los premios y castigos a las bases, incluidos los aspirantes a obtener plazas, así como su eventual mercadeo. La lógica de la CNTE no difiere de la del SNTE, aunque sí los métodos para alcanzar sus objetivos. El SNTE recurre a la negociación directa con la autoridad educativa y a pactos políticos con el presidente de la República, respaldado en su numerosa membresía —es el sindicato más grande de América Latina con aproximadamente 2.1 millones de agremiados— y una estructura nacional históricamente al servicio del PRI y, en la alternancia, a disposición del mejor postor. Por su parte, la CNTE actúa como grupo de presión a través de la continua movilización social, el paro, los plantones y la obturación de las vías federales de comunicación, con los que fuerza la negociación (o la represión) con los gobiernos estatales y, en 2013 y 2019, con la Federación.

La insurgencia sindical alcanzó en Oaxaca una victoria al constituirse en 1980 el Comité Ejecutivo Seccional (CES) y llevar a cabo un congreso sindical de la Sección 22 del SNTE, con independencia del congreso nacional dominado por la

Vanguardia Revolucionaria del Magisterio, de Jonguitud Barrios. Durante la década, más de cien maestros fueron apresados, desaparecidos o asesinados en Oaxaca. Elba Esther Gordillo, respaldada por Carlos Salinas de Gortari, aprovechó la rebelión en las filas sindicales para derrocar a Jonguitud y reconoció al CES independiente, el cual consiguió en los noventa un acuerdo con el Ejecutivo estatal que lo convirtió en un interlocutor fundamental, sumado en su haber el aguinaldo de 90 días, becas para los hijos de los trabajadores, bonos y gratificaciones para los mentores y un fidecomiso para préstamos, entre otras conquistas laborales. También se creó la Fiscalía de Atención de Delitos contra el Magisterio, en donde la Sección 22 designaba abogados coadyuvantes. Asimismo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), responsable de la educación en la entidad, quedó sometido a la férula magisterial. Además, las iniciativas legislativas del sector educativo se consensaban con la CNTE que contaba en aquel tiempo con alrededor de 70 mil agremiados en Oaxaca.

El paro de 2008 permitió a la disidencia magisterial edificar una fuerte resistencia hacia la Alianza por la Calidad Educativa, intento del gobierno panista por regular la carrera docente, para lo cual firmó un acuerdo con la maestra Gordillo, aliada estratégica del panismo desde la campaña presidencial de 2006. En Morelos fue donde ganó fuerza la movilización de los mentores, quienes realizaron una manifestación multitudinaria en Cuernavaca en agosto de 2008. La suspensión de labores se extendió por dos meses. En octubre de ese año, diversas secciones de la CNTE verificaron un plantón en la Ciudad de México para obtener la derogación de la Alianza por la Calidad Educativa. No lo consiguieron, pero lograron neutralizarla en sus respectivas entidades.

La reforma educativa de 2012-2013 midió fuerzas entre el gobierno de Peña Nieto y la CNTE. Del paquete de reformas estructurales llevadas a cabo por la administración priísta la que provocó mayor oposición fue ésta, pues el movimiento magisterial estaba curtido por décadas de lucha y poseía una poderosa cohesión gremial, combinación de prácticas autoritarias, prebendas y la auténtica adhesión de sus bases. Esta reforma, encaminada a restituir a la SEP la rectoría de la gestión educativa mediante la introducción de mecanismos de evaluación de los profesores, pudo imponerse gracias a la aquiescencia del SNTE, sometido por la aprehensión de Gordillo, y con una fuerte resistencia de la CNTE, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Las secciones magisteriales de estos estados tuvieron en vilo a la población capitalina durante cuatro meses e indefinidamente a las de sus

entidades de origen. En febrero de 2013 Peña Nieto promulgó la reforma al artículo 3° constitucional y, en septiembre, las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente. Recién arrancó el ciclo escolar 2013-2014, aproximadamente dos millones de alumnos de educación básica y media se quedaron sin clases por el paro magisterial en aquellos cuatro estados. Únicamente en Oaxaca la cifra fue de alrededor de 1.3 millones. Los mentores inconformes estrangularon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y amenazaron con permanecer en el Zócalo durante las fiestas patrias.

López Obrador prometió revertir las reformas estructurales. No obstante, a lo largo de la campaña presidencial la relación con el magisterio disidente fue ambivalente. Por un lado, miembros de la CNTE afirmaban que respaldarían al político de Macuspana en la liza electoral. Por el otro, también miembros de la organización gremial aseguraban que la Coordinadora no tenía un carácter político y, consecuentemente, se abstendría de apoyar a cualquier candidato. Sin embargo, la presencia en las cámaras de integrantes de la CNTE en la bancada de Morena hace pensar que la organización se movilizó en favor del candidato tabasqueño. Asimismo, el compromiso de López Obrador de abrogar la reforma, y la reiterada exigencia del magisterio disidente de que esto sucediera, trasluce la idea de un pacto o cuando menos de un sobreentendido entre las partes.

En ese mismo sentido podría interpretarse la consideración que las autoridades de la SEP y los congresistas de Morena tuvieron con la CNTE, la tolerancia hacia los ataques a las vías de comunicación por parte de la Coordinadora y la ausencia de la más mínima insinuación por parte del presidente tabasqueño que el asunto podría zanjarse con una consulta. Es más, López Obrador expidió un inusitado memorando en el que instruyó a sus subordinados suspender la aplicación del artículo 3° constitucional en lo concerniente a la reforma educativa a fin de destrabar la negociación con la CNTE, entrampada por el control de las plazas, las promociones y el reconocimiento de la carrera docente que el magisterio disidente pretende que se regulen por vía del escalafón, y no mediante un procedimiento abierto y riguroso en que contraten y promuevan de manera pública, transparente, imparcial y en igualdad de condiciones a los aspirantes más competentes.

El bloqueo de las vías férreas en Michoacán ha sido una práctica habitual de la CNTE en su lucha contra la reforma educativa. Lo hicieron los mentores en julio de 2016 para protestar por aquélla, así como por los descuentos salariales y los

despidos. Repitieron la táctica tres años más adelante, con reclamos parecidos, aunados al retraso del pago de sus salarios. Esta vez, sin embargo, en plena emergencia por el abasto de gasolina motivada por la guerra contra el huachicol de la administración obradorista, más de un mes ahorcaron los docentes purépechas las rutas ferroviarias del centro del estado, propiciando el desabasto de productos básicos en amplias zonas de la entidad. Finalmente, el gobierno michoacano accedió a agilizar el pago de la nómina. Y, una vez más, López Obrador reiteró que la fuerza del Estado no se emplearía contra los movimientos sociales, al tiempo que el Congreso endurecía las penas contra el robo de combustible y ampliaba el catálogo de delitos graves. De esta manera, el presidente tabasqueño establecía el nuevo parámetro de lo aceptable para el Estado al considerar la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden, de suyo espuria si de movimientos sociales se trataba, incluso cuando había daños a terceros. En otros ámbitos, sin ser inédita, la toma de casetas de peaje se multiplicó en los siguientes meses a propósito de cualquier reclamo del pueblo agraviado. Ya decía Condorcet que "es culpa de las leyes si el pueblo no tiene nada que ganar con ser honrado y si está demasiado frecuentemente expuesto a cometer crímenes para proveerse de lo necesario".

López Obrador abrió fuego contra la "mal llamada reforma educativa" poco después de normalizar el abasto de combustible en las regiones del país surcadas por los mayores ductos de Pemex y prácticamente al mismo tiempo de dar a conocer el plan para rescatar las paraestatales del sector energético. La CNTE venía por la revancha contra la reforma "punitiva" de Peña Nieto con una expectativa bastante elevada. Para el presidente tabasqueño bastaba con recortar las aristas más filosas a la reforma peñista, especialmente la vinculación entre el desempeño docente y la permanencia en el empleo, y reducir los requisitos para la promoción laboral de los docentes. Por el lado de la CNTE, el objetivo era sepultar la reforma entera y recuperar el control sobre las plazas magisteriales, los mecanismos de promoción y reconocimiento que habían perdido en sus zonas de influencia. Lo que estaba en juego era quién regía la política educativa, así como si lo académico y lo laboral eran indisociables o no.

La negociación de la reforma educativa planteó la armonización del conflicto de distintos derechos fundamentales, considerados a partir de la reforma constitucional de 2011 como derechos humanos (universales, inalienables e intransferibles): "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección"

(artículo 1). Ninguno de estos derechos tiene primacía sobre otro, motivo por el cual la autoridad debe buscar conciliarlos cuando enfrentan a las partes dentro del mismo ámbito (esto es, los derechos al trabajo y a la educación): "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley" (artículo 123); y "toda persona tiene derecho a recibir educación" (artículo 3). La fracción VII del 123 constitucional introduce un criterio de selección al estipular que la contratación se llevará a cabo "mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes".

Los derechos laborales de los maestros fueron salvaguardados por el apartado B del artículo 123, quedando pendiente la elaboración de la ley reglamentaria respectiva, la cual "fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional". En cuanto al derecho a la educación, la nueva redacción constitucional asienta que "el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, en condiciones de equidad, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la suficiencia presupuestaria y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos". De esto se desprende que el Estado tiene que proteger el derecho al trabajo digno de los maestros y, simultáneamente, el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. También el ente estatal deberá ofrecer igualdad de oportunidades a quien demande un empleo, en este caso de profesor, pero sin desatender la idoneidad y la calificación de los solicitantes.

La CNTE sostuvo que la reforma educativa peñista vulneraba la estabilidad en el empleo de los maestros, pues tras fracasar tres veces en el examen de aptitudes se les relegaría a un puesto administrativo de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, y objetó además que el examen fuera la forma de evaluación adecuada pugnando por considerar criterios como el escalafón, las particularidades regionales y la abismal asimetría en que se ejerce la práctica docente en las distintas regiones del país, consideración certera a todas luces. La reforma a la reforma educativa en el sexenio obradorista sustrajo el elemento "punitivo", que asociaba la evaluación con el empleo docente, reemplazando el examen de aptitudes por evaluaciones "diagnósticas, formativas e integrales", sin consecuencias laborales, creando para el efecto el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica. La nueva reforma desvinculó los

aspectos laboral y académico al cancelar las consecuencias en la estabilidad en el empleo de la evaluación de aptitudes de los docentes, y relajó los criterios y estándares para calificar el desempeño de los profesores. Si es correcta esta presunción, se ponderó el derecho al trabajo digno (de los mentores) por encima del derecho a la educación de calidad (de los estudiantes).

No obstante las evidentes concesiones al magisterio, la CNTE desaprobó los términos de la reforma educativa. Ante la sorpresa por el disenso, López Obrador fustigó a los "radicales de izquierda" por perder de vista el bosque concentrándose exclusivamente en las ramas. "Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación", espetó el presidente tabasqueño en una conferencia mañanera a finales de marzo de 2019, antes de hacer la distinción entre los dirigentes y las bases del profesorado: "quiero tener una comunicación más que con los dirigentes, con las bases, no quiero una relación corporativa, sino horizontal y ciudadana". Por su parte, la CNTE aducía que la adecuación obradorista conservaba la sustancia de la precedente.

La "sustancia" entonces no era la discutible amenaza a la estabilidad en el empleo, pues en todo caso los profesores serían reubicados en tareas administrativas, sino el control sobre el ingreso (plazas), la promoción y el reconocimiento de la carrera docente. Como está bien documentado para las entidades federativas en donde la CNTE tiene mayor influencia, básicamente en el sur del país, es decir, en los estados con mayores carencias e índices educativos más bajos, el dominio de la disidencia magisterial sobre los mecanismos de ingreso y promoción de los docentes —por medios legales o por la acción directa— garantiza la formación de clientelas, la lealtad de las bases y la incondicionalidad a la CNTE de los aspirantes a un empleo estable. Estos procesos no quedan sujetos a un escrutinio académico que recompense el mérito, antes bien están condicionados por la participación, constancia y combatividad de los mentores exhibida en las movilizaciones magisteriales.

Había duda si la redacción final de la reforma al artículo 3° se pactó con la CNTE a cambio de incorporar parte de sus demandas a la ley reglamentaria, o si la disidencia magisterial reiniciaría el combate frontal contra la norma constitucional. Finalmente, después de una decena de reuniones en Palacio Nacional entre López Obrador y los líderes de la CNTE, el gobierno federal cedió a la demanda de la CNTE sobre el control magisterial del ingreso a la carrera docente. Esta decisión, sin embargo, contraviene el derecho de los

aspirantes alejados de los círculos sindicales a competir en condiciones de igualdad por obtener una plaza en el sistema de educación pública. En consecuencia, violenta el supuesto de que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, porque el acceso al empleo docente estaría controlado por las organizaciones gremiales que, como tales, ejercerían un privilegio que en el antiguo régimen equivalía a una ley privada. Tampoco habrá certeza de que la contratación de los mentores se efectúe “mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes”. Charles Tilly, el eminente sociólogo de los movimientos sociales, se empeñó en mostrar el papel que éstos han tenido en la conformación de una sociedad civil democrática en cuanto expresión de las reivindicaciones populares, concluyendo que los movimientos que buscan que “la ley se haga eco de las categorías a las que pertenecen” no fomentan la democratización. Ése es el caso de la demanda del magisterio recién señalada.

López Obrador prometió en 2014 a las comunidades aledañas al Popocatépetl cancelar la construcción de la termoeléctrica anunciada por el gobernador de Morelos Graco Ramírez. Cuando ganó la presidencia, el tabasqueño incumplió la promesa y revivió el plan energético bloqueado por la movilización de las comunidades afectadas. Dentro de la tentativa obradorista de recuperar la soberanía energética, el Proyecto Integral Morelos (PIM) comprende un gasoducto, un acueducto y una termoeléctrica. “Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, si no se utiliza la termoeléctrica tendremos que seguir comprando la luz a empresas extranjeras”, dijo el presidente tabasqueño en un mitin en Huexca, Morelos, previo a la consulta ciudadana del 23 y 24 febrero de 2019. López Obrador justificó ésta ante un público hostil con el argumento de que “ya lo hicimos con el aeropuerto, lo mismo aplica en Morelos con la termoeléctrica, no puede haber dos varas para medir. Aunque haya gritos, el pueblo va a decidir”.

Días antes de la consulta, Samir Flores Soberanes, líder indígena opositor al proyecto, fue ultimado de dos balazos en la cabeza afuera de su casa en Amilcingo. “Desafortunado”, lo calificó el presidente tabasqueño sin considerar el asesinato óbice suficiente para cancelar la consulta. Tolerante con los movimientos sociales —recordemos, en contraste, a Felipe Calderón con los electricistas o a Enrique Peña Nieto en Nochixtlán—, la nueva administración utilizó “dos varas para medir”: permisividad hacia la CNTE e indiferencia hacia los opositores a la termoeléctrica. Con los profesores, por su coincidencia básica con abrogar la reforma educativa de 2012-2013; en Morelos, por la discrepancia

con respecto del proyecto energético del gobierno federal. Sancionó esto, dijimos, con una consulta ciudadana sesgada hacia la decisión presidencial. Una reducida votación (56,715 personas) favoreció la realización del megaproyecto (59.5% de los votos).

Tampoco ha sido receptivo López Obrador a las reivindicaciones del movimiento feminista, el cual, no obstante haber germinado desde la década de los setenta, en los meses recientes ha cobrado mayor fuerza en el país, siendo Oaxaca la segunda entidad federativa que despenaliza el aborto. La “marea verde”, como se le conoce, ha puesto en la mesa la desprotección en la que viven las mujeres mexicanas, la minusvalía de sus derechos, el acoso y la violación de los que recurrentemente son víctimas, así como el derecho a abortar en condiciones médicas seguras y dignas si las circunstancias lo exigen. La vulnerabilidad de las mujeres es tal, y los niveles de impunidad tan elevados, que en lo que va de 2019 México lidera la violencia de género en Latinoamérica. Ni en la campaña electoral, ni en lo que va de su gobierno, el presidente tabasqueño ha tenido un pronunciamiento claro al respecto, a no ser la elusiva respuesta de someter este derecho a una consulta popular en caso de ser indispensable; a sabiendas, sin duda, de que la mayoría de la sociedad mexicana se opone a despenalizar el aborto.

Igualdad sin emancipación

La izquierda ha vinculado históricamente la solución de la cuestión social con la emancipación de las clases subalternas y, por extensión, de la sociedad entera. "El problema que tienen los pobres —destaca Gerald A. Cohen— no es que carezcan de libertad, sino que no siempre pueden ejercer la libertad que indudablemente poseen." Acabar con la pobreza sería una condición, pero no bastaría para alcanzar la libertad mientras los desposeídos no se organizaran en cuanto actores colectivos que pudieran enfrentar a las clases propietarias. La asociación vertebró el discurso y la acción de las clases subalternas desde su formación, y el socialismo le agregó este contenido emancipador. Estas clases se asociarían con el fin de defender sus intereses de manera autónoma, para evitar la interferencia de intereses externos (de otras clases o del Estado) que subordinaran los suyos. La autonomía en algún momento llevará a la emancipación, tanto de un orden político-estatal impuesto por las clases propietarias como del dominio del capital sobre su trabajo y sus vidas.

Las empresas cooperativas, por ejemplo, fueron un instrumento para contender dentro del capitalismo de libre concurrencia. El sindicalismo y los partidos obreros articulados con éste potenciaron la fuerza de los subalternos. La alternativa revolucionaria también fue una opción atractiva. Todas ellas, con mayor o menor intensidad, contemplaron el problema de la ciudadanía, es decir, cómo hacer que los desposeídos trascendieran el carácter meramente político de ésta, dándole sustento en condiciones materiales, espirituales y culturales para que aquéllos ejercieran la facultad de deliberar sin estar atados a la necesidad, en el empleo pleno de su libertad electiva. De esta manera, las clases populares o subalternas adquirían el papel de sujetos, sujetos de sus propias vidas. A mejores condiciones materiales y culturales, mayor libertad. Pero una libertad no tutelada, no constreñida por el Estado, las Iglesias, los poderes fácticos, el patriarcado u otras entidades externas a las sociabilidades de los subalternos.

La política social de López Obrador contiene una preocupación genuina por aminorar la desigualdad, pero también es insoslayable el sesgo político y su andamiaje conservador. Ésta desmonta los espacios de mediación entre el Estado y la sociedad argumentando, con algo de razón, que en ellos anidaba la corrupción dado que los gestores privados se quedaban con parte de los

beneficios. No obstante, el presidente tabasqueño no conformó instituciones nuevas que los sustituyeran, optando por anclar sus programas en la familia. La institución más antigua de todas es el receptáculo de la política social, el núcleo de integración de una sociedad desgarrada y la depositaria de los valores morales, reforzados por la constitución moral en proceso de redacción. El libro de campaña de López Obrador fue claro al respecto: “sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de los valores no será posible frenar el deterioro de la sociedad”.

Como todo proyecto político que pretenda la hegemonía, la llamada Cuarta Transformación intenta afianzar su base social favoreciendo a segmentos de la población que no disponen de recursos suficientes para contender con las necesidades básicas, permanecer en la escuela o capacitarse para obtener empleo. De ellos se esperará también el voto tanto en las elecciones intermedias de 2021 como en la elección constitucional de 2024. Morena, con el padrón de beneficiarios en mano de los llamados “Servidores de la Nación”, será seguramente el instrumento junto con los superdelgados en las treinta y dos entidades federativas coordinados desde Palacio Nacional. El proyecto hegemónico del presidente tabasqueño atiende la desigualdad y pretende potenciar las capacidades de la población desfavorecida mediante la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, no considera la independencia y menos la autonomía de las clases populares, sometiéndolas a la autoridad benévola de un Estado protector reedificado sobre las ruinas del régimen de la Revolución mexicana y legitimado en las urnas, pero que conserva la matriz autoritaria inherente a su constitución.

La conformación de un Estado social y la transición democrática habrían dado un paso gigantesco con la institucionalización de la política social. Primero, porque habría desligado la función redistribuidora del Estado de los gobiernos particulares, ofreciendo más garantías a los ciudadanos de que las políticas sociales se mantendrían independientemente del partido que estuviera a cargo del Ejecutivo. Entre más despartidizada o despersonalizada esté una política pública será mejor. Segundo, porque al despartidizar estas políticas, con la intervención de un ente impersonal como el Estado, se debilita la tentación de utilizar la política social en calidad de soporte de la maquinaria partidaria. Esto, cierto, iría contra prácticamente toda la tradición electoral mexicana. Tercero, el dinero es más volátil que los servicios, es más susceptible del tráfico que éstos. Obviamente, la consolidación de un Estado social implicaría una reforma fiscal que le diera viabilidad y certidumbre, un flujo de recursos que provendrían del

mercado y alimentarían las agobiadas arcas públicas. Mirarlo así obliga a modificar el enfoque, entender que la corrupción, si bien es una práctica altamente nociva que hay que contener, no es la única ni la principal fuente de la desigualdad social como piensa López Obrador. La desigualdad se genera en el mercado y corresponde al Estado corregirla o, más modestamente, atenuarla. Ese paso que ningún gobierno del siglo XX realizó, y que las administraciones neoliberales de la alternancia ni siquiera se platearon, sería efectivamente un "cambio verdadero". A eso y no a otra cosa llamaríamos la Cuarta Transformación.

6

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

López Obrador se concibe protagonista de la historia y en función de ella asignó un nombre a su gesta presidencial aun antes de iniciada. De esta manera transitamos del “cambio verdadero”, nominado en la declaración de principios de Morena, a la Cuarta Transformación, la equivalente contemporánea de la tríada Independencia, Reforma y Revolución. Un horizonte más allá del neoliberalismo, esa anomalía que había de ser corregida por el Estado puesto al servicio del pueblo. En la Cuarta Transformación, el ente político procuraría la felicidad de los mexicanos, nuevo cometido que el presidente tabasqueño otorgó al poder público. Pero el ideal obradorista no es más que eso. No sabemos de antemano si un proyecto político concretará un cambio sustantivo o quedará en buenas intenciones, tampoco si éste ocurrirá en el sentido previsto o no pasará de ser un simple instrumento retórico para generar expectativas en la ciudadanía. Como es común entre los hombres públicos, López Obrador posee un deseo de trascendencia, acaso más todavía que el político promedio porque explícitamente ha renunciado a la acumulación de riqueza en cuanto objetivo de la función pública de acuerdo con la tradición política nacional, concentrándose en su papel en la historia, como un director que dispone del guion completo de la obra desde antes de comenzar. Y, todavía más, de alguien que se ufana de conocer a plenitud el contenido de las transformaciones precedentes, la vida de todos y cada uno de los presidentes mexicanos, tal vez el único de ellos que ha visitado más de una vez todos los municipios del país.

La historia maestra de la vida

El político tabasqueño inscribe sus acciones dentro de una narrativa histórica en la que él mismo participa. Cada declaración mañanera y el consabido viaje semanal al interior del país son la evidencia puntual de una historia que el presidente pretende escribir día a día, a ras de piso. Historia en la que, con personajes actualizados, se confrontan los adversarios decimonónicos en una escenificación del pasado. López Obrador es parte de los buenos. Y éstos, representados por los liberales con los que el presidente tabasqueño se identifica, son quienes ganaron. De esta forma, el presidente sabe de antemano que finalmente triunfará. Un adelanto de ello fue cuando tras la elección de 2006 López Obrador se ungió como presidente legítimo. Entonces, el político tabasqueño recorrió el país como Juárez en su carruaje durante las guerras de Reforma e Intervención. En 2012 el futuro presidente denunciaría el neoporfirismo, encarnado por la administración salinista, para convertirse en el Madero que combatiría el Ancien régime. López Obrador volvería triunfante para emprender la Cuarta Transformación.

La perspectiva histórica del presidente tabasqueño pertenece al régimen antiguo de historicidad dentro del cual la historia desempeña el papel de maestra de la vida, proveyendo de ejemplos del pasado a los hombres del presente para iluminar sus decisiones. Esto es posible porque, de acuerdo con esta concepción, la historia se repite, aunque obviamente no como una copia idéntica de la precedente. En función de eso, conocerla al detalle no es una práctica ociosa sino un insumo indispensable de las decisiones correctas del Homo politicus. Así la concibe López Obrador. Por tanto, este conocimiento puntual del pasado nacional exime al presidente tabasqueño de conocer las ciencias sociales, la ciencia en general u otros campos del saber. Con la historia basta, pues en ella están las claves del presente y del futuro, invaluable para quien se asume actor de su propia épica, en manos del que se mira cotidianamente en el espejo de la historia adelantándose a la posteridad bajo su atinada guía.

López Obrador no sólo considera que la historia es la maestra de la vida, también identifica la virtud con la verdad. Con esto asume que si las decisiones del estadista obedecen a objetivos nobles, los resultados son acertados de suyo: la intención correcta es un camino hacia la verdad. Ésta es una entre múltiples

razones por las cuales el presidente tabasqueño desatiende las evidencias que la realidad le ofrece o los pronósticos científicos que lo contradicen: si el propósito de una política pública es moralmente legítimo, el resultado deseado finalmente se concretará. Aquí nos enfrentamos de nueva cuenta al problema de quién decide cuáles son los valores moralmente aceptables, cuáles políticas moralmente correctas se privilegian sobre otras y qué se hace cuando el dinero no alcanza. Si no pensamos que sean los hombres providenciales los que conduzcan a los pueblos, o si ni siquiera consideramos que este tipo de hombres exista, esta amalgama de la virtud con la verdad no favorece la adopción de políticas certeras, pues éstas deberían conciliar la procuración del bien común con los medios pertinentes para su realización, esto es, ponderar el valor del conocimiento en la toma de decisiones públicas lo más acertadas posible.

Ahora bien, ¿a cuál historia se acerca el presidente tabasqueño? Básicamente a la historia patria, a la historia de los libros de texto oficiales, la que se aprende en la escuela. Una historia confundida con el civismo. Ese tipo de historia en la cual las naciones poseen un rumbo definido de suyo, un destino. Sea porque esa historia esté gobernada por la Providencia, por alguna otra fuerza distinta de los procesos humanos, o porque corresponde a un ser nacional, es expresión de la esencia que constituye a las naciones en cuanto tales, como pensaba Herder. La concepción de la historia de López Obrador tiene la impronta romántica. Ésta distingue fácilmente a los buenos de los malos, identifica al pueblo con la patria, moraliza el pasado y enaltece a los grandes hombres. Cierto, hay que decir, el presidente tabasqueño abreva además en el romanticismo social, el cual puso atención en las clases populares, en sus condiciones de vida y expectativas, en su articulación como pueblo. Un pueblo que es más un referente, discursivo y empírico, que un sujeto con voluntad propia.

La idea de la historia de López Obrador adopta también la postura romántica según la cual en algún momento aquélla se desvió del curso prestablecido a causa de objetivos espurios y las conductas pérfidas de algunos hombres, razón por la cual habría que combatir ese desorden y restablecer el curso natural precedente, orientado por la moral o la razón. A eso el primer socialismo le llamaba palingenesia o regeneración social, es decir, el regreso a un estadio rebasado en el tiempo con el propósito de recomenzar un proceso desviado por la acción humana. En origen, el término revolución tenía el significado de una vuelta al principio, un giro de 360 grados que permitía partir de cero, esto es, recomenzar. La Cuarta Transformación se concatenaría con los grandes procesos históricos que la precedieron, culminarlos en cierto sentido, a la vez que la

recuperación de los hilos extraviados por la intervención de las fuerzas de la reacción, la maldad o los intereses antipatrióticos de los gobernantes y de las élites. De esta forma, tendríamos los hitos fundamentales de la Independencia, la Reforma y la Revolución que reanudaría la Cuarta Transformación, procesos truncados acaso por el conservadurismo, el Porfiriato y el neoliberalismo.

Presente y pasado se atan con el futuro tan pronto la historia recupera la senda correcta. Cuando esto ocurra, se cerrará el círculo porque la sociedad superó las carencias, se reencontró con los valores básicos de la convivencia y armonizó el beneficio individual con el interés colectivo, en tanto que el Estado abatió la delincuencia de cuello blanco, la corrupción política y la impunidad, según reza el libro de campaña de López Obrador. Todo ello condiciones indispensables para alcanzar la felicidad. Aparte de crecer la economía a un índice anual del 6%, "en 2024 tendremos una sociedad mejor, no sólo por lo que vamos a construir entre todos y desde abajo en el plano material, sino por haber creado una nueva corriente de pensamiento, por haber consumado una revolución de las conciencias que ayudará a impedir, en el futuro, el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción, y la imposición del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad y el amor al prójimo". Habríamos sustanciado la fraternidad.

Sabemos que esto no es posible, pero eso es irrelevante. Lo significativo es que la fraternidad funciona como idea regulativa que orienta una dirección, organiza la práctica. A este respecto hay que recordar las constantes alusiones de López Obrador al individualismo, inclinación del espíritu que, considera, no promueve la mejora de la sociedad, antes bien contribuye a su deterioro porque corroe los lazos cohesivos de la vida comunitaria. En esto el presidente tabasqueño es antiliberal, al menos en el plano económico, dado que para el liberalismo clásico la búsqueda del beneficio individual permite alcanzar el bien común. Incluso el egoísmo es positivo para aquél. López Obrador cree más en la comunidad, pero en una comunidad ética, posiblemente cristiana, que funcione de acuerdo con valores compartidos y observados por todos. Con base en ellos, él augura un renacimiento del país: "a través de la reserva moral y cultural que todavía existe en las comunidades del México profundo y apoyados en la inmensa bondad de nuestro pueblo debemos emprender la tarea de exaltar y promover valores individuales y colectivos". Ello con el objetivo de "revertir el individualismo por los principios que alientan a hacer el bien en pro de los demás".

López Obrador aprecia la comunidad en cuanto entidad cohesiva a escala local, pero la subsume dentro de una entidad superior, la nación, la cual integra a todos

los agregados particulares, diferenciados únicamente por su cultura, de allí una de sus múltiples inadecuaciones con el proyecto neozapatista. Asimismo, los valores comunitarios enaltecidos por el presidente tabasqueño refieren exclusivamente a la convivencia sin adentrarse en las formas de propiedad. Esto quiere decir que López Obrador no tiene una propuesta colectivista a escala alguna; a lo más, se inclina a promover o reforzar la propiedad estatal o propiedad de la nación. En este aspecto el presidente tabasqueño está plenamente inscrito en la perspectiva del nacionalismo revolucionario, anulando un posible vínculo con la tradición socialista. Acaso ello se deba a que el colectivismo en cualquiera de sus magnitudes exige una autonomía y capacidad de decisión de los agregados sociales que por ningún motivo está dispuesto López Obrador a otorgar. Si la corrupción se barre de "arriba hacia abajo" es porque la cadena de mando funciona en esa dirección. Y ese principio no lo pone en duda ni lo somete a escrutinio alguno López Obrador, porque en la república amorosa también el presidente manda.

Tres antes de la Cuarta

Vicente Lombardo Toledano fijó el paradigma con que la intelectualidad de izquierda concebiría la historia moderna del país. Desde entonces se postuló que el ascenso de la burguesía en México obedeció a un ciclo que se inició con la Independencia, continuó en la Reforma y se consumó durante la Revolución de 1910. Esto suponía la existencia de un pasado feudal (la Colonia) enterrado por obra de una revolución burguesa con la especificidad indicada. Dichas transformaciones tuvieron un componente popular significativo, pero subordinado invariablemente a la dirección de las clases propietarias quienes, cada una en su momento, emprendieron un proyecto modernizador. También estas rupturas fueron cruentas, prolongadas y destructivas. Enfocado de esta manera, México había seguido un curso análogo al de los países europeos, por lo cual, como éstos, podía ver en el firmamento una revolución proletaria, aunque los distintos diagnósticos diferían sobre cuán próxima estaría ésta.

Dentro de la narrativa histórica de la izquierda, la Guerra de Independencia separó a la nación mexicana del imperio español. Ello permitió dar pasos inciertos en la construcción de un Estado nacional, el cual logró sobrevivir, mas no librar la secesión territorial. Durante y después de la Independencia, la élite criolla sometió el movimiento popular. La Reforma propició una guerra civil y una invasión extranjera, desmontó las estructuras coloniales, dio lugar a un Estado moderno, debilitó las corporaciones y desarrolló el mercado de la propiedad territorial e inmueble. La Reforma significó el ascenso del México mestizo —de acuerdo con la caracterización de Andrés Molina Enríquez— e inició como una revolución desde arriba motivando la respuesta armada de las fuerzas del antiguo régimen, esto es, una contrarrevolución conservadora, monárquica al continuarse como guerra de intervención. La Revolución despojó a la oligarquía porfiriana, levantó en armas al campesinado —subordinado tras la derrota de los ejércitos populares—, repartió las haciendas y edificó un Estado de masas.

Estas tres transformaciones fueron rupturas profundas en la historia nacional, épocas que cambiaron sustancialmente al país. La Independencia creó el Estado-nación, la Reforma un entramado político y legal que dio viabilidad a la república, y la Revolución un Estado que incorporó a las masas populares a la

esfera pública. Más lentos, los cambios económicos y sociales fueron también de consideración: la formación del mercado interno, la desamortización de la propiedad corporativa, la industrialización, la constitución de la sociedad civil, el asociacionismo trabajador y la escuela pública, por mencionar sólo algunos. Estas transformaciones contaron con una élite modernizadora (los criollos ilustrados, los liberales y los rancheros sonorenses), cedieron espacio a las clases subalternas y abrieron el sistema político a su participación. Pero con ninguna de éstas los subalternos se hicieron del poder ni tampoco lograron emanciparse.

¿Es comparable la Cuarta Transformación a las grandes rupturas precedentes? La primera y obvia respuesta es que resulta demasiado temprano aventurar un pronóstico puesto que aquélla está apenas en ciernes, no se ha desplegado lo suficiente para conocer sus alcances. De la misma manera, no conocemos todos los obstáculos que pudieran lastrar su desarrollo. No obstante, la hiperactividad del presidente tabasqueño hizo que muy pronto presentara las líneas fundamentales de su administración y pusiera en marcha los programas prioritarios, amén de que la sobreexposición mediática dejó en claro su estilo de gobernar. También están los antecedentes de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con base en esto podemos esbozar algunas ideas provisorias sobre el régimen político.

¿Estamos frente a uno nuevo o continuamos en el régimen de la Revolución mexicana? El principal intento de abandonar éste provino de los últimos gobiernos priístas del siglo XX, quienes encontraron la salida a través de la reducción de la intervención estatal en la economía y la promoción de la competencia política por medio de sucesivas reformas políticas. A despecho de ambas, el pacto corporativo que sustentó el Estado posrevolucionario permaneció intocado y el régimen autoritario sobrevivió a la democracia electoral. Otro tanto abonaría Felipe Calderón al autoritarismo estatal recurriendo a la militarización para combatir el crimen organizado: guerra interna y transición democrática, una ecuación muy difícil de cuadrar.

López Obrador, sin abandonar el marco democrático, socava los contrapesos al Ejecutivo, condición éstos tanto para acotar el poder presidencial como para desarrollar la democracia. Tampoco la militarización de la seguridad pública contribuye a la realización de aquélla. Y las consultas populares, en lugar de servir para tomar el pulso a la sociedad y otorgarle un papel en la toma de decisiones públicas, han funcionado como un mecanismo de legitimación de decisiones previamente tomadas. Esto parece indicar que la Cuarta

Transformación tampoco abandonará la matriz autoritaria del régimen posrevolucionario. De hecho, el presidencialismo y su cariz centralizador se han fortalecido durante el gobierno obradorista. En esta medida, con todo y su incuestionable legitimidad democrática ganada a pulso en las urnas, el presidente tabasqueño ha retomado en el Ejecutivo (o intenta hacerlo) las riendas de la gobernabilidad relajadas en los años de la alternancia. Todas estas razones permiten pensar que la Cuarta Transformación no supondrá un cambio de régimen político, antes bien se reforzará, agregando añadidos, el existente. Desde esta perspectiva, el obradorismo presumiblemente se quedaría corto en relación con las rupturas históricas precedentes que, o bien crearon nuevos Estados (la Independencia y la Revolución), o modificaron el régimen (la Reforma).

¿Cambiar para seguir igual?

Tampoco la Cuarta Transformación significa una ruptura con el modelo neoliberal en lo referente a la reducción del gasto público, las bajas tasas impositivas, la disciplina fiscal, el libre comercio o el neoextractivismo (para la explotación de los recursos naturales). No en balde, desde antes de tomar el timón presidencial López Obrador coadyuvó en la negociación del T-MEC. Donde sí hay un deslinde respecto del neoliberalismo es en el uso que se da a los recursos públicos ahorrados, que se emplearán básicamente en rescatar al sector energético y en fondear los programas sociales. Esto, que bien podría parecer un contrasentido, define con mucho el perfil del gobierno obradorista: realismo macroeconómico, política social redistributiva y nacionalismo económico. Sin embargo, el eclecticismo gubernamental provoca tensiones con los mercados globales contrarios al nacionalismo económico y a la intervención estatal en el mercado, como han mostrado la reacción de las calificadoras con respecto de la cancelación del NAIM o el rescate de Pemex con fondos del presupuesto federal. Atendiendo estas consideraciones, la Cuarta Transformación sigue atada a la globalización neoliberal, pero tiene diferencias importantes con los gobiernos precedentes.

Las restricciones que enfrentan los países en la globalización rebasan con mucho la voluntad de los gobernantes y fijan límites infranqueables a sus proyectos en las condiciones actuales. El capital financiero tiene como nunca un dominio sobre el conjunto de la economía mundial. Las decisiones que toman en unos minutos los grandes centros de las finanzas globales pueden arruinar en un momento a todo un país, hacer perder el trabajo a cientos de miles de personas o a multiplicar exponencialmente la deuda externa. Experiencias como la de Grecia hace unos años muestran de manera descarnada la vulnerabilidad de las economías periféricas dentro del concierto mundial. Incluso países desarrollados como los Estados Unidos tuvieron que realizar esfuerzos muy grandes para contender con la crisis que estalló en el sector inmobiliario, desnudando la especulación financiera en este mercado. Esto por no mencionar la asimetría entre las economías desarrolladas y la periferia del sistema mundial, ingrediente sustantivo de la debilidad del gobierno mexicano frente a los Estados Unidos con motivo de la amenaza de la administración de Trump de fijar aranceles a las exportaciones nacionales si López Obrador no reducía significativamente la

migración centroamericana hacia el país del norte. Nada más para dar una idea de la desproporción del poder de ambos países, la economía estadunidense es diecisiete veces mayor que la mexicana y el PIB per cápita de los Estados Unidos supera siete a uno al de México. El 80% de las exportaciones mexicanas tienen por destino al vecino del norte, mientras que las importaciones procedentes de México representan aproximadamente el 16% del total de los bienes adquiridos por los Estados Unidos en el exterior.

La disparidad de fuerzas en el mundo globalizado se acompaña del rezago del trabajo frente al capital. La desproporción de la masa salarial con respecto del capital en las cuentas nacionales está en crecimiento. En 2003 aquélla ascendía a un 30.8% del PIB, en tanto que en 2012 había disminuido al 27.2%, en tanto que en Brasil y Argentina se elevaban en 2010 al 43.5% y 40%, respectivamente. Por otro lado, las remesas de los migrantes significaban en 2017 el 20% del PIB. En otras palabras, al tiempo que retrocedía el trabajo en México ganaba importancia la actividad productiva de los migrantes en los Estados Unidos. El sindicalismo corporativo contribuyó al rezago salarial en nuestro país, que ancló la competitividad de las empresas locales y foráneas no en la productividad sino en las bajas remuneraciones de los trabajadores. Para colmo, los índices de sindicalización, de por sí reducidos, menguaron en las últimas décadas y la precariedad laboral, la informalidad y la economía criminal crecieron vertiginosamente, a la par que los sindicatos crecientemente perdieron la confianza de la sociedad mexicana. Todo ello coloca en enorme desventaja a los subalternos en relación con las clases propietarias y opone obstáculos insalvables a las tentativas de modificar radicalmente el statu quo en favor de los segmentos menos favorecidos de la población. Y, también esto, hace a las clases subalternas más receptivas a proyectos políticos que pretenden acotar los saldos negativos de la globalización, de la exclusión, desigualdad, precarización y la violencia estructural que van de la mano.

El modelo económico obradorista recupera las políticas desarrollistas de antaño, aunque en un contexto radicalmente distinto: no en la economía cerrada de medidos del siglo XX, sino en una de las economías más abiertas del mundo. Éstas consisten en una inversión pública fuerte en infraestructura y en los sectores estratégicos. Los gobiernos neoliberales abrieron a la iniciativa privada la participación en ambos, haciéndose cargo de las pérdidas cuando los privados fracasaban, tal como ocurrió con las carreteras concesionadas en el periodo salinista. Si los negocios en materia de infraestructura florecían, ocurría en buena medida por los costos escandalosamente altos de las obras concesionadas.

Hoy en día México cuenta con una red carretera modernizada con peajes mucho más elevados que en la mayoría de los países del mundo. En lo que respecta a los sectores estratégicos, la explotación minera por parte de particulares también se abrió durante el salinismo y, en la administración de Felipe Calderón, llegaron las grandes corporaciones canadienses a apropiarse de la explotación de metales preciosos, frecuentemente a costa de muchas de las comunidades asentadas en esos territorios y retribuyendo al Estado rentas magras por los metales extraídos.

López Obrador, según evidencian el T-MEC y el rápido entendimiento con Canadá en el rubro minero, no parece tener intención de modificar el statu quo en esta materia. En cambio, es notoria su disposición a rescatar el sector energético, así como a reducir la intervención del capital privado dentro de éste. Con todo y la razón que asiste al presidente tabasqueño en responsabilizar a las administraciones anteriores de saquear a Pemex, tanto por la dependencia de las finanzas públicas del ingreso petrolero como por la corrupción (de los funcionarios y del sindicato), la faena de rescatar la empresa supera las posibilidades gubernamentales, y la estrategia para hacerlo desatiende opciones menos onerosas y más realistas para hacerse de flujos de inversión suficientes, sobre todo en lo referente a la exploración en aguas profundas. Pero no sólo eso, el plan de hacer una nueva refinería —es más comprensible el proyecto de modernizar las ya existentes— remite a un modelo de desarrollo y a otro energético ya superados. Invertir grandes sumas de dinero en los combustibles de la segunda revolución industrial, en lugar de gastar en las energías del futuro, más cuidadosas del ambiente, revela una gran falta de perspectiva.

El proyecto obradorista ha incorporado a las clases populares, relegadas por la modernización excluyente efectuada por el neoliberalismo. Un parecido de familia con lo que significó el régimen de la Revolución mexicana con respecto del Porfiriato. Pero, y aquí el paralelo es con el régimen posrevolucionario, la integración de las masas ha sido a expensas de su subordinación. No son las clases populares las que toman las decisiones o quienes gobiernan, es el presidente el que las interpreta y ejecuta las acciones pertinentes. En este trasiego de demandas sociales y respuestas gubernamentales, López Obrador se asume como un delegado del pueblo, como el hombre común a quien le corresponde hablar en nombre de todos porque, precisamente por ser común, es uno más, pero uno entre muchos idénticos a él. Y, en cierto sentido, el presidente tabasqueño lo es, pues mira el mundo, los problemas del país y las soluciones a ellos como lo hace la mayoría de la gente. Habitualmente, el político de Macuspana se comporta como un padre de familia que hace economías para

llegar a fin de mes. Por tanto, no asombra que las explicaciones complejas de los especialistas le repugnen a López Obrador, porque considera que las cosas son sencillas, diáfanas. La diferencia con la gente común o con el jefe de familia es que él es el presidente.

En la crítica más potente al régimen de la Revolución mexicana elaborada por la izquierda, José Revueltas consideró que éste impidió que se emanciparan las clases populares —trabajadoras, de acuerdo con el escritor duranguense. Ello ocurrió porque la promesa de la Revolución (justicia social, educación, inclusión, etcétera) nubló el horizonte trabajador que, según Revueltas, era el de autogobernarse y dirigir a la sociedad en su conjunto. Pero quienes realmente tenían el poder eran las clases propietarias que delegaban la gestión pública al partido de Estado (el PRI y sus predecesores). Este equívoco hacía que las clases populares consideraran propios los intereses ajenos, que confundieran la emancipación con la incorporación subordinada al Estado revolucionario, que concibieran el mundo desde una ideología que no era la suya, impuesta desde fuera por el régimen. Tomando prestado el análisis revueltiano, y trayéndolo a nuestro tiempo, el régimen de López Obrador se mueve en una lógica similar: incorpora a las clases populares, desatendidas por el neoliberalismo, pero sin ofrecerles la emancipación y la oportunidad de autogobernarse.

Tampoco la administración obradorista parece proclive a compaginar los programas dirigidos a las clases populares con un Estado social que institucionalice las políticas oficiales. Quizá desde la administración del general Cárdenas es ésta la mejor ocasión para instrumentar un programa socialdemócrata o un New Deal en el país. Con tal respaldo popular, aunado a la vocación social del nuevo gobierno, sería perfectamente factible conformar un Estado social que convierta en derechos universales las políticas sociales, garantice su continuidad, las desvincule de los partidos políticos y de los procesos electorales, las vuelva impersonales y permita redistribuir el ingreso. También podrían adicionarse a éstas un seguro al desempleo, el acceso a una canasta mínima de alimentos y la renta básica universal. Eso mostraría un compromiso mayor con la igualdad que lo observado hasta el momento. Sin embargo, ello requeriría de una reforma fiscal progresiva cuyos costos López Obrador no está dispuesto a pagar en el renglón de popularidad, al menos no antes de las elecciones intermedias de 2021. A este respecto, hay que tener presente la alta concentración de la riqueza habida en México y las bajas tasas impositivas que pagan los sectores más acaudalados de la población, así como las exenciones fiscales de las que son beneficiarios los grandes corporativos. En

esto último, cabe decir, la administración obradorista legisló para acabar con los regímenes especiales de tributación.

¿Si no es una modificación sustantiva del régimen ni la puerta de salida del neoliberalismo, puede decirse que la Cuarta Transformación es tal? Definitivamente todavía le queda grande el nombre, aunque de esto no se sigue que el cambio sea obligadamente menor. Además de los aspectos señalados, otro asunto destacable es la recomposición del bloque en el poder sin disponer Morena de los cuadros suficientes, capaces y experimentados que permitan el recambio de las élites. Mientras que el bloque neoliberal sumó al gran capital, la clase política, los medios de comunicación masivos y el crimen organizado, sirviéndose de la tecnocracia para articular su gestión, todavía no conocemos bien a bien con quiénes López Obrador integrará un bloque emergente que dé continuidad transexenal a su proyecto a modo de constituir una hegemonía. Por lo que hemos visto, las instituciones tradicionales tendrán un peso de consideración en la administración obradorista, presumiblemente el capital nacional, los sindicatos y los grupos de poder locales. También parecen ganar terreno las clases medias, posible semillero de los dirigentes de la Cuarta Transformación. E ignoramos hasta qué grado intervendrán las clases populares, es decir, si pasarán de receptores de los programas sociales, como ha sucedido hasta el momento, a convertirse en actores políticos en el nuevo bloque de poder.

7

LA POLÍTICA DEL SIGLO XXI

El altermundismo de la década de los noventa del siglo pasado conllevó el renacimiento de los movimientos sociales en múltiples lugares del mundo, manifestándose en nuestro país con la rebelión indígena en Chiapas. Le siguieron las grandes movilizaciones provocadas por la Gran Recesión y la Primavera Árabe. En México no hubo algo equivalente, aunque sí la activación de la protesta pública durante la alternancia democrática, más aún cuando se dibujaron las reformas estructurales o a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, particularmente con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En otro registro, el descontento tomó forma política con la creación en 2011 de Morena, el brazo partidario de López Obrador, vinculado con los movimientos sociales, si bien gestándose con independencia de éstos.

Por distintas vías, en la última década observamos la insurgencia de los sectores sociales castigados o excluidos por la globalización. Activismo que se expresa en las calles, así como en las urnas, sin tener una postura política de un color particular, incluso volátil. Lejos están los tiempos en que la clase obrera occidental votaba por la izquierda; actualmente se decanta con frecuencia hacia el otro lado del espectro político. La desconfianza ante los partidos tradicionales, fundamentalmente el binomio centro derecha-centro izquierda que ha gestionado la política en la era neoliberal, y el rechazo a la colusión del dinero y la política, abrió la puerta a políticos carismáticos, a veces no profesionales, que lograron cohesionar el deseo de cambio de una sociedad insatisfecha con la modernización excluyente del capitalismo desregulado. La movilidad social descendente, o la expectativa de ascenso frustrada, nutren esa desazón que transita por la protesta callejera y eventualmente ingresa en la política formal. Ese terreno en disputa, el voto de los desencantados, parecen ganarlo hasta el momento las derechas. Si bien López Obrador no es una excepción, tampoco va en el sentido de la tendencia dominante, menos todavía en América Latina, donde aquéllas recuperaron las plazas ganadas por los llamados populismos en

los comienzos del nuevo milenio. Las derechas de nueva generación son más radicales que sus inmediatas predecesoras, aplicándoseles el término neofascista para conceptualizarlas. Esa razón eleva considerablemente el costo de los fracasos de la izquierda.

La rebelión de los excluidos

La desindustrialización en los países desarrollados achicó a la clase obrera y dejó sin empleo a muchos trabajadores que provenían del modelo industrial fordista. Los sindicatos se debilitaron al perder una porción considerable de sus bases, en tanto que la deslocalización de las industrias manufactureras —en la periferia europea, el Tercer Mundo y el antiguo bloque socialista— minó su capacidad de resistencia: mientras que los sindicatos son fundamentalmente nacionales, el capital financiero es global. Ello debilitó las bases de los partidos socialdemócratas occidentales y del laborismo británico. Y el colapso socialista desapareció a buena parte de los partidos comunistas de la faz de la Tierra. Esto, aunado a que la socialdemocracia adoptó los postulados económicos neoliberales, dejó sin referente político a la clase obrera, antiguamente vinculada con la izquierda: los obreros no son ya instintivamente rojos y, con el agotamiento de la cultura comunista, mudaron en cantidades importantes a las derechas extremas. Marine Le Pen o Donald Trump ofrecen rescatar a los "blancos humildes", asediados por los migrantes. Para "los franceses de fuste" y "los americanos" no es el capitalismo neoliberal la causa del desempleo o la precariedad laboral, sino la competencia de la mano de obra barata del Tercer Mundo. Sin embargo, no es un movimiento de masas ni una maquinaria partidaria quien está detrás de Trump, el magnate inmobiliario convoca a un conjunto de individuos atomizados, consumidores empobrecidos y aislados, ofreciéndoles la promesa vacía de "Make America Great Again" y recuperando el viejo eslogan de los fascistas estadunidenses ("America First").

Las clases medias también se han adelgazado a consecuencia de la concentración del ingreso provocada por el neoliberalismo. El temor o la evidencia de caer escalones abajo de la pirámide social o, peor, en la precariedad y el desempleo, han mellado la seguridad de antaño, ya sea para producir desesperanza o constituyendo un incentivo para la protesta callejera. Esto último es lo que sucede con los Chalecos amarillos, el movimiento de acción directa que se manifiesta los sábados en las plazas públicas francesas. Con demandas transversales (esto es, contra el aumento de los precios de los combustibles o el incremento de los salarios mínimos) este movimiento ha sacudido el statu quo de la política gala sin mostrar una filiación ideológica definida o un sesgo partidario específico, lo que puede conducir a los participantes a inclinarse por formaciones

políticas antagónicas, pero en cualquier caso distintas de los partidos tradicionales. La indignación contra quienes gobiernan o los privilegios de las clases altas es un componente del estado de ánimo colectivo. Las exigencias son puntuales y las soluciones que esperan de la autoridad, rápidas y eficaces. En América Latina, la protesta pública estalló en Haití, Ecuador, Bolivia y Chile, forzando en este último un referéndum para abrogar o no la constitución pinochetista de 1980.

La rebelión de los excluidos en nuestro país no ocurrió únicamente a través de los movimientos sociales —el caso de los electricistas despojados de su empleo — o la lucha de las comunidades rurales enfrentadas a los proyectos neoextractivistas; en cierto sentido tomó un curso institucional. Carecemos todavía de una sociología acerca de Morena que nos permita realizar comentarios mejor fundamentados sobre la composición social de esta formación política. Hasta el momento estamos en condición de conjeturar que la base de Morena agrupa a clases medias bajas, profesionistas y clases populares relegadas por la oligarquía, las clases medias altas y la tecnocracia en los espacios de la empresa, la administración pública y la academia. Sectores que encontraron obturado el camino del ascenso social, pero que por la lucha política lograron un reconocimiento dentro de sus comunidades y centros de trabajo. La política, igual que en el siglo XX, les ofrece a los cuadros de Morena la oportunidad de remontar un origen desventajoso y consolidar una posición en el nuevo entramado institucional, desplazando a las élites que dirigieron el país con la emergencia del neoliberalismo.

Caso aparte fue el de Brasil, en el cual las clases populares sustraídas de la pobreza con las políticas sociales de Lula dieron la espalda al gobierno petista, cuando el ajuste económico motivado por la crisis canceló su ascenso dentro de la jerarquía social y limitó sus posibilidades de consumo. Los sectores inconformes tomaron la calle en Sao Paulo y Río de Janeiro exigiendo la rebaja de los precios del transporte público, hasta obtener concesiones no sólo económicas sino también políticas por parte de la debilitada presidenta Dilma Rousseff. Esto, sumado al posterior encarcelamiento del obrero metalúrgico para retirarlo de la competencia por la presidencia, pavimentó el camino a Jair Messias Bolsonaro, el exmilitar ultraderechista que actualmente gobierna el gigante sudamericano, artífice de la involución autoritaria en curso. Tal vez, sin embargo, la excarcelación de Lula permita articular una poderosa oposición al régimen de Bolsonaro.

Populismo

En el léxico político contemporáneo resulta difícil encontrar una palabra menos manoseada que populismo. El vocablo reúne una cantidad tan diversa de experiencias políticas verificadas en un arco temporal de dos siglos, que, en lugar de definir un régimen de gobierno y una práctica específica de la política, se vació de contenido y, más todavía, pasó a ser un término peyorativo. Como dice Ernesto Laclau (La razón populista): “el populismo no sólo ha sido degradado, también ha sido denigrado”. Y añade Enzo Traverso (Las nuevas caras de la derecha): “el abuso del concepto de populismo es tan grande que, según creo, ya perdió buena parte de su valor interpretativo”. Sólo un alarde de imaginación permitiría colocar en el mismo saco a las derechas posfascistas representadas por Trump, Orbán, Le Pen y Bolsonaro, con las izquierdas emergentes de Evo Morales, Lula, Pablo Iglesias o López Obrador.

La historiografía estadunidense denominó populistas a los gobiernos de amplia base social encabezados por caudillos carismáticos surgidos en las postindependencias latinoamericanas. Vicente Guerrero (México) y Manuel Isidoro Belzu (Bolivia) entraron en esa categoría. En la Rusia zarista los populistas (naródniki) eran quienes pretendían crear un socialismo agrario con fundamento en la comuna rural, apoyados en las doctrinas de Alexander Herzen y Nikolái Chernyshevski. Para eso tenían que “ir al pueblo”. A los regímenes del Tercer Mundo que incorporaron a las masas populares a la política, realizaron reformas sociales profundas, cimentaron Estados autoritarios que intervinieron en la economía, la sociología política los caracterizó de populistas, con Lázaro Cárdenas a la cabeza, en México; Getúlio Vargas, en Brasil; Juan Domingo Perón, en Argentina; Mustafá Kemal Atatürk, en Turquía. Asimismo, algunas políticas del New Deal roosveltiano y, sin duda, su retórica fácilmente podrían tildarse de populistas en términos contemporáneos: “La nación miraba al gobierno, pero el gobierno miraba a otra parte […] Potentes grupos de presión […] habían empezado a ver al gobierno de Estados Unidos como un mero apéndice de sus propios intereses […] Pero nosotros sabemos que el gobierno del dinero organizado es exactamente tan peligroso como el gobierno del crimen organizado”.

De acuerdo con Marco D’Eramo (“El populismo y la nueva oligarquía”), a partir

de la Guerra Fría el populismo adquirió una denotación negativa cuando se trazó un vínculo conceptual e históricamente arbitrario entre comunismo (estalinista) y fascismo —confrontados desde las entreguerras cuando el fascismo trató de conjurar la revolución social en Europa—, que cultivaron la semilla totalitaria. De allí que autores como Enrique Krauze (El pueblo soy yo) ofrezcan definiciones tan holgadas sobre el populismo en las que caben distintas formas de Estado y regímenes políticos, bastando para acreditarse como tal "el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática para prometer la vuelta de un orden tradicional o el acceso a una utopía posible y, logrado el triunfo, consolidar un poder personal al margen de las leyes, las instituciones y las libertades". Para el historiador mexicano el populismo no remite a una ideología, más bien representa "una forma de poder" basada en la dominación carismática y la oposición binaria, del tipo amigo/enemigo (Carl Schmitt), que Krauze presenta como la división entre "los buenos" y "los malos". Éstas son sus características básicas de acuerdo con el autor de El pueblo soy yo: 1) exalta al líder carismático; 2) es demagógico; 3) fabrica la verdad; 4) maneja discrecionalmente los fondos públicos (variante latinoamericana); 5) reparte de manera directa la riqueza (variante latinoamericana); 6) atiza el odio de clases; 7) moviliza permanentemente a los grupos sociales; 8) fustiga por sistema al "enemigo externo"; 9) desprecia el orden legal; 10) domestica, o cancela, las libertades de la democracia. Visto así, todo populismo deviene en dictadura, por no decir en Terror: su ancestro son los jacobinos, y el teórico, Rousseau.

Menos apocalíptico, Federico Finchelstein (Del fascismo al populismo en la historia) considera que el populismo es "una forma autoritaria de la democracia" que "defiende a un líder nacionalista iluminado que habla y decide por el pueblo. Minimiza la separación de poderes, la independencia y la legitimidad de la prensa libre y el imperio de la ley". "A nivel global —abunda Finchelstein— el populismo no es una patología de la democracia sino una forma política que prospera en democracias particularmente desiguales, es decir, en lugares donde la brecha de ingresos crece y la legitimidad de la representación democrática decrece." Ello ocurre, sostiene Héctor Aguilar Camín (Nocturno de la democracia mexicana), porque el populismo es el reflujo provocado por las modernizaciones truncas, "que destruyen lo viejo sin incorporarlo", excluyendo de los beneficios del desarrollo a "una masa heterogénea, descolocada de sus antiguos referentes: viejos negocios, masas urbanas empobrecidas, minorías étnicas marginadas, antiguos oficios, abundantes restos de la economía tradicional". Esta masa heterogénea demandará la inclusión económica y política

con el objetivo de hacerse de rentas y espacios dentro del Estado, formar parte de las “clientelas de beneficiarios”, las cuales viven a expensas del erario público, “por ello terminan con frecuencia [estos regímenes] en crisis fiscales que se llevan todo lo ganado”. Su discurso suele ser “reivindicativo, pobrista, antioligárquico, anticapitalista, normalmente antinorteamericano. Y siempre antigubernamental”.

La conceptualización neoliberal del populismo lo opone a la democracia, además de que prácticamente omite la acción intencional y concertada de los subalternos. Si en el siglo XIX liberales (y no digamos conservadores) tuvieron reparos hacia el sufragio universal —el cual ganaron las clases populares en la protesta callejera—, en el siglo XX tampoco se avinieron bien con la sociedad de masas. La perspectiva neoliberal desautoriza la política plebeya porque para aquélla el flujo de esta política corre de arriba abajo y las masas son únicamente la materia sobre la que actúa el líder, quien activa a placer a agregados sociales dispuestos a cualquier aventura por enloquecida que sea, incapaces éstos de constituirse en sujetos autónomos. En esta lógica, la elección racional no se considera atributo de las clases populares, antes bien las gobierna la emoción, la ira y el resentimiento. Este planteamiento no sólo es elitista, por ser suaves —“las masas no acumulan la inteligencia, sino la mediocridad” (Gustave Le Bon, Psicología de las masas)—, más que nada es erróneo como lo muestran la sociología histórica (Charles Tilly, Sidney Tarrow) y la historia social (George Rudé, Eric Hobsbawm, E. P. Thompson). Desdeña asimismo la interlocución entre el líder y los agregados sociales: aquél no es el autor de las demandas, es quien las integra y eventualmente las resuelve. Y aquéllas son el objetivo permanente a alcanzar mediante la movilización social.

Las perspectivas de izquierda enfatizan el déficit democrático en las sociedades capitalistas contemporáneas dominadas por oligarquías que gobiernan mediante el poder del dinero con la connivencia de la clase política. Para Boaventura de Sousa Santos (La difícil democracia), lo que se denomina populismo no tiene una relación unívoca con la democracia, pues “puede ser tanto una amenaza a la poca democracia que tenemos como la promesa de una democracia de mayor intensidad, que merecemos”. En este sentido, Nick Srnicek y Alex Williams (Inventar el futuro) señalan que en la democracia liberal realmente existente “las decisiones más importantes de la sociedad están fuera de las manos de las personas comunes”. Lo que actualmente se denomina populismo “es una respuesta —indica José Luis Villacañas (Populismo)— a las propias dimensiones problemáticas que la modernidad encierra y a la crisis social

inevitable que genera bajo su forma presente de globalización neoliberal". Por tanto, no hablamos de un retorno al paraíso perdido autoritario, antes bien, el populismo forma parte del nuevo espacio político. Huelga decir que el propio neoliberalismo se había presentado como la única alternativa histórica viable frente al colapso comunista, además de la "panacea para lograr una sociedad sin fisuras —dice Laclau—, con la diferencia que, en este caso, las soluciones serían aportadas por el mercado y no por el Estado".

El llamado populismo no es entonces causa, sino síntoma de una crisis en la gestión neoliberal de la economía y la política. En cuanto a la primera, la polarización social, la creciente desigualdad, la violencia, la economía criminal, la desposesión de las comunidades, la corrupción, la degradación del ambiente, la precarización del trabajo y la marginación de grandes segmentos de la población (pobres, migrantes, indígenas) son el combustible de la protesta pública que se articula intermitentemente, pero con gran velocidad, fuerza y eficacia. Ejemplo de ello son los Chalecos amarillos, movilizados gracias a la autocomunicación de masas de los movimientos contemporáneos como "plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social" —Manuel Castells (Redes de indignación y esperanza). Con respecto de la segunda, la representación política funge cada vez más como expresión de los intereses privados (del gran capital) que del interés general, no digamos del ciudadano común. En palabras de Tony Judt (Algo va mal), "las instituciones de la república han sido degradadas, sobre todo por el dinero. Peor todavía, el lenguaje de la política se ha vaciado de sustancia y significado". Esta atrofia de la representación política es también razón, aunque no la única, de la reactivación de la política plebeya expresada en las calles.

En el imaginario político neoliberal, el populismo ocupa el lugar del fantasma comunista al que habrá de cerrársele el paso para evitar que acabe con "nuestras libertades", justo cuando las oligarquías financieras, no sujetas a ningún control democrático, cercenan la libertad de las mayorías. Bien señala Wendy Brown (El pueblo sin atributos) que, "en lugar de la promesa liberal de asegurar al sujeto políticamente autónomo y soberano, el sujeto neoliberal no recibe garantía alguna de vida (por el contrario, en los mercados algunos deben morir para que otros vivan) y, por consiguiente, está tan atado a fines económicos que es potencialmente sacrificable a ellos".

La reacción intelectual frente al populismo encierra dos preocupaciones poco explícitas en el discurso acerca de las libertades, que todos suscribimos y se

obtuvieron a través de luchas civiles prolongadas, pues fueron demandas colectivas antes de convertirse en ley. Estas preocupaciones, incluso angustia existencial, son la amenaza a un statu quo que parecía definitivo después del colapso comunista y la globalización neoliberal, un orden en el que el capital no tiene límites para su reproducción, sean éstos los hombres o la naturaleza. La otra bestia negra es la configuración de un horizonte utópico que ofrezca opciones históricas distintas a la de un presente que aspira a perpetuarse hasta el infinito. Anticipándose a la revuelta juvenil de 1968, Herbert Marcuse (El hombre unidimensional) presentó de esta manera el problema: "La sociedad contemporánea parece ser capaz de contener el cambio social, un cambio cualitativo que estableciera instituciones esencialmente diferentes, una nueva dirección del proceso productivo, nuevas formas de existencia humana. Esta contención del cambio social es quizás el logro más singular de la sociedad industrial avanzada". Pensar siquiera que el statu quo puede modificarse fue y continúa siendo el temor fundamental de las oligarquías.

La derecha posfascista

Enzo Traverso distingue cuatro conceptos confundidos en el debate político actual: populismo, fascismo, neofascismo y posfascismo, reservando el último para caracterizar a las derechas extremas del siglo XXI. Tanto el populismo como el fascismo corresponden a un régimen de historicidad caduco, el siglo XIX (populismo) y la primera mitad del siglo pasado (populismo y fascismo), por lo que el historiador italiano los considera conceptos anacrónicos para comprender las derechas actuales. El populismo es, según Traverso, un estilo político, la adjetivación de determinadas actitudes políticas (demagogia), que no se corresponde con una ideología o un régimen político específico en el siglo XXI. El uso contemporáneo del término, indica el autor, resulta problemático, porque el concepto de populismo mutó en un calificativo para descartar a los adversarios políticos que diluye la distinción entre izquierda y derecha dentro del campo político. En América Latina, si bien con un cariz autoritario, el populismo histórico incorporó a las clases populares a la política y desarrolló políticas redistributivas del ingreso, esto es, fue inclusivo a diferencia de los Estados oligárquicos precedentes (pensemos en el Porfiriato). Por su parte, el llamado populismo de derecha contemporáneo —la "enfermedad senil" de la democracia liberal, de acuerdo con Marco Ravelli— es una suerte de "rebelión de los incluidos" que se sienten amenazados por la eventual inclusión (al mercado de trabajo y al cuerpo político) de los inmigrantes, ese otro que asumen enemigo.

El fascismo europeo se configuró como fuerza política en el periodo de entreguerras, en medio de la derrota militar (Alemania) y de una profunda crisis económica (Alemania e Italia), presentándose como una opción frente al comunismo, dentro del movimiento obrero, y con respecto del liberalismo, en la arena política. En ambos países, el fascismo fue estatista, imperialista, militarista y secular, si bien es cierto configuró una especie de "religión política" con un sistema de valores y acervo simbólico propios. El fascismo fue un fenómeno de masas con un consenso activo de éstas, trató de constituir comunidades nacionales o raciales, conformar una civilización nueva y revolucionar el orden existente. No obstante, fue un hecho capitalista, modo de organización de la vida económica con el que el fascismo no pretendió romper, aunque sí negar la democracia liberal: "en Italia —apunta Traverso— acomete contra el Estado liberal que acaba de instaurar el sufragio universal; en Alemania ataca a la

República de Weimar, una de las formas de democracia más avanzadas de Europa; en Francia la atacada es la Tercera República, y en España el franquismo es una reacción contra la Segunda República".

Los neofascismos son tentativas contemporáneas de recuperar los fundamentos originales del fascismo, como lo fue en sus orígenes el Frente Nacional francés (bajo el liderazgo de Jean-Marie Le Pen) o lo son los neonazis en Alemania, Grecia o Ucrania. Y los posfascismos conservan esta matriz fascista (con la excepción de Trump), pero la trascienden al incorporar nuevos elementos en el imaginario de las derechas extremas, además de corresponder a un régimen de historicidad diferente que el fascismo clásico: son formaciones políticas del siglo XXI. En el entorno posfascista no están ya el antagonismo comunista, ni la guerra o la escasez, ni tampoco la disputa por dominar Europa —después de todo, Alemania obtuvo con la Unión Europea lo que no pudo mediante dos guerras mundiales—; antes bien, aquél tiene ante sí los estragos sociales del neoliberalismo, al que no busca derrotar, en todo caso pretende achacar los males presentes a enemigos a modo, pues contiene también una matriz "antifeminista, negrófoba, antisemita y homofóbica". Con una ideología porosa y un discurso antipolítico, que puede tomar elementos de corrientes diversas, a veces contrapuestas, las recetas posfascistas son políticamente reaccionarias, socialmente regresivas y "postulan el restablecimiento de las soberanías nacionales, la adopción de formas de proteccionismo económico y la defensa de identidades nacionales amenazadas".

Fuera de Europa el fascismo se concretó en América Latina, de acuerdo con Traverso; ofrece el caso chileno, aunque habla de los regímenes fascistas latinoamericanos en plural. Tesis discutible porque muchos de ellos, o bien todos, fueron dictaduras militares surgidas de golpes de Estado y no gobiernos emanados de democracias liberales como los fascismos clásicos; tampoco fueron imperiales o estatistas, más que nada conformaron la punta de lanza del proyecto neoliberal en el subcontinente. Habría de incluirse a Bolsonaro como un posible ejemplo latinoamericano del posfascismo o a Vox, la nueva cara de la ultraderecha española liderada por Santiago Abascal Conde, quien rompió en 2013 con el Partido Popular. Vox defiende la unidad de la nación española y la centralización política, es abiertamente antiinmigrante y rechaza el aborto.

El Partido Social Liberal, presidido por Bolsonaro, reúne la matriz fascista (o una variante militarista), las fobias (contra los negros, el feminismo y los homosexuales), la proscripción de los movimientos sociales (los Sin Tierra), el

ataque frontal a los derechos sociales, la alianza con la Iglesia (como el franquismo, si bien con las Iglesias evangélicas), el combate al enemigo comunista (a quien percibe incrustado en el aparato escolar y, por tanto, en la formación de las conciencias), la recuperación de la grandeza perdida desde que los gobiernos civiles reemplazaron a los militares —“Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”—, además de la simpatía con Trump y la disposición de Bolsonaro a convertirse en su aliado estratégico en el Cono Sur. Todo esto sumado a un proyecto económico ultraliberal que quitará regulaciones al capital, privatizará la Amazonia y despojará a los pueblos originarios.

El boyante posfascismo contrasta con el paisaje desolado de la vieja izquierda marxista-leninista confinada en sectas poco operantes en el contexto actual. Y las nuevas izquierdas, que abandonaron la retórica política del siglo XX, si bien hicieron progresos en ganar adeptos e incorporar nuevos referentes discursivos, todavía son presa del “yugo mental instalado en 1989” y permanecen inhabilitadas, “al menos por el momento, de esbozar el perfil de una nueva utopía”. De hecho, el humus posfascista y del islamismo radical fueron —dice Traverso— “las derrotas de las revoluciones en el siglo XX”. En este sentido, “el final del comunismo rompió un tabú y en lo sucesivo los movimientos posfascistas reivindican el estatus de defensores de las clases populares, incluida la clase obrera”. Las coordenadas políticas de hoy en día muestran a la izquierda muy rezagada con respecto de la marea posfascista, por lo que ésta tiene mejores posibilidades de capitalizar la crisis de la política y los costos sociales del neoliberalismo, apuntalada en un discurso ecléctico, simplista, eficaz y movilizador acerca de los problemas contemporáneos, cuyo blanco predilecto son los desposeídos, los migrantes sin derechos y las minorías.

La izquierda en su laberinto

Apuntadas las dificultades que presenta el uso del concepto de populismo para definir la política del siglo XXI, así como las nuevas formas que ha cobrado la derecha, cabría ubicar a López Obrador en el campo político contemporáneo, intentar una caracterización de su régimen o cuando menos de su forma de gobernar. Señalamos que, hasta el momento, éste no ha roto con el Estado posrevolucionario. De hecho, el presidente tabasqueño está reforzando los lazos de la gobernabilidad desanudados durante la alternancia. No hay duda de que los rasgos genéricos del populismo compaginan con los del gobierno de López Obrador (centralización del poder, debilitamiento de los contrapesos institucionales, discurso confrontativo, identificación del pueblo con el líder, cierto desdén por la ley, conflicto con la prensa, etcétera). Sin embargo, existe tal gama de regímenes que presentan estas características en un abanico temporal bastante holgado, además de que se considera un fenómeno común a izquierda y derecha, no obstante que las respectivas políticas puedan ser antagónicas, por lo que considero que pierde especificidad histórica e incluso utilidad analítica. Me quedo entonces con las caracterizaciones del populismo que lo restringen a un estilo político (Traverso), o a una constitución discursiva de lo político caracterizada por oposiciones binarias (Laclau), del tipo de las que enfrentan al pueblo con la élite. Ambas definiciones, sin duda, son perfectamente aplicables al obradorismo.

Ahora bien, ¿el proyecto de López Obrador es de izquierda? En un sentido amplio, sí. El énfasis en la desigualdad, los apoyos a los sectores desfavorecidos y las políticas sociales en general embonan con la perspectiva redistributiva e igualitaria históricamente identificada con la izquierda. Pero la suya es una izquierda desprovista del progresismo que ha acompañado la trayectoria de esta fuerza política, la cual demandó derechos sociales e individuales que beneficiaron al conjunto de la sociedad (el sufragio universal, la regulación del trabajo, la igualdad de género, etcétera). Otra falencia del planteamiento obradorista es que no favorece la organización, autogestión y autonomía de las clases subalternas, componente básico de la tradición de la izquierda, específicamente en su vertiente socialista. Su estatismo suplanta al pueblo —entendido como los subalternos— en cuanto sujeto con vida e intereses propios. Ello le impide sumar a su proyecto a las organizaciones independientes de la

sociedad civil y a las demás izquierdas. Esto último lo refuerza la pretensión "populista" de copar todo el espacio político de la izquierda como la estrategia de las otras fuerzas —pienso en el neozapatismo— de situarse en los márgenes.

Eric Hobsbawm advirtió en los sesenta (¡Viva la revolución!) el desencuentro entre las condiciones de posibilidad de una revolución social en América Latina y la incapacidad de la izquierda socialista para llevarla a cabo. Las fuerzas de ésta y su "apoyo de masas ha sido relativamente insignificante, y raramente, incluso en situaciones revolucionarias, ha podido establecer la iniciativa, y mucho menos la hegemonía, como un movimiento organizado". Esta debilidad estructural la obligó a formar alianzas para tener posibilidad de ganar, de manera tal que "la izquierda latinoamericana ha debido elegir entre una pureza sectaria ineficiente y sacar el mejor partido posible de una serie de malos compañeros: populistas civiles o militares, burguesías nacionales, o lo que fuere". Esto no debería conducir, indicaba el historiador británico, a descartar las transformaciones sociales logradas a partir de esas alianzas indispensables "como insignificantes porque no inciden inmediatamente sobre los movimientos y la política que favorecemos. Tampoco pueden ser rechazados simplemente porque no es seguro si una fuerza política en lugar de otra se beneficiará finalmente de ellas". Muy buena recomendación para calibrar los procesos en curso sin reducir nuestras expectativas como participantes de ellos, más bien para ponderar qué se puede hacer y alcanzar en un momento determinado.

Hemos insistido en que, por sí misma, la izquierda no conforma una mayoría, lo que trae a cuento el tema de las alianzas para poder alcanzar el poder y, sobre todo, gobernar dentro de una representación política fragmentada en minorías. ¿Con quiénes y para qué coaligarse? De entrada, suponemos que lo deseable sería que la izquierda presentara un frente unido en las elecciones e integrara mayorías en los órganos de representación popular, aminorando con ello la dependencia respecto de fuerzas políticas de otros colores. Eso, vimos, no ocurrió en la elección constitucional de 2018, donde un segmento de la izquierda nacional apoyó la opción de la derecha, y otro se sustrajo del proceso comicial al no conseguir el registro de la candidata indígena. Pero la dificultad de entablar alianzas dentro de la izquierda no se reduce a las diferentes estrategias, incluye además la caracterización del adversario (el neoliberalismo, el capitalismo, el imperialismo, el Estado), el sujeto del cambio social (el proletariado industrial, las clases populares o las comunidades indígenas), los medios de organización propuestos (autogestivos, partidarios, con intervención estatal, etcétera). Pesa, por añadidura, la configuración histórica de las izquierdas nacionales, que las

hace más propensas a la acción revolucionaria o a la conciliación interclasista, a la movilización social o a la concertación política y el parlamentarismo.

Si es difícil lograr alianzas entre las izquierdas, no obstante que comparten postulados ideológicos básicos y necesitan fortalecerse para enfrentar a las derechas, generalmente más poderosas, lo es también elegir fuerzas políticas fuera del campo de la izquierda para conformar mayorías. La discusión acerca de la compatibilidad entre fines y medios atraviesa la historia de la izquierda: nunca se resolvió. Sin embargo, entre más compatibles sean ambos aminorará el riesgo de que una minoría iluminada usurpe la voluntad de los demás, o que la dinámica corrosiva de los medios consuma los fines. Peligro parecido conllevan las alianzas con organizaciones políticas fuera del territorio de la izquierda. La social-democracia alemana, la más antigua y poderosa en el mundo, se desdibujó ideológicamente y perdió una parte significativa de su electorado al cogobernar con la derecha cristiana. Al PT brasileño la coalición gubernativa con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (del que forma parte Michel Temer) le costó por lo menos en parte la deposición de Dilma Rousseff, pues este partido conspiró contra la presidenta cuando ésta decidió combatir la corrupción política. En México no existe la vicepresidencia, lo que dificultaría una maniobra política al estilo del gigante sudamericano, pero algunos de los aliados de Morena en las cámaras son contrarios a los principios elementales de la izquierda (el PES) o partidos sin principios (el PVEM). López Obrador habla cotidianamente de éstos, pero sus decisiones políticas son sumamente pragmáticas, lo que obligaría lo menos a transparentar las concesiones realizadas a los aliados para ponderar si el resultado beneficia a los propósitos de la izquierda. Pero, insisto, en la situación actual la izquierda no está en condiciones de gobernar por sí sola, quizá con la excepción de Portugal, donde el socialista António Costa comanda una coalición de izquierda que ha logrado distanciarse de las políticas de austeridad de Bruselas sin castigar el crecimiento económico.

Otro flanco hacia donde pueden extenderse las alianzas de la izquierda es el de los movimientos sociales. Señalamos que Morena surgió en paralelo a los movimientos sociales que se desarrollaron en la alternancia, los cuales contribuyeron al crecimiento del partido/movimiento, si bien éste no germinó en las entrañas de ellos. Asimismo, indicamos que al liderazgo de López Obrador le cuesta trabajo interactuar con grupos que no se subordinan a sus políticas —salvo la CNTE, a la que le ha dado un trato de excepción—, y menos todavía con los que poseen una dinámica autonómica. Tampoco el presidente tabasqueño mantiene interlocución con los dos movimientos sociales que han cobrado mayor

presencia en los últimos años: el feminismo y las luchas ambientalistas. No es descartable, además, que en el trascurso del sexenio aparezcan movimientos en pro y en contra del proyecto obradorista. Ante este escenario habrá de verse si el gobierno adopta una política de apertura, incluso de alianzas puntuales con los movimientos sociales, los confronta u opta por la cooptación, al viejo estilo del régimen posrevolucionario. El asunto no es menor porque la dialéctica entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales podría activar formas de política y de gestión pública no consideradas aún por la nueva administración, además de fortalecerla frente a sus adversarios.

Toda formación política requiere de intelectuales que articulen las ideologías, los proyectos y el debate público. La intelectualidad de izquierda menguó considerablemente después de la disolución de los partidos comunistas, problema que se ahondó por la aversión a la teoría, el pragmatismo, la deficiente formación intelectual y el provincianismo de los militantes procedentes de las corrientes de la izquierda nacionalista que se integraron al PRD y Morena. Tampoco la izquierda comunista realizó un balance de la derrota sufrida con la implantación de la hegemonía neoliberal y el desmantelamiento del socialismo del Este, resultándole cómodo disfrazar estas carencias apelando a la Revolución mexicana o a las consignas de antaño. En consecuencia, la izquierda no reprodujo suficiente ni satisfactoriamente su núcleo intelectual, quedando disminuida para contender en la esfera pública con la inteligencia neoliberal. Cabe añadir a esto el virtual monopolio de la esfera pública ejercido por el pensamiento único en alianza con los medios privados de comunicación, el Estado administrado por los tecnócratas y el capital global. Este déficit es evidente en la gestión de López Obrador y constituye un escollo para crear una contrahegemonía; lastra también la elaboración de proyectos de mayor calado que los concebidos por la mente ecléctica y el referente local del presidente tabasqueño. Las "benditas redes sociales" pueden ser un apoyo eficiente en la política callejera, pero de ninguna manera compensan la ausencia del pensamiento sistemático.

Las experiencias de la izquierda internacional pueden enriquecer la reflexión y dar densidad a los planteamientos obradoristas. Portugal, Estados Unidos y Reino Unido proporcionan ideas sugerentes. Después del rescate de la troika —Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional— en 2011 por un monto de 90,000 millones de dólares, con las consecuentes políticas de ajuste que desplomaron los salarios y duplicaron el desempleo, la coalición de izquierda que gobierna el país lusitano (socialistas, comunistas y el

bloque de izquierda), desde 2015, aumentó el salario mínimo, incrementó las pensiones, congeló el impuesto al valor agregado (IVA) de los artículos básicos y aumentó los días de asueto, lo cual incentivó el crecimiento económico y redujo el déficit presupuestal. La expansión económica, diversificada sectorial y geográficamente, no provino del incremento del gasto público sino de las exportaciones activadas por la inversión privada (nacional y extranjera) y el crecimiento de la competitividad, además de subsidios focalizados, financiamiento y créditos fiscales a empresas pequeñas y medianas. Como señaló en una entrevista el primer ministro Costa: “El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de austeridad, terminan por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”. En consecuencia, agregó, “diseñamos otra opción para reemplazar la austeridad, con metas como un mayor crecimiento y más y mejores empleos” (The New York Times, 26 de julio de 2018).

Bernie Sanders abrió un frente de izquierda en el Partido Demócrata en la elección presidencial de 2016, reconociéndose como un “socialista democrático” opuesto a las políticas de Wall Street. La expectativa de un New Deal actualizado al siglo XXI cobra fuerza en varios candidatos situados en la izquierda demócrata que disputan la nominación de su partido para los comicios de 2020. La palabra socialista, anatema desde los años oscuros del macartismo, no asusta ya a un segmento de la juventud estadunidense que aspira a políticas redistributivas por parte del Estado que aminoren la desigualdad y provean de servicios universales a la población (salud, educación). Trump ha puesto en la mira de sus diatribas a quienes sostienen esta tesis que contradice la lógica del capitalismo desregulado, a los que pretenden acabar con “nuestras libertades”. Esta izquierda abandonó el vanguardismo de las organizaciones políticas de los sesenta, apelando a la gente común para lograr un cambio catalizado a través de las urnas. Las propuestas de transformación del statu quo incorporan, además de las políticas redistributivas, la coparticipación de los trabajadores en la gestión de las empresas, mayor gravamen fiscal a las fortunas medias y altas, más el incremento del gasto social (Patrick Iber, “El resurgimiento socialista en Estados Unidos”).

Los laboristas británicos recuperaron la identidad de izquierda bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn, amigo personal de López Obrador. El proyecto económico del laborismo contiene ideas imaginativas, y no las recetas de mediados del siglo XX, sobre cómo crear empresas públicas en los sectores estratégicos privatizados en el neoliberalismo (ferrocarriles, agua, alcantarillado, correos, energía), canjeando las inversiones existentes por deuda pública, además de

reemplazar la educación privada con la educación pública con el propósito de aminorar las desigualdades sociales. A Corbyn le gusta definirse como partidario de la “socialdemocracia radical”. Cuando el líder laborista habla de la propiedad pública, su propuesta plantea abandonar “los modelos centralizados y remotos de las décadas de 1940 y 1950” en favor de “modelos de propiedad que involucren a los trabajadores y a los consumidores, basados en principios cooperativos”. Esta política incluye la reforma del fondo de pensiones y se fondearía con un incremento del impuesto a la renta a los ingresos más elevados y a las grandes empresas (Robin Blackburn, “El proyecto Corbyn”).

Mirar hacia las izquierdas internacionales, para tomar ideas frescas y aprender de los costosísimos errores, sacaría del ensimismamiento al proyecto obradorista. La experiencia de la izquierda nacional es insuficiente para enfrentar el desafío mayúsculo que supone encauzar a México en una senda distinta de la que lo condujo a la crisis presente, esbozar un proyecto viable de justicia social en un orden global pautado por el neoliberalismo, con las derechas radicales en ascenso y las izquierdas replegadas. El fracaso del gobierno de López Obrador tendría saldos elevadísimos para el país y la izquierda nacional. La esperanza de los muchos cuando se ve burlada corre en direcciones inciertas, a veces a contraflujo de los caminos originales. Un proceso tan largo de acumulación de fuerzas de las clases populares, alineado en un objetivo preciso que permitió ganar la presidencia y las cámaras en 2018, no merece dilapidarse por la falta de lucidez de la izquierda. No olvidemos ni un minuto que las nuevas derechas son despiadadas.



Carlos Illades (1959) es doctor en Historia por El Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, investigador nacional nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido de la uam. Ha recibido varios premios, entre otros, el Premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor, entre otros títulos, de Hacia la república del trabajo: El mutualismo artesanal del siglo XIX, Las otras ideas. Estudio sobre el primer socialismo en México, 1850-1935, Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social (traducido al inglés), El marxismo en México. Una historia intelectual, En los márgenes. Rhodakanaty en México, La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México, 1968-1989 y El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México, estos dos últimos publicados por Océano.

VUELTA A LA IZQUIERDA

La Cuarta Transformación en México:

Del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría

Diseño de portada: Music for Chameleons / Jorge Garnica

Fotografía de Carlos Illades: cortesía del autor

Homero 1500 - 402, Col. Polanco

Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México

info@oceano.com.mx

www.oceano.com.mx

Primera edición en libro electrónico: enero, 2020

eISBN: 978-607-557-119-5

Libro convertido a ePub por Capture, S. A. de C. V.

Índice

Portada

Página de título

Dedicatoria

Epígrafe

Prólogo

1. La Primavera mexicana

El fenómeno amlo

La transición light

Un contexto adverso

Maldita vecindad

2. La honrosa medianía

La mafia del poder

El pueblo bueno

El rescate de lo público

La utopía conservadora

3. La república plebeya

Estado y mercado

Los olvidados

El eclipse de las élites

4. Más Estado, menos instituciones

Del movimiento al partido

El Gran Legislador

Al diablo con sus instituciones (liberales)

¿El fin de la guerra o la guerra sin fin?

5. Primero los pobres

Trabajo, Familia, Patria

El ciudadano-derechohabiente

El conflicto social

Igualdad sin emancipación

6. La Cuarta Transformación

La historia maestra de la vida

Tres antes de la Cuarta

¿Cambiar para seguir igual?

7. La política del siglo XXI

La rebelión de los excluidos

Populismo

La derecha posfascista

La izquierda en su laberinto

Datos del autor

Página de créditos